

REVISTA ENCUENTROS LATINOAMERICANOS (ENCLAT)

Equipo editorial

Dirección y edición responsable

Susana Dominzain, *Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos (CEIL)*
«Profesora Lucía Sala», *Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE)*,
Universidad de la República (Udelar), Uruguay

Consejo editorial

Yamandú Acosta, *Universidad de la República, Uruguay*

Alcides Beretta Curi, *Universidad de la República, Uruguay*

Susana Dominzaín, *Universidad de la República, Uruguay*

Baldomero Estrada, *Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile*

Juan Nuez, *Universidad de La Laguna, España*

Silvia Ospital, *Universidad Nacional de Quilmes, Argentina*

Eugenia Scarzanella, *Università degli Studi di Bologna, Italia*

Comité ejecutivo editorial

Yamandú Acosta, *Universidad de la República, Uruguay*

Alcides Beretta Curi, *Universidad de la República, Uruguay*

Luisina Castelli, *Universidad de la República*

Susana Dominzaín, *Universidad de la República, Uruguay*

Gustavo Remedi, *Universidad de la República, Uruguay*

Marcelo Rossal, *Universidad de la República, Uruguay*

Susana Rostagnol, *Universidad de la República, Uruguay*

Marisa Ruiz, *Universidad de la República, Uruguay*

Mariana Viera, *Universidad de la República, Uruguay*

Karen Wild, *Universidad de la República*

Gestión integral del proceso editorial

Daniel Michelazzo

Gestión OJS y producción editorial

Gerardo Ribero

Equipo de la Unidad de Comunicación y Ediciones, FHCE, Universidad de la República

Comité académico

Sección Pensamiento, sociedad y democracia

RESPONSABLE: Yamandú Acosta

Miguel Andreoli, *Universidad de la República, Uruguay*

Waldo Ansaldi, *Universidad de Buenos Aires, Argentina*

Adriana Arpini, *Universidad Nacional de Cuyo, Argentina*

Hugo E. Biagini, *Universidad Nacional de Lanús*

Carmen Bohórquez, *Universidad del Zulia, Venezuela*

Raúl Fonet Betancourt, *Universidad de Bremen, Alemania*

Ana Esther Ceceña, *Universidad Nacional Autónoma de México, México*

Horacio Cerutti Guldberg, *Universidad Nacional Autónoma de México, México*

Pablo Guadarrama González, *Universidad Central «Marta Abreu», Las Villas Santa Clara, Cuba*

Franz J. Hinkelammert, *Universidad Nacional Autónoma, Heredia, Costa Rica*

Jorge Lanzaro, *Universidad de la República, Uruguay*

Susana Mallo, *Universidad de la República, Uruguay*

Álvaro B. Márquez-Fernández, *Universidad del Zulia, Venezuela*

Constanza Moreira, *Universidad de la República, Uruguay*

Rodrigo Páez Montalbán, *Universidad Nacional Autónoma de México, México*

Álvaro Rico, *Universidad de la República, Uruguay*

Ricardo Salas Astrain, *Universidad Católica de Temuco, Chile*

Robinson Salazar Pérez, *Universidad Autónoma de Sinaloa, México*

Alejandro Serrano Caldera, *Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Nicaragua*

Jorge Vergara Estévez, *Universidad de Chile, Chile*

Sección Inmigración, estados, empresas, ciencia y tecnología

RESPONSABLE: Alcides Beretta Curi

María Inés Barbero, *Universidad de San Andrés, Argentina*

Baldomero Estrada, *Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile*

Emilio Franzina, *Università degli Studi di Verona, Italia*

Vania Heredia, *Universidade de Caxias do Sul, Brasil*

Raúl Jacob, *Universidad de la República, Uruguay*

José Nieto Sánchez, *Universidad Autónoma de Madrid, España*

Sonia Pérez Toledo, *Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México*

Vicente Pinilla, *Universidad de Zaragoza, España*

Rodolfo Porrini, *Universidad de la República, Uruguay*

Eugenia Scarzanella, *Università degli Studi di Bologna, Italia*

Ercole Sori, *Università Politecnica delle Marche, Italia*

Judit Sutz, *Universidad de la República, Uruguay*

Sección Estudios de Género

RESPONSABLE: Marisa Ruiz

Dora Barranco, *Universidad de Buenos Aires, Argentina*

Elizabeth Jelin, *Universidad Nacional Gral. Sarmiento, Argentina*

María Ligia Quartim, *Universidad Estatal de Campinas, Brasil*

Donna Guy, *Ohio State University, Estados Unidos*

Anne Pérotin-Dumon, *Francia*

Eugenia Scarzanella, *Università degli Studi di Bologna, Italia*

Rosario Aguirre, *Universidad de la República, Uruguay*

Sección Estudios Agrarios

RESPONSABLE: Alcides Beretta Curi

Giuliana Biagioli, *Università di Pisa, Italia*

Sandra Carreras, *Instituto Iberoamericano de Berlín, Alemania*

Josep Colomé Ferrer, *Universidad de Barcelona, España*

Noemí Girbal-Blacha, *Universidad Nal. de Quilmes, Argentina*

Julio Djenderedjian, *Universidad de Belgrano, Argentina*

Lucia Lewowicz, *Universidad de la República, Uruguay*

José Miguel Martínez Carrión, *Universidad de Murcia, España*

María Inés Moraes, *Universidad de la República, Uruguay*

Benjamín Nahum, *Universidad de la República, Uruguay*

Juan Luis Pan-Montojo, *Universidad Autónoma de Madrid, España*

Claudio Robles Ortiz, *Universidad de Santiago de Chile, Chile*

Steve Stein, *University of Miami, Estados Unidos*

Vanderlei Vazelesk Ribeiro, *Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Brasil*

Sección Estudios de la Cultura

RESPONSABLE: Susana Dominzain

Hugo Achugar, *Universidad de la República, Uruguay*

Rubens Bayardo, *Universidad de Buenos Aires, Argentina*

Georgina Torello, *Universidad de la República, Uruguay*

Lía Calabre, *Fundación Rui Barboza, Río de Janeiro, Brasil*

María Inés de Torres, *Universidad de la República, Uruguay*

Luis Alberto Quevedo, *FLACSO, Buenos Aires*

CONTENIDO

PRESENTACIÓN. USOS, POLÍTICAS DE DROGAS Y VIDA EN LAS CALLES LATINOAMERICANAS <i>María Noel Curbelo, Luana Malheiro, Marcelo Rossal</i>	1
Acompañe, no castigue. Aportes y reflexiones desde un colectivo de la sociedad civil para promover el acompañamiento a las personas en situación de calle que usan drogas. <i>Rocío del Pilar Deheza</i>	6
El abordaje pentecostal al consumo problemático de drogas. Fragmentos de una experiencia etnográfica en Montevideo <i>Magdalena Milsev Santana</i>	32
«Trinchera de cuidados». Formas de vivir, convivir y cuidar en colectivo en situación de calle <i>Alejandro Guevara, Tacuabé González</i>	57
Etnografía de um coletivo voltado à geração de renda para mulheres cis e transgênero na Cracolândia <i>Ygor Diego Delgado Alves, Pedro Paulo Gomes Pereira</i>	73
No meio da pandemia tinha uma pedra? Uma análise das políticas para a população em situação de rua no contexto pandêmico brasileiro <i>Kíssila Teixeira Mendes, Pedro Henrique Antunes da Costa</i>	96
Gestando e gerindo a vulnerabilidade de mulheres em situação de rua: Articulações entre gênero, trajetória de rua, drogas e maternidades <i>Ariana Oliveira Alves, Taniele Rui</i>	118

PRESENTACIÓN.

USOS, POLÍTICAS DE DROGAS Y VIDA EN LAS CALLES LATINOAMERICANAS

María Noel Curbelo

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República

Luana Malheiro

Programa de posgrado en Ciencias Sociales, Universidad Federal de Bahía y Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República

Marcelo Rossal

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República

El uso de drogas y la vida en calle presentan una multiplicidad de factores que no suponen una relación lineal entre ambas situaciones, incluso cuando hay un consumo intenso de pasta base de cocaína. Así como puede ocurrir que un usuario de pasta base pueda tener momentos de situación de calle, también hay casos en los que el uso de esa sustancia puede iniciarse en la situación de calle, y también en la calle se construyen otras formas de cuidado, de obtener provisión económica, de atravesar transformaciones vitales relevantes como iniciar un tratamiento o un cambio en las creencias religiosas.

Los artículos de este dossier abordan los usos de drogas y la situación de calle desde diversas perspectivas y en distintos escenarios; muestran las complejidades que conllevan, las discusiones morales alrededor del uso de sustancias, la criminalización de sus usuarios y las violencias que sufren; los efectos de las políticas prohibicionistas, las medidas con las que se trata a las sustancias y a sus usuarios, que suponen una fuerte vinculación entre el consumo de drogas y la extrema precariedad de la vida a la intemperie. También, estos artículos abordan los múltiples agenciamientos de estos sujetos, las decisiones colectivas de cuidado propio y ajeno, además de los diversos factores que hacen del cuidado un espacio de transformación e incluso de disputa, por ejemplo, sobre atención a la salud o estrategias para la obtención de un techo.

Por ejemplo, la reducción de riesgos y daños tiene, entre sus bases fundacionales, el cuidado de los usuarios de sustancias en tanto derecho. Gestionar este cuidado desde esa perspectiva en un mundo aún hoy mayoritariamente prohibicionista no resulta una tarea fácil. Son diversos los planos de vulnerabilidad que se activan cuando se cuida y el uso de drogas es parte de un ensamblaje que fusiona género, raza, maternidades, acceso a la salud, estigma, criminalización, pobreza, formalidad laboral y tasas de educación. Sobre todos estos asuntos

versan los artículos que presentamos en el dossier. Dossier que se publica en momentos en que las políticas de drogas oscilan, tanto en la región como en Uruguay, entre la crítica del prohibicionismo, la reducción de daños y el cuidado de los usuarios junto con proyectos de internación compulsiva. Asistimos a una oscilación entre desafiar al prohibicionismo, como con la Ley de Regulación y Control del Cannabis, o criminalizar y penalizar radicalmente a quienes usan drogas ilícitas en la situación de mayor vulnerabilidad.

En convivencia con un cuidado basado en el tutelaje de estos usuarios, el Estado también promueve mecanismos de desangenciamiento de estas personas que se entiende que «no pueden con sus vidas» y para quienes el consumo problemático vinculado a cuestiones delictivas parece ser el único camino posible. Vinculadas a esto, existen fuertes iniciativas de internación compulsiva que adhieren a esta incapacidad del usuario de decidir sobre su consumo.

A esto se le suman otros agentes de tratamiento de usuarios de sustancias como lo son algunas instituciones religiosas que, a diferencia del Estado, incorporan con eficiencia a usuarios de drogas en sus espacios. Además, que estas instituciones tengan un relato propio estigmatizador de las prácticas de consumo y promuevan la total abstinencia se contraponen con la idea de cuidados que sostienen otros programas, como los de reducción de riesgos y daños y con la propia laicidad del Estado, que debe encargarse de la protección de estos sujetos de mayor vulnerabilidad. Es importante afirmar la reducción de riesgos y daños como un modo de cuidado que promueve la cogestión del cuidado con las personas usuarias de sustancias, a partir de la construcción conjunta de proyectos terapéuticos que puedan generar autonomías posibles dentro de cada trayectoria de vida y situación social.

La imposición de un modelo de abstinencia, incluso en servicios ofrecidos por el Estado, se presenta como una barrera de acceso al tratamiento por consumo problemático de drogas, en tanto muchos usuarios y usuarias no consiguen alcanzar la abstinencia sin ayuda técnica. La reducción de riesgos y daños es una potente herramienta usada en nuestra región, tanto en la prevención como en el tratamiento, que permite acuerdos terapéuticos, caminos posibles para la construcción del deseo de los sujetos y formas subversas (Sepúlveda, 2011) del cuidado de sí y de los otros. Orientada por la radicalidad de la construcción del cuidado compartido y por una gramática basada en los derechos humanos, la reducción de daños también invita a la conciencia crítica en relación con modelos tutelares e impositivos de «cuidado» que reproducen el modelo prohibicionista de control de la subjetividad y los cuerpos de quienes usan drogas.

En el artículo de Rocío del Pilar Deheza, vemos cómo algunas organizaciones de la sociedad civil han sido fuertes impulsoras de otras formas de cuidado respecto a los usuarios de

sustancias, no solo a niveles locales, sino también globales, como ocurre con la campaña *Apoye, no castigue*. La militancia que se transforma también en acompañamiento de estos usuarios, sobre todo de quienes padecen una mayor precariedad económica, se transforma, en estas organizaciones, también en cuidados.

La dupla usuario problemático de sustancias-situación de vivir en la calle extrema las violencias cotidianas y los cuidados se ligan a cuestiones puntuales de acompañamiento o a la escucha activa que valida a estas personas como interlocutores, cosa que muchas veces la sociedad, con el estigma que cargan, no hace. El posible paso por actividades delictivas y su castigo consecuente, además de la inmersión en mercados ilegales, la falta de vivienda, comida y baja inserción laboral y educativa de estas personas, hace del cuidado una forma paliativa de tratamiento al reconocer sus agencias como sujetos de derechos y autonomía en la decisión de seguir usando esas sustancias. Al momento de querer «rescatarse» las opciones del Estado se basan en el tutelaje, la criminalización y el estigma que hacen inaccesible la atención en ciertas instituciones médicas que deberían cuidar la salud de estos usuarios. Las cuestiones morales implicadas en el discurso médico-legal que enfoca en sustancias tan estigmatizadas como la pasta base reducen las posibilidades de que estos sujetos encuentren salidas para sus problemas bajo alguna forma de cuidado estatal o mediante organizaciones que trabajan tercerizando funciones estatales.

Entre las formas en las que actúa la cuestión moral entre los usuarios problemáticos de sustancias, las cuestiones de género son fundamentales de observar. Las mujeres usuarias de sustancias son hipersexualizadas y moralizadas, y eso se maximiza si son usuarias de pasta base de cocaína y asumen una forma extrema del estigma si se trata de madres.

El trabajo etnográfico de Magdalena Milsev trae cuestiones vinculadas al paso de mujeres en dispositivos de ONG neopentecostales que, desde una perspectiva religiosa, abordan el uso problemático de sustancias. Trabajar con los relatos de estas mujeres también puede ser parte de un cuidado etnográfico en el cual se enmarca la autora. En estos relatos de conversión, también hay prácticas de cuidado propio y de los demás, cuestión que en mujeres se puede vislumbrar mejor por la fuerte interpelación moral que reciben durante los períodos de uso intensivo de sustancias. Estas ONG les proponen a las mujeres una estancia de recuperación mediante una adhesión a sus valores religiosos esporádica o más sostenida en el tiempo. La gratuidad y el fácil acceso a estos dispositivos hacen que estas mujeres encuentren un espacio en momentos en que las crisis morales las superan y encuentran allí formas de supervivencia.

En relación con los cuidados colectivos, el artículo de Alejandro Guevara y Tacuabé González nos muestra una forma organizada no solo para cuidarse, sino para lograr llevar adelante

una vida con la dignidad de las decisiones propias, algo en que las instituciones del Estado y otras de carácter religioso muchas veces no tienen. Se trata de un colectivo autogestionado por personas en situación de calle: Ni Todo Está Perdido (NITEP). Dentro de este colectivo, la llamada *Trinchera de Cuidados*, en la que profundiza el artículo, trata al cuidado como un espacio también disputado entre los integrantes de NITEP, los técnicos y la propia política pública que violenta a estas personas en la ausencia de un espacio colectivo de diálogo y puesta en común de saberes en torno al cuidado de otros y el autocuidado. En este contexto, la Trinchera de Cuidados emerge como una forma de acompañar estos saberes y tenerlos en cuenta a la hora de cuidar «desde afuera», así como entender que los cuidados son parte también de compartir la vida con otros y pueden constituirse como un mecanismo de transformación social.

Para el caso de uso de sustancias, vida en calle y cuidados en Brasil, se presentan tres artículos que muestran estos complejos entramados en el país vecino. En el caso del trabajo de Ygor Delgado y Pedro Paulo Gomes sobre el Colectivo Tiene Sentimiento (CTS), se muestra, mediante una metodología etnográfica, la importancia para mujeres cis y transgénero de un espacio de cuidado y de generación de ingresos mediante un taller de costura que no excluye a quienes usan sustancias, generando así una reducción de los riesgos y daños que puede acarrear este consumo en un sitio como lo son las llamadas *cracolândias*. Este colectivo trasluce la importancia de un espacio de trabajo que transmite a estas mujeres prácticas de autocuidado respecto al uso de sustancias por fuera del horario laboral compartido en el espacio de costura del CTS. El trabajo también trata las vulnerabilidades que conlleva el uso de sustancias como el crack y la participación en el mercado ilegal de esta sustancia por parte de personas transgénero. El colectivo resulta de enorme importancia para estas personas que ven en el trabajo y el espacio un lugar cotidiano compartido de cuidado, distinto a la violencia que sufren en las calles, no solo por el propio mercado ilícito, sino también por las políticas destinadas a su castigo.

El otro trabajo desde Brasil, de Kíssila Teixeira Mendes y Pedro Henrique Antunes da Costa, trae a cuento un importante vínculo entre la pandemia y la situación de las personas en calle en ese país. El higienismo que segregó a estas personas se profundizó durante y luego de las emergencias sanitarias impuestas por la pandemia de covid-19 desde principios de 2020. Así, la atención a personas sin techo y usuarias de drogas se vio afectada en forma incremental por el clasismo y el racismo, que fomenta en forma continua la exclusión de estas personas, que acaban siendo tratadas como «piedras en el camino», objetos a quitar del ámbito público.

Por su parte, el artículo de Ariana Alves y Taniele Rui pone el foco en cuestiones relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos de mujeres madres en situación de calle y pobreza

extrema. A partir de la presentación de casos de retiro compulsivo de bebés de madres en situación de calle y consumo de drogas en Belo Horizonte, las autoras problematizan las nociones de riesgo, vulnerabilidad y cuidado en el contexto de un campo discursivo de disputa sobre el derecho a la maternidad. La criminalización y la responsabilización de las mujeres que son madres por parte del Poder Judicial se superpone con las desigualdades raciales, socioeconómicas y de género que signan históricamente la realidad brasileña. La reproducción y la maternidad enfocadas en el artículo son objeto de una disputa moral y política en torno a los modelos ideales de la vivencia materna de gestar y cuidar. En este sentido, las autoras presentan las moralidades en juego en distintos actores políticos en la disputa por los derechos reproductivos, produciendo nuevos sujetos de derechos y gramáticas de lucha, en un contexto brasileño marcado por el fortalecimiento de las agendas reaccionarias antifeministas y neoliberales.

Referencias

- Sepúlveda, M. (2011). *El riesgo como dispositivo de gobierno en el campo de las drogas: exotización, vicio y enfermedad*. (Tesis doctoral. Dept. d'Antropologia, Filosofia i Treball Social. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona). <http://hdl.handle.net/20.500.11797/TDX1031>

ACOMPañE, NO CASTIGUE.

APORTES Y REFLEXIONES DESDE UN COLECTIVO DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA PROMOVER EL ACOMPañAMIENTO A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE QUE USAN DROGAS.

SUPPORT, DON'T PUNISH. CONTRIBUTIONS AND REFLECTIONS FROM A
CIVIL SOCIETY COLLECTIVE TO PROMOTE SUPPORT FOR HOMELESS PEOPLE
WHO USE DRUGS.

ACOLHA, NÃO PUNA. CONTRIBUIÇÕES E REFLEXÕES DE UM COLECTIVO DA
SOCIEDADE CIVIL PARA PROMOVER O ACOMPANHAMENTO A MORADORES
DE RUA QUE USAM DROGAS.

*Rocío del Pilar Deheza*¹

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. rociodeheza@gmail.com

Recibido: 17/6/2022 | Aceptado: 13/9/2022

¹ Licenciada en Geografía (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires). Diplomada de Posgrado en Políticas de Drogas, Regulación y Control (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República [Udelar]). Maestranda en Ciencias Humanas opción Estudios Latinoamericanos (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Udelar). Becaria de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Docente de las Facultades de Ciencias, y de Humanidades y Ciencias de la Educación, Udelar.

Resumen: Desde 1987, la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito celebra cada 26 de junio el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.

Como respuesta, desde 2013, numerosas organizaciones de la sociedad civil participan cada 26 de junio de la campaña por el Día de Acción Global *Support, don't punish*, para promover reformas a las políticas de drogas prohibicionistas y abstencionistas. Imaginario 9 es un colectivo de la sociedad civil de Uruguay conformado por personas usuarias o vinculadas con drogas que trabaja el uso de drogas desde una perspectiva de reducción de daños, con el objetivo de generar incidencia política para acabar con el paradigma prohibicionista y abstencionista. En 2018, Imaginario 9 se sumó a la campaña *Support, don't punish* abordando la estigmatización y criminalización de las personas usuarias de pasta base de cocaína que se encuentran en situación de calle o son usuarias de refugios en la ciudad de Montevideo. El objetivo de este artículo es recuperar la experiencia de Imaginario 9 en la campaña *Acompañe, no castigue y reflexionar* en torno a ella. Experiencia vivida en primera persona, por ser la autora del artículo integrante de este colectivo. Me propongo, además de compartir las voces de las personas protagonistas de esta campaña, quienes dan cuenta de experiencias que vinculan drogas, calle, violencias y cuidados, y hacer una relectura de esta experiencia militante, para reflexionar sobre el rol de la sociedad civil organizada y su participación en estas campañas globales.

Palabras clave: acompañamiento; activismo-militancia; calle; castigo; drogas, financiamiento

Abstract: Since 1987, the United Nations Organization against Drugs and Crime celebrates every June 26 the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking.

In response, since 2013, many civil society organizations participate every June 26 in the campaign for the Global Day of Action Support, *don't punish* to promote reforms to prohibitionist and abstentionist drug policies.

Imaginario 9 is an Uruguayan civil society collective made up of people who use and/or are linked to drugs that works on drug use from a harm reduction perspective, with the objective of generating political advocacy to end the prohibitionist and abstentionist paradigm. In 2018, Imaginario 9 joined the *Support, don't punish* campaign, by addressing the stigmatization and criminalization of users of cocaine based paste, who also are homeless and/or are users of shelters in the city of Montevideo.

The aim of this article is to recover the experience of Imaginario 9 in the *A Support, don't punish* campaign and to reflect on it.

This experience is lived in first person, as the author of the article is a member of this collective. In addition to share the voices of the protagonists of this campaign, who give account of experiences that link drugs, street, violence and care, I intend to make a re-reading of this militant experience, to reflect on the role of organized civil society and its participation in these global campaigns.

of this militant experience, to reflect on the role of civil society organization and its participation in these global campaigns.

Keywords: support; activism-militancy; street; punishment; drugs, financing

Resumo: Desde 1987, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime celebra cada 26 de junho o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas.

Em resposta, desde 2013, numerosas organizações da sociedade civil participam cada 26 de junho da campanha pelo Dia de Ação Global *Acolha, Não Puna*, para promover reformas nas políticas de drogas proibicionistas e abstencionistas.

Imaginario 9 é um grupo da sociedade civil no Uruguay constituído por pessoas que usam e/ou estão ligadas as drogas, que trabalha o uso de drogas a partir de uma perspectiva de redução de danos, com o objetivo de gerar influência política para acabar com o paradigma proibicionista e abstencionista. Em 2018, Imaginario 9 aderiu à campanha *Acolha, Não Puna*, que aborda a estigmatização e criminalização de usuários de pasta base de cocaína, moradores de rua e/ou usuários de abrigos na cidade de Montevideo. O objetivo deste artigo é recuperar a experiência do Imaginario 9 na campanha *Acolha, Não Puna* e reflectir sobre ela. Experiência vivida em primeira pessoa, por ser a autora do artigo membro de Imaginario 9. Proponho, além de compartilhar as vozes dos protagonistas desta campanha, que dão conta de experiências que vinculam drogas, rua, violência e cuidado, e fazer uma releitura dessa experiência militante, reflectir sobre o papel da sociedade civil organizada e a sua participação nestas campanhas globais.

Palavras-chave: acompanhamento; ativismo-militância; rua; punição; drogas, financiamento

Introducción

Recientemente en términos históricos se habla de una «guerra contra las drogas»; declarada en 1971 por el presidente estadounidense Nixon, alcanzó su auge cuando el entonces presidente estadounidense Reagan atendió a esta cuestión como un objetivo urgente de Seguridad Nacional. Durante estas décadas se conformó el régimen convencional de control de drogas² y se promulgaron leyes nacionales sobre drogas.

En el contexto internacional de la Doctrina de Seguridad Nacional, de «guerra contra las drogas», y en un contexto regional y nacional de derrumbe del Estado de Derecho, se promulgó en Uruguay el Decreto-Ley n.º 14.294, del 31 de octubre de 1974. Este Decreto-Ley, promulgado en plena dictadura cívico-militar, brinda la estructura normativa básica de la legislación nacional sobre drogas, ya que no ha sido sustituido, sino modificado por la legislación posterior (leyes n.º 17.016, 19.007, 19.172, 19.513) (Silva Forné, 2016).

Rafael Bayce (2012) afirma que entrada la década de 1980 se construyeron nuevos motivos para intervenir, reprimir, derribar garantismos legales e imponer miedos en la población; la Doctrina de la Seguridad Nacional fue sustituida por la Doctrina de los Conflictos de Baja Intensidad, basada en policías y guardias nacionales, apelando como excusa para el fichaje, estigma e intervención a la magnificación cuantitativa y a la dramatización cualitativa de problemas públicos, principalmente aquellos vinculados con drogas, delincuencia y violencia.

La mirada securitista en torno a las drogas se continuó profundizando con el correr de los años. El término «narcoterrorismo» es una síntesis de los postulados de la actual Doctrina de la Seguridad Global (Bayce, 2012).

Tenemos entonces que el «problema» de las drogas ha sido abordado desde hace ya 50 años como una cuestión vinculada al gobierno de las poblaciones, poniendo énfasis en las nociones de seguridad, peligro y riesgo. Así, el tratamiento internacional otorgado a la cuestión de las drogas ha estado encuadrado en la sanción de instrumentos legales de carácter punitivo, represivos y securitistas que no tuvieron éxito en alcanzar un mundo sin drogas (Bewley-Taylor, 2012; Pérez Correa y Youngers, 2014; Thoumi, 2009). Por el contrario, abunda la literatura que indaga en los motivos y consecuencias del fracaso de la «guerra contra las drogas» y del paradigma prohibicionista y abstencionista (Blickman y Jelsma, 2009; Metaal y Youngers, 2010).

2 Los instrumentos de derecho internacional que conforman el régimen convencional de control de drogas son la Convención Única de Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961 (enmendada por el Protocolo de 1972), la Convención de Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 (Silva Forné, 2016).

La Resolución 42/112 de la Asamblea General de la ONU, del 7 de diciembre de 1987, definió celebrar cada 26 de junio el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, con el objetivo de generar acciones que apunten a alcanzar un mundo libre del uso indebido de drogas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) selecciona cada año un lema para este Día Internacional y lanza una campaña anual para sensibilizar a la opinión pública. Algunos de estos fueron «El deporte contra las drogas» (2001), «Drogas: el tratamiento sí funciona» (2004), «Valórate... opta por lo sano» (2005), «Pensemos en la salud, no en las drogas» (2010).

Recientemente, los lemas que ONUDD promueve en su campaña anual están tomando cierta distancia en lo discursivo del paradigma prohibicionista y abstencionista y parecen aproximarse más a un enfoque de reducción de daños; «Escucha Primero (¡Escuchar a los niños y jóvenes es el primer paso para ayudarlos a crecer sanos y seguros!)» (2017), «Mejor conocimiento para un mejor cuidado» (2020), «Hablemos de drogas, la información salva vidas» (2021).

Como respuesta al Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, desde 2013 numerosas organizaciones de la sociedad civil participan cada 26 de junio del Día de Acción Global *Support, don't punish*. A través de dicha campaña se busca resignificar este día internacional para promover reformas a las políticas de drogas que incorporen el enfoque de reducción de daños, prioricen la Salud Pública y los Derechos Humanos y acompañen y no castiguen a las personas que usan drogas.

Esta campaña parte de los siguientes supuestos:

El sistema de fiscalización de drogas está roto y necesita ser reformado; Las personas usuarias de drogas no deben ser criminalizadas; Las personas implicadas en el comercio de drogas no deben enfrentarse a penas duras o desproporcionadas, cuando estas se mantengan; La pena de muerte nunca debería imponerse por delitos de droga; La política de drogas debe centrarse en la salud, el bienestar y la reducción de daños; Los presupuestos de la política de drogas deben reequilibrarse para garantizar que las respuestas basadas en la salud y la reducción de daños se financien adecuadamente.³

El primer Día de Acción Global *Support, don't punish*, en 2013, contó con actividades en 41 ciudades de 22 países; en la última edición de esta campaña, en 2021, se llevaron a cabo actividades en 260 ciudades de casi cien países,⁴ muestra del crecimiento que ha tenido esta iniciativa en menos de una década.

3 *Support, don't punish*. La campaña. Recuperado de <https://supportdontpunish.org/es/acerca-de/the-campaign/>.

4 *Support, don't punish*. Día de acción mundial de 2022: Diez años construyendo alternativas sostenibles a la «guerra contra las drogas». Recuperado de <https://supportdontpunish.org/es/join/>.

Imaginario 9 es un colectivo de la sociedad civil de Uruguay, conformado por personas usuarias o vinculadas con drogas, profesionales de distintas disciplinas e investigadoras/es que trabajan desde un enfoque de reducción de daños y gestión de riesgos y placeres vinculados al uso de drogas. Desde su conformación en 2017, este colectivo al cual pertenezco ha desarrollado múltiples actividades en pos de una reforma integral en las políticas de drogas con enfoque de Derechos Humanos, que van desde brindar información sobre el uso responsable de drogas, ofrecer espacios de achique⁵ y hacer testeos de drogas en espacios de ocio hasta organizar o participar en instancias de discusión política. Nuestro colectivo también ha articulado acciones junto a otras organizaciones sociales de Uruguay, la región y el mundo, que trabajan en pos de terminar con el paradigma prohibicionista y abstencionista. Siguiendo a Andrés Góngora (2016), podría considerarse que quienes integramos este colectivo formamos parte de los actores sociales caracterizados como *profesionales del riesgo*, esto es, actores que advierten la urgencia de modificar una tecnología de gobierno global conocida como «guerra contra las drogas» a través de la implementación de la reducción de daños y gestión de riesgos, siendo artífices y portavoces de tecnologías orientadas a convertir probabilidades de riesgo y daño en objetos gobernables.

En 2018, 2020⁶ y 2021⁷ Imaginario 9 se sumó a la campaña *Support, don't punish* y fue el único colectivo de la sociedad civil de Uruguay que participó. En 2018 lo hizo abordando la estigmatización y criminalización de las personas usuarias de pasta base de cocaína (PBC) que se encuentran en situación de calle o son usuarias de refugios en la ciudad de Montevideo y promoviendo la reflexión sobre las contradicciones del marco normativo uruguayo, que por un lado regula el acceso a determinadas drogas (cannabis), mientras que por otro lado castiga severamente a quienes se relacionan con ciertas sustancias (PBC).⁸

El objetivo de este artículo es recuperar la experiencia del colectivo Imaginario 9 en la campaña *Acompañe, no castigue* y esbozar una sistematización de esta experiencia a fines de reflexionar en torno a ella.

5 En Uruguay la expresión «espacio de achique» refiere a aquellos sitios en una fiesta o espacio de ocio que suelen conocerse como *zona chill out*, es decir, un espacio para relajarse y descansar, retirado de la zona donde se desarrolla la fiesta.

6 En 2020 la campaña *Acompañe, no castigue* en Uruguay estuvo enfocada en informar los aspectos negativos sobre las políticas de drogas que traería aparejada la Ley de Urgente Consideración (Ley N.º 19.889). Se realizó una comparecencia parlamentaria, una campaña de difusión de información en redes sociales e intervenciones sobre edificios de la ciudad de Montevideo (proyecciones lumínicas con información).

7 En 2021 la campaña *Acompañe, no castigue* en Uruguay se centró en la defensa de la Ley de Regulación y Control de Cannabis (Ley N.º 19.172), ante intentos de generar retrocesos respecto a esta norma. Se realizó un conversatorio virtual transmitido por redes sociales, disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=GxShxWdvHQM&t=1018s>

8 El colectivo Imaginario 9 obtuvo financiamiento para llevar adelante dicha campaña, no así la autora de este artículo. El financiamiento permitió realizar el material audiovisual con una productora profesional y difundir estos audiovisuales en redes sociales. Se retomará este tema en la sección final del artículo.

Para cumplir con este objetivo el artículo se organiza en distintas secciones. El primer apartado está dedicado a los aspectos metodológicos, tanto aquellos que hicieron a la elaboración del material audiovisual que formó parte de la campaña, como aquellos relativos a la sistematización y la reflexión que me propongo hacer en el presente artículo. El segundo apartado presenta los cambios y continuidades en las políticas de drogas de Uruguay y en los enfoques que las orientan. El tercer apartado ahonda en el rol de la sociedad civil organizada en la elaboración e implementación de las políticas de drogas en Uruguay. El cuarto apartado presenta la experiencia del colectivo Imaginario 9 a través de la campaña *Acompañe, no castigue* para promover el acompañamiento a las personas en situación de calle que usan PBC; aquí me propongo presentar a través de la voz de las personas que protagonizaron esta campaña distintas problemáticas que atraviesan a las personas usuarias o vinculadas a PBC, quienes dan cuenta de experiencias que vinculan drogas, calle, violencias y cuidados. El quinto apartado está dedicado a una relectura de esta experiencia activista-militante,⁹ posicionándome como investigadora en formación en el campo de las drogas, para reflexionar en torno al rol de la sociedad civil organizada y su participación en este tipo de campañas globales. El artículo concluye con un apartado a modo de consideraciones finales sobre este ejercicio de sistematización de una experiencia de investigación-acción activista-militante.

Metodología

Tanto en la elaboración del material audiovisual de Imaginario 9 para la campaña *Acompañe, no castigue*, como en el análisis y reflexión del presente artículo, trabajé desde una estrategia de investigación cualitativa y a partir de una experiencia vivida en primera persona, por ser la autora del artículo integrante de este colectivo.

A través de tres spots audiovisuales, que tuvieron difusión en distintas redes sociales (YouTube, Facebook, Instagram), se presentaron los resultados de esta breve pesquisa introductoria sobre la estigmatización y criminalización de personas usuarias de PBC.¹⁰ El modo de indagar en estas temáticas fue a través de entrevistas. Siguiendo los aportes de Gabriela Merlinsky (2006), entiendo a la entrevista como un contrato comunicativo, un discurso conversacional artificial (pautado por una guía), una técnica de recolección de datos que conecta prácticas y significados, en tanto nos habilita simultáneamente a captar el discurso más «pragmático» de

9 A lo largo del artículo opté por usar los términos activismo-militancia y activista-militante, ya que, al interior de nuestro colectivo, Imaginario 9, hay compañeras/os que se sienten más cómodas/os con uno u otro término para hacer referencia a su participación en la actividad social y política. En este artículo no se indagará en las corrientes teóricas que diferencian a estos dos conceptos.

10 Todos los videos de la campaña *Acompañe, no castigue* 2018 de Imaginario 9 están disponibles en: Spot 1: <https://www.youtube.com/watch?v=kY-xC1r4oYk&t=3s>. Spot 2: <https://www.youtube.com/watch?v=UytozCo42dg&t=2s>. Spot 3: <https://www.youtube.com/watch?v=NZOx5tCJgBk&t=24s>.

quien es entrevistada/o, un discurso actualizado sobre una temática, y a captar discursos más complejos, que refieren a otros significados sociales mediados por la construcción que realiza quien es entrevistada/o.

Si bien las entrevistas fueron semiestructuradas con cierta directividad y no entrevistas etnográficas, se tuvieron en cuenta algunos aspectos de esta técnica. Por ejemplo, se tuvo en cuenta el carácter performativo de la entrevista, que expresa el encuentro de distintas reflexividades y la producción de una reflexividad nueva, en tanto la entrevista es una relación social mediante la cual se obtienen enunciados en una instancia que implica observación directa y participación (Guber, 2001).

Se entrevistó a personas con distintos vínculos con la PBC; una mujer que estuvo privada de libertad, un docente e investigador de la Universidad de la República (Udelar) con *expertise* en pesquisas etnográficas con personas usuarias de PBC, un fiscal de la Fiscalía General de la Nación, profesionales de la Psicología que trabajan en Aleros¹¹ y personas usuarias del programa Aleros. Estas entrevistas tuvieron una duración aproximada de entre 20 a 40 minutos y fueron editadas por las y los integrantes de Imaginario 9 para la posterior realización de cortos audiovisuales de entre 2 a 4 minutos de duración, a fines de que tengan difusión por redes sociales. Se buscó contar con videos breves, editando las entrevistas para contar con fragmentos que permitan ilustrar con claridad y en forma sintética los distintos temas abordados a lo largo de las entrevistas (cómo acompañar y no castigar a las personas usuarias de PBC, estigma y encarcelamiento), los cuales fueron predefinidos con anterioridad. La brevedad de los videos responde a que la campaña *Acompañe, no castigue* busca tener la mayor visibilidad y alcance posible. Las redes sociales facilitan esta tarea siempre y cuando los contenidos se adapten a este formato (duración, tamaño, medidas, aspecto, etc.). También la observación participante fue una técnica de apoyo durante las entrevistas. Rosana Guber (2001) señala que esta técnica, además de ser poco intrusiva de la cotidianidad estudiada, permite a la observadora acceder a la complejidad de la realidad sin mediaciones del sentido común de terceros y de este modo examinar cómo los conceptos teóricos son anclados en realidades concretas, poniendo en diálogo distintas reflexividades. Esta investigadora también advierte que para que la información recabada durante la observación resulte significativa debe haber algún grado de participación por parte de quien investiga (Guber, 2001). En este sentido, nuestro acceso al campo para llevar adelante las entrevistas en calidad de activistas-militantes de un colectivo de personas usuarias de drogas favoreció un acercamiento quizá más horizontal con las personas entrevistadas. También fue relevante hacer las entrevistas en

11 Aleros es un programa de atención comunitaria a usuarias/os problemáticas/os de drogas, parte de la Red Nacional de Atención en Drogas. Para conocer con mayor profundidad experiencias de trabajo de este programa se recomienda Fernández Romar y Rossal (2015).

espacios habituales para las/os entrevistadas/os; el sitio donde funciona el programa Aleros, una plaza pública próxima a un refugio nocturno.

Me valgo de estas técnicas de investigación propias de la Antropología —pese a que mi formación es en Geografía Humanística-Social— debido a que, siguiendo los aportes de Rita Segato (2006), entiendo que esta disciplina ya no se encuentra en un momento orientado al estudio de la otredad ni del espejamiento reflexivo del mundo del antropólogo en esa otredad; actualmente la Antropología se encuentra en un momento disciplinar con una fuerte disponibilidad para «los otros». Se trata de una *Antropología a demanda* (Segato, 2006), esto es, una disciplina expuesta a ser interpelada, a ser demandada por aquellos que otrora fueron sus objetos de estudio, sus nativos. Segato (2013) justamente destaca que en la era de los Derechos Humanos, muchos sectores de la sociedad demandan una Antropología capaz de cumplir un nuevo papel, colaborando en el proceso de expansión de derechos, brindando conocimiento válido que pueda servir para que ciertos sectores accedan a la comprensión de sus problemas y de este modo a recursos y a un mayor bienestar. Desde esta perspectiva me posiciono como investigadora, buscando promover que mi trabajo constituya un aporte a la resolución de problemas de determinados sectores de la sociedad, como ser los que atraviesan las y los usuarios de drogas.

La campaña *Acompañe, no castigue* 2018 de Imaginario 9 surgió como una investigación-acción activista-militante. Como expresan Juan Fernández Romar, Evangelina Curbelo y Pedro Estela (2015, p. 24), las prácticas de investigación-acción han estado asociadas a los movimientos comunitarios, a la participación social y a estrategias de intervención en problemáticas de contextos desfavorecidos, vinculando la teoría y la praxis de la investigación con la acción política, generando «un proceso dialógico, reflexivo y práctico que posibilita la construcción de nuevos conocimientos acerca de la realidad social mediante el trabajo comunitario y la articulación de la educación con la investigación y la transformación social».

Al haber pasado ya unos cuatro años de la campaña, la escritura me permite sistematizar esta experiencia y reflexionar sobre su marco epistemológico. Rosa María Cifuentes (2016) propone que, en la vida académica, además de diseñar investigaciones, redactar informes y hacer evaluaciones, debemos reconstruir experiencias para interpretarlas críticamente. Para ello, la sistematización de experiencias permite construir conocimiento a partir de la práctica, en tanto «es un proceso de construcción social del conocimiento que permite reflexionar sobre la práctica, para aprender de ella, conceptualizarla, comprenderla y potenciarla; puede aportar al desempeño profesional comprometido y pertinente, a la transformación de condiciones de inequidad, injusticia, discriminación, pobreza, que abordamos» (Cifuentes, 2016, p. 4). Por lo tanto, me valdré de la sistematización de experiencias en tanto estrategia que posibilita la

reflexión crítica sobre la acción social a la vez que habilita la producción de conocimientos a partir de la práctica (Cifuentes, 2016).

Cambios y continuidades en la política de drogas de Uruguay. Entre el prohibicionismo-abstencionismo y la reducción de daños y gestión de riesgos

Para Diego Silva Forné (2016, p. 96), «en un Estado social y democrático de Derecho como el nuestro, el ámbito de la salud privada de las personas forma parte de su esfera de autodeterminación. Se trata de las acciones privadas de las personas, que como tales se encuentran exentas de la autoridad de los magistrados, tal como recuerda el Art. 10 de la Constitución de la República». Según este investigador, aquellas modalidades de actuación estatal higienistas, perfeccionistas y paternalistas, como el prohibicionismo y el abstencionismo, colisionan con el principio de autonomía personal.

A partir de la primera década del siglo XXI, la legislación uruguaya en materia de Salud Pública incorporó el concepto de autonomía personal del paciente, a través de la Ley n.º 18.335, de Derechos y Obligaciones de Pacientes y Usuarios (Silva Forné, 2016).

En el período 2000-2005 la Secretaría Nacional de Drogas de Uruguay incorporó en su discurso la libertad de autodeterminación del individuo, introduciendo políticas de reducción de riesgos y daños (sin incidencia en las prácticas judiciales y policiales).

Posteriormente, durante el gobierno del Frente Amplio, la Secretaría Nacional de Drogas (SND) trabajó en la consolidación del enfoque de reducción de daños, al incorporarlo en los lineamientos de las distintas Estrategias Nacionales para el Abordaje del Problema Drogas (2006-2010, 2011-2015 y 2016-2020), a la vez que llevaría su postura a foros internacionales de debate en materia de drogas.

La reducción de daños es un marco teórico-metodológico para el abordaje del uso de drogas que refiere a políticas, programas y prácticas que aspiran a reducir las consecuencias negativas para la salud, como así también en el plano social y económico, del uso de drogas legales e ilegales, sin necesariamente abandonar su uso (International Harm Reduction Association, 2010). Este enfoque parte de asumir que es normal e inevitable el uso de drogas en cualquier sociedad, por lo tanto, su eje es el respeto a las decisiones de las personas, su dignidad y libertades individuales, el respeto por los Derechos Humanos y la Salud Pública (Deheza y Mariotta, 2019).

En diálogo con la reducción de daños, David Pere Martínez Oro y Joan Pallarés Gómez (2013) proponen el enfoque de gestión de riesgos y placeres para abordar el uso de drogas. Estos investigadores postulan que una serie de factores, como la dosis, potencia y toxicidad de la droga, la frecuencia de uso, la vía de administración, el policonsumo, el estado psicofísico de la persona usuaria y el contexto de uso, entre otros, hacen variar el nivel de riesgo cuando se buscan los placeres asociados a las drogas.

La Ley n.º 19.172, de «Regulación y control del cannabis», del 20 de diciembre de 2013, además de controlar y regular el cannabis e introducir modificaciones a los delitos de drogas, incorpora el nuevo paradigma sanitario del Estado a través del Artículo 1.º, el cual prevé medidas tendientes a proteger, promover y mejorar la Salud Pública mediante una política orientada a minimizar los riesgos y a reducir los daños asociados al uso de drogas, promoviendo la información, educación y prevención sobre sus consecuencias y riesgos. Así mismo, el Artículo 3.º de esta ley reconoce el derecho al más alto nivel posible de salud, así como a la prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades, siempre y cuando se garantice el pleno ejercicio de los derechos y libertades de las personas, consagradas en el Artículo 10 de la Constitución de la República (Silva Forné, 2016). Pese a estos cambios de enfoque, existen visiones contrapuestas dependiendo de las sustancias sobre las que se legisla.

El artículo 4 de la Ley n.º 19.007 modificó el Decreto-Ley n.º 14.294, aumentando en forma desproporcionada el reproche penal para las conductas delictivas que tengan por objeto material «todas aquellas formas de cocaína en su estado de base libre o fumable, incluida la pasta base de cocaína» (Uruguay, 2012). Esta variante punitiva también hizo que «todas las hipótesis previstas en dichos artículos pasen a ser inexcusables en principio, cambiando lo que fue la política más benigna que se impulsó con la Ley n.º 17.016» (Álvarez Petraglia y Montedeocar, 2013, p. 16).

Por otro lado, la Ley n.º 19.007 desconoce que muchas veces las personas usuarias de PBC se involucran en el microtráfico para solventar su propio consumo. Respecto a esto Carlos Negro Fernández (2013) sostiene que esta normativa

vuelve a privilegiar el combate de determinadas drogas a las que se considera más dañinas, legislando para satisfacer las demandas de castigo a aquellas conductas que tienen por objeto sustancias prevalentes en el mercado de consumo de drogas en un determinado momento [...] atribuye así a algunas drogas, como en este caso la PBC [...], un poder disparador de variadas conductas delictivas en aquellos que las consumen, relacionadas fundamentalmente con el ataque a la propiedad y las personas (pp. 23-24).

En síntesis, la Ley n.º 19.007 promovió la criminalización de personas usuarias de ciertas drogas, en particular las que usan y comercian los sectores más vulnerables de la población.

Esta breve revisión de los cambios y continuidades en las políticas de drogas de Uruguay evidencia que el paradigma prohibicionista y abstencionista convive con los enfoques de reducción de daños y gestión de riesgos, no sin múltiples contradicciones. También en los organismos supranacionales, unidos bajo una lógica de mando que Michael Hardt y Antonio Negri (2010) identifican como un Imperio, conviven distintos enfoques para el abordaje de la cuestión de las drogas. Se trata de un Imperio que por un lado propone la «guerra contra las drogas», principalmente desde la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, mientras que por el otro propone un discurso de reducción de daños, principalmente desde el Programa Conjunto sobre el VIH/sida de la ONU (Unaid, 2019).

Oriol Romaní y Mauricio Sepúlveda (2013) entienden que posiblemente en la actualidad se estén acoplando los distintos enfoques para el abordaje de los usos de drogas a partir de cierto modo de producir la significación del riesgo —característico de una sociedad liberal que privatiza la gestión de la vida y representa una combinación entre una racionalidad neoliberal y una racionalidad del riesgo— y como consecuencia del posicionamiento de ciertos discursos científicas-neopositivistas sobre el riesgo —aquellos basados en evidencia científica asimilada a investigación básica y epidemiológica, por considerarse que emplean métodos científicos con suficiente autoridad—, generando que los límites entre uno y otro enfoque se difuminen, en tanto el discurso sobre el riesgo con base en evidencia científica puede ser una voz autorizada tanto para quienes abogan por una política de drogas desde un enfoque de reducción de daños y gestión de riesgos como para quienes abogan por un mundo sin drogas (Massó Guijarro, 2014).

Rol de la sociedad civil organizada en la elaboración e implementación de las políticas de drogas en el Uruguay contemporáneo

Entender a las personas usuarias de drogas como sujetos de derecho es un paso fundamental para revertir los procesos de estigmatización y criminalización que recaen sobre ellas. Las prácticas de autoafirmación de las personas usuarias de drogas, cuyos consumos solían situarse en el ámbito de lo privado y hoy pasan al ámbito de lo público, resultan fundamentales para que las luchas de estas personas a través de un movimiento social de usuarias/os de drogas, se constituyan en demandas a incorporarse en la agenda política.

Para que estas demandas conformen una arena cívica es necesario que las personas usuarias de drogas construyan una identidad, un «nosotras/os/es». Con la construcción de esta arena cívica se conforma un espacio de articulación donde los actores sociales y políticos confluyen en un mismo fin para la búsqueda de una respuesta a las demandas por nuevos derechos

(Dominzaín, 2007). Mario Diani (2015) entiende a esa articulación como un movimiento social, en tanto genera redes de interacción, comparte una identidad específica y acción colectiva en torno a determinados temas.

En el Uruguay de la transición democrática la cuestión de las drogas fue nuevamente problematizada por el movimiento social juvenil llamado Coordinadora Anti Razzias, por personas usuarias de cannabis, cultivadoras/es organizadas/os, sectores de la juventud política de izquierda (principalmente del Frente Amplio) y apoyada por incipientes trabajos académicos en la Udelar (Aguiar y Musto, 2015; Arocena y Aguilar, 2017; Musto, 2018).

Con el paso del tiempo y el aumento de las demandas por parte del movimiento social, ciertos sectores del sistema político-partidario comenzaron a incorporar en su agenda la temática de los derechos de las personas usuarias de drogas, más específicamente de cannabis, aunque de forma muy tímida y básicamente a través de sus sectores juveniles.

A partir del gobierno del Frente Amplio la SND tomó como pilar de sus políticas de drogas el respeto por los Derechos Humanos y la consolidación del enfoque de reducción de riesgos y daños, asumiendo el fracaso de la «guerra contra las drogas» y avanzando en la regulación de ciertas drogas (Aguiar y Musto, 2015). Este gobierno significó una ventana de oportunidad para la inclusión de nuevas demandas del movimiento social en la agenda política (Delacoste, 2015; Aguilar y Musto, 2015; Arocena y Aguilar, 2017).

La conformación de un movimiento social para la lucha por la regulación del cannabis se fortaleció con la creación de la Coordinadora por la Legalización de la Marihuana a mediados de 2012. Esta reunió a actores sociales y políticos, entre ellos organizaciones de usuarias/os y cultivadoras/es de marihuana, organizaciones de Derechos Humanos, organizaciones feministas, organizaciones por los derechos de personas LGBTTIQ+, el Departamento de Jóvenes del PIT-CNT y juventudes de diferentes partidos políticos (Aguiar y Musto, 2015; Filardo, Aguilar, Musto y Pieri, 2012; Musto, 2018). La Udelar participó promoviendo investigaciones y sus resultados en cumplimiento del Artículo 2 de su Ley Orgánica.

Florencia Corbelle (2016), refiriéndose al caso de Argentina, destaca que el activismo y el hacer político de las personas usuarias de cannabis, si bien comparte demandas y modalidades de protesta con otras organizaciones que apoyan su lucha (organizaciones de Derechos Humanos, asociaciones que trabajan en programas de reducción de daños), tiene ciertas singularidades. Estas se deben a la ilegalidad del consumo de drogas y de las actividades vinculadas al consumo, hechos que imprimen a este activismo un carácter específico (Corbelle, 2016). Si bien en Uruguay el consumo de drogas no está penalizado, como tampoco lo están las actividades de transporte, almacenamiento y otras relacionadas a la tenencia de drogas para

consumo personal, esto no quita lo ilegítimo que puede resultar el uso de ciertas drogas o lo ilegítimo que puede parecer a ciertos sectores de la sociedad y el sistema político el activismo-militancia de personas que reivindican ser usuarias de drogas, con lo cual esto podría ser, hasta cierto punto, un punto de contacto con el activismo cannábico argentino que presenta Corbelle (2016).

Breno Bringel y Alfredo Falero (2016) señalan la importancia de considerar la dimensión internacional de las relaciones de los movimientos sociales, las redes transnacionales, la internacionalización de los movimientos y los movimientos globales en el marco del activismo contemporáneo. Esto resulta particularmente interesante para pensar el movimiento social de usuarias/os de drogas en Uruguay en tanto la conformación de un movimiento social que problematice esta cuestión no es una excepcionalidad uruguaya; existen redes globales, como el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas,¹² uno de los promotores de la campaña *Support, don't punish*; se celebran reuniones internacionales, como la International Drug Policy Reform,¹³ y con estas redes como plataforma la sociedad civil organizada logra participar en ámbitos de debates internacionales como la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas.

Aportes desde Imaginario 9 para promover el acompañamiento a las personas en situación de calle que usan pasta base de cocaína

El primer spot de la campaña *Acompañe, no castigue* 2018 de Imaginario 9, titulado *¿Cómo acompañar?*, recogió algunas reflexiones y respuestas frente a esta interrogante.

La primera respuesta a esta pregunta, la esbozó una mujer usuaria del programa Aleros, quien propuso:

Enseñar a la sociedad a no discriminar entre un consumidor de una droga y de otra. Porque si vos decís, *ay, pobre el alcohólico, ay, pobre el fumador de tabaco*, y al mismo tiempo *qué hijo de puta el drogadicto pastoso...* Sin embargo, somos personas igual que todos.

Otro usuario del programa Aleros puso el foco en la importancia que tiene conocer a las personas. Por eso destacó que para acompañar a las personas que usan drogas hay que acercarse más a ellas y no aislarlas, ya que eso es lo peor que puede pasarle a una persona usuaria de pbc, en tanto lleva a que cada vez se sienta peor, a que desarrolle o se agudicen sentimientos de inferioridad y que por lo tanto le sea más difícil dejar ese camino.

12 El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas es una red mundial integrada por 192 organizaciones, especializada en la temática del uso de drogas. Más información en <https://idpc.net/es/el-idpc>

13 La International Drug Policy Reform es un evento bienal que reúne a activistas de todo el mundo que promueven políticas de drogas post-prohibicionistas. Más información en <https://reformconference.org/>

Por otro lado, la respuesta que dio un usuario de un refugio respecto a cómo acompañar a las personas usuarias de PBC se enfocó en su experiencia cuando percibe que una persona le está brindando ayuda:

Cuando siento que alguien me está ayudando trato de hacer las cosas, una por mí y la otra por la persona que me está ayudando también, como que digo, ta, alguien me está dando una mano, como que no querés defraudarla... Porque ¿quién te ayuda sin conocerte o que sea tu pariente? Capaz que tus parientes no te ayudan...

Podríamos vincular este tipo de discursos como próximos a lo que Giancarlo Albano, Luisina Castelli, Emmanuel Martínez y Marcelo Rossal (2015) identificaron como un discurso autoinculpante habitual en las personas usuarias de PBC, que les lleva a identificar su accionar como ilegítimo, por lo tanto no tendría sentido que otras personas establezcan un vínculo con ellas/os, usando frases como «para qué vas a hablar conmigo», «mi vida está perdida», asociándolo a sentimientos de inferioridad y de malestar personal, en tanto «Aunque el consumo de cocaínas fumables no es ilegal, su usuario está unánimemente deslegitimado» (Albano *et al.*, 2015, p. 113).

La respuesta de una mujer que estuvo privada de libertad trajo un tema interesante y sensible: expresó que las personas usuarias de PBC precisan amor. Esta necesidad de amor podríamos reformularla como necesidad de cuidado colectivo, sobre todo en un contexto donde «el cuidado del otro, más incluso que de sí mismo, es una exigencia moral asociada al amor» (Rossal *et al.*, 2015, p. 49). Así, las prácticas de reducción de daños frente a los usos de drogas podrían entenderse como prácticas de cuidado de otros, con otros, frente a los usos de drogas; como un derecho ciudadano al cuidado de la salud que, como señalan Rossal *et al.* (2015), es cotidianamente cercenado a las y los usuarios de drogas más vulnerables a través de estrategias, más burdas o más sutiles, de bloqueo en el acceso al sistema de salud.

Por su parte, la psicóloga del programa Aleros expresó que la línea de trabajo que ella y sus colegas proponen parte de:

Acercar a las personas propuestas alternativas a las circunstancias en las que viven y a los contextos de sufrimiento social en los que viven. Facilitar el acceso de las personas a los derechos a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la recreación.

Reafirmando esta línea de trabajo, Esperanza Hernández (2015) afirma que en el programa Aleros se valen de la gestión de riesgos y daños y el tratamiento comunitario como herramientas clave para la transformación de los procesos de sufrimiento social, para la crítica política y el cambio, en tanto ponen en evidencia el dominio y el control de los aparatos disciplinarios sobre las personas. La gestión de riesgos y daños es para este programa una

herramienta clave para eliminar las barreras entre personas-comunidades-servicios y de este modo garantizar el ejercicio de los derechos de quienes usan drogas, poniendo en el centro sus derechos y la exigibilidad de las personas hacia los servicios, no el proceso a la inversa, el cual genera expulsión (Hernández, 2015).

Otro psicólogo del programa Aleros entrevistado para la campaña destacó la importancia de ser empáticos, de entender que las personas que usan PBC llegan a la situación donde están por ciertas trayectorias de vida. En este sentido, sostuvo que una manera de acompañar a estas personas es comprender el contexto en que se criaron, dónde aprendieron, para no juzgar solo su presente y por qué está consumiendo. Como sintetiza Hernández (2015), concebir el uso de drogas «como un derecho de las personas y como un hecho en determinadas situaciones para mitigar el sufrimiento social» (p. 19).

El segundo spot de la campaña, titulado *Estigma*, buscó abordar justamente los estigmas a los que se enfrentan las personas usuarias de PBC; por parte de su familia, en ámbitos laborales y de estudio, por parte de instituciones de salud, de justicia y de seguridad.

Para dar cuenta de esta problemática, el docente e investigador de la Udelar entrevistado afirmó:

Los usuarios de PBC o de cocaínas fumables en general, son los sujetos más estigmatizados. Los usuarios más estigmatizados. Que consumen una sustancia que es entendida como más barata y que se empieza a utilizar en Uruguay en el momento de mayor crisis económica del país del siglo XXI, pero también de 50 años para atrás. Entonces hay dos factores de distinta naturaleza que se ensamblan en este punto. Por un lado, los usuarios. Y por otro lado el modo de administración de la sustancia y los efectos distintos que la sustancia tiene sobre el sujeto.

El informe «Personas, calle, consumos: dos estudios sobre uso de pasta base en Uruguay», confirma este enunciado, además de agregar que, en los años siguientes, el fenómeno del uso de PBC tuvo un empuje mediático (no pudiendo confirmarse un crecimiento epidemiológico) que generó «la imputación de un supuesto carácter criminógeno intrínseco a la PBC que ha encontrado en algunos hechos noticiosos el vehículo ideal para su difusión» (Keuroglian, Ramírez, Suárez, Rossal y Castelli, 2019, p. 16).

Los medios de comunicación, el sistema político y parte de las instituciones estatales han asociado el uso de PBC y la criminalidad. Albano *et al.* (2015) señalan que:

Generalmente se uniformiza a «los pastabaseros» o «pastosos» como sujetos intrínseca o necesariamente inclinados a las actividades delictivas. Sea por causas «farmacológicas», por necesitar dinero para el consumo o por razones «sistémicas» (Goldstein, 1985), los usuarios de cocaínas fumables son siempre sospechosos (p. 118).

En la entrevista a una mujer usuaria del programa Aleros, ella sintetizó muy bien el fuerte estigma que recae sobre quienes usan PBC frente a quienes usan otras drogas, también ilegales, pero no cargadas de tanta ilegitimidad ni estigma:

El cheto es el que toma cocaína, el que tiene plata, el que puede salir a un baile. Y sin embargo por veinte pesos en un cante vas y te comprás una dosis de pasta base. Y sale todo de ahí, de cómo quedás vos marginado. [...] Te miran mal. Yo actualmente estudio en la UTU y ya solamente porque consumí pasta base, o consumo pasta base, te miran ya de otra manera los propios compañeros. Sin embargo, soy una persona igual que todas y tengo sentimientos igual que todos y capaz que más sentimientos que muchos.

A lo expresado por esta usuaria del programa Aleros, vale agregar que, como señala Nuria Romo Avilés (2020),

el género, como principio estructurador de las sociedades, diferencia a los varones y mujeres en un modelo heteronormativo y patriarcal en el que están inmersas las personas que consumen drogas por hacerlo en un contexto social y cultural determinado por el género (p. 6).

A causa de esto las mujeres que usan drogas reciben mayor condena social y son más estigmatizadas que sus pares usuarios varones, en tanto ellas transgreden los roles tradicionales de género. Si bien en las entrevistas no se indagó específicamente en este aspecto, sus consecuencias estuvieron presentes en los discursos de las personas entrevistadas.

Durante la entrevista a un fiscal también surgió que existe una estigmatización específica hacia las personas usuarias de PBC más que de cualquier otra droga:

Parece que es más demonizado el consumo de PBC porque lo consumen preferentemente lo que se podría pensar que son los pobres, y se vincula la comisión de algunos delitos al consumo de pasta base. Entonces se demoniza desde los medios de comunicación y desde el imaginario colectivo construido por parte de los *mass media*, se demoniza al consumo de PBC porque es parte de esta criminalización también que existe de la pobreza en nuestra sociedad.

El informe de Leticia Keuroglan *et al.* (2019) ofrece una caracterización de la población de personas con uso problemático de PBC en Montevideo y el área metropolitana; esta rondaría entre 7.500 y 9.900 personas, con un marcado predominio de varones (86,3 %) y un promedio de edad entre 33 y 34 años. Este informe sintetiza que

las personas usuarias de pasta base conforman una población de altísima vulnerabilidad social, producto de trayectorias vitales signadas por la precariedad en sus más diversas dimensiones [...], mínimos logros educativos, nula o baja calificación laboral, altos niveles de institucionalización (en centros de reforma o internación para menores de edad y en centros penitenciarios para adultos), precariedad o inexistencia de vivienda y pérdida, ausencia o debilitamiento de lazos familiares

cercanos y estables. Además de presentar altos niveles de desafiliación social (fundamentalmente educativa y laboral), tampoco acceden a las prestaciones (con o sin contrapartida) del Estado salvo las señaladas respecto a la utilización, por parte de una pequeña porción de ellos, de los refugios del MIDES» (Keuroglan *et al.*, 2019, p. 56).

Respecto al estigma con el que conviven las personas usuarias o vinculadas a PBC, un usuario del programa Aleros expresó lo siguiente:

Desde que se sabe que sos consumidor, por más que vos hayas dejado, siempre vas a estar bajo la lupa. Siempre. Por lo que sea. Siempre van a estar desconfiando, de que algo vas a hacer, de que en algo podés dañar a esa persona o a ese entorno que anda ahí alrededor tuyo, en todo momento.

Por otro lado, un usuario de un refugio de la ciudad de Montevideo comentó que si bien hay gente que puede intentar brindar algún tipo de ayuda, por otro lado:

Hay gente que te discrimina totalmente: «Pah, fumás pasta base, en cualquier momento vas a andar matando gente para fumar».

Este tipo de estigmas que llevan a generar cierto pánico moral en la sociedad fue señalado en la entrevista con el psicólogo del programa Aleros:

El pastabasero acá es asociado con el latero, el marginal, el pichi, el vago. Y eso cae en un criterio totalmente moral, de la gente que lo ve de afuera y que no entiende la realidad del que llega a ese tipo de consumo y por qué llega a estar en esas condiciones. Eso construye ciertas subjetividades en la gente, en la sociedad, que hacen que uno les tenga miedo. Entonces ves al pasta base y cruzás la calle. Ahí se construye como un miedo a la persona y perdés de vista que es una persona justamente, que no hay que tenerle miedo, sino que hay que ver qué se puede hacer para ayudarla.

Ricardo Fraiman y Rossal (2009) destacan que «la asignación a un sujeto del aumento de la violencia se realiza sobre una serie de equívocos, confusiones y contradicciones discursivas y prácticas, constituyendo un estigma» (p. 156). Los estigmas se consolidan mediante las violencias institucionales en las trayectorias de las personas usuarias de PBC durante su paso por el sistema carcelario, instituciones de amparo de la infancia, al ser detenidas habitualmente por la policía, o al recurrir a los refugios para personas en situación de calle (Albano *et al.*, 2015). Así,

en la medida que tal estigma se realice a través del tiempo por una serie de intervenciones estatales y paraestatales de diversa índole configurará un proceso de estigmatización. Dicho proceso se (re)produce por la actuación cotidiana de las instituciones del Estado y en una serie de políticas de Estado que involucran a organizaciones paraestatales y a sujetos (Fraiman y Rossal, 2009, p. 156).

Al profundizar en esta línea, en la entrevista al docente e investigador de la Udelar se destacó:

En general lo que tenemos es una violencia institucional, desde todo un haz de instituciones, no solo estatales, que lo reproducen. Y que no se piensa desde ese lugar: ¿cómo hacemos para desanclarlo del sujeto? Tal vez desanclar el estigma del sujeto es la primera fase para lograr otras posibilidades vitales. Y en eso no hemos sido lo suficientemente lúcidos para convencer a las instituciones y a las personas que en ellas trabajan de lo importante de desanclar el estigma de los sujetos.

El tercer spot, *Encarcelamiento*, se enfocó en la prisionalización de las personas usuarias o vinculadas a PBC, en tanto en Uruguay una parte considerable de ellas han sido alcanzadas por la justicia penal (Albano *et al.*, 2015).

La reflexión del docente e investigador de la Udelar sobre este aspecto apuntó a cuestionar el éxito de la estrategia de criminalización de personas usuarias de PBC:

¿Qué éxito significa ese camino nuestro bastante lento hacia la guerra contra las drogas? En realidad, sabemos que eso no funciona. El Estado uruguayo lo sabe, ha abogado por una estrategia diferente, no entiendo por qué seguir ese camino. Porque en relación con los pobres es el camino que siempre se plantea, el mayor castigo y la cárcel, el único camino posible.

En sintonía, y haciendo alusión a la Ley n.º 19.007, el fiscal entrevistado sentenció:

Las últimas modificaciones [legislativas] que hay, por ejemplo, a nivel de pasta base, tienden a exigir que cada vez que una persona sea encontrada responsable de venta de pasta base, la prisión es la única salida, no hay otra alternativa.

Sabiendo que la cárcel es el único camino que se plantea para las personas usuarias o vinculadas a PBC, varias de las personas entrevistadas hicieron referencia a esta institución.

Un usuario de refugio nocturno de la ciudad de Montevideo expresó:

La cárcel lo que pasa es que no tiene algo que te pueda rehabilitar. Están sobrepobladas. Imagínate estar años así. Yo no creo que puedas salir bien cuando salgas. Yo creo que psicológicamente ya salís mal.

Una usuaria del programa Aleros manifestó lo siguiente:

Sinceramente la cárcel me parece un depósito de personas. Porque centro de rehabilitación no tiene. Es un depósito de personas que si no le sirven a la sociedad las tiran ahí y olvidate.

Por otro lado, algunos comentarios de las personas entrevistadas apuntaron a que una estadía en la cárcel agravaría el uso problemático de PBC o el involucramiento en actividades de microtráfico. Se expresó que «hay más droga adentro de la cárcel que en la calle» y

se caracterizó a la cárcel como un centro de distribución de drogas donde se capta a los vendedores:

... el propio narcotráfico grande tiene toda una temática de que la cárcel es el lugar de reclutamiento de vendedores. Porque se fijan en las personas más vulnerables, las más carenciadas, que necesitan de alguna manera solventar la vida de ellos y de quien está privado de libertad.

También en estas entrevistas se mencionó que muchas personas privadas de libertad por delitos de drogas son mujeres jóvenes, jefas de hogar con hijas/os a su cargo. En América Latina los delitos vinculados con drogas son la principal causa de encarcelamiento de mujeres. El *Informe mundial sobre las drogas* (ONUDD, 2018) advierte que el 19 % de la población carcelaria mundial de hombres está en prisión por delitos vinculados con drogas, mientras que este porcentaje asciende a un 35 % en mujeres. En Uruguay, el 49 % de las mujeres privadas de libertad lo están por delitos de drogas (Legrand, 2021). En América Latina las mujeres privadas de libertad por delitos vinculados con drogas tienen características y antecedentes socioeconómicos similares; provienen de situaciones de extrema pobreza y desigualdad, tienen bajos niveles de instrucción, están subempleadas, desempleadas o son trabajadoras informales, involucrándose en el microtráfico para sostener a sus familias (Youngers, García Castro y Manzur, 2020).

Finalmente, el docente e investigador de la Udelar señaló que debería trabajarse desde un enfoque de reducción de daños integral, porque «lo que verdaderamente hace daño del tráfico de drogas es la violencia hacia los usuarios». Las vidas de las personas usuarias de PBC están atravesadas por la violencia cotidiana de sus contextos de vida (esa posibilidad de violencia latente que puede irrumpir en una situación insospechada) como así también por la violencia estructural y la violencia por parte del Estado (Rossal *et al.*, 2015), con lo cual las personas usuarias o vinculadas a PBC son frecuentemente castigadas, siendo que el castigo va más allá de la cárcel: «... las violencias “ocultas” del sistema penal se convierten en marcas condenatorias incluso luego de cumplida la pena» (Albano *et al.*, 2015, p. 122).

Reflexiones de una investigadora y militante sobre el rol de las organizaciones de la sociedad civil en tiempos del capitalismo contemporáneo

Propuestas como la de Sayak Valencia (2010) sobre el *capitalismo gore*, Paul B. Preciado (2020) sobre el *régimen farmacopornográfico* y Laurent De Sutter (2021) sobre el *narcocapitalismo* coinciden en promover la reflexión sobre las particularidades que la producción, distribución y usos de drogas legales e ilegales genera en las subjetividades, en

los cuerpos y en los territorios en el capitalismo contemporáneo. Un capitalismo del siglo XXI donde los sectores que disponen del capital se organizan para alcanzar sus fines a través de un campo de acción política a partir de la elaboración de pensamiento estratégico, investigación científica y acción política concreta para adaptar su actuación a escala nacional (Entre, 2019). Este pensamiento estratégico se organiza en torno a asociaciones globales que elaboran una epistemología para la defensa de sus intereses, apoyándose en universidades, organismos multilaterales de crédito y en filántropos multimillonarios y sus fundaciones, al mismo tiempo que traducen su doctrina a las circunstancias de cada territorio, internacionalizando la creación de *think tanks* (Entre, 2019).

Para Silvina Romano, Tamara Lajtman y Aníbal García (2018) los *think tanks*, pese a mostrarse como organizaciones independientes sin fines de lucro ni vinculación político-partidaria, llevan adelante al menos dos funciones en el proceso de reproducción de un sentido común que presenta al neoliberalismo como única alternativa posible: «1) La de asesoramiento del Gobierno (en unas relaciones de mutua influencia) donde intervienen fuertemente los intereses del sector privado vía financiamiento y 2) la de proveedores de información experta para prensa hegemónica» (p. 1).

¿Cómo se vincula esto con las políticas de drogas o con el activismo-militancia de las personas usuarias de drogas?

La campaña *Support, don't punish* cuenta con apoyo financiero de Elton John Aids Foundation, Robert Carr Fund for civil society networks, Levenson Foundation y Open Society Foundations (OSF).¹⁴ Esta última, cobró relevancia en las últimas décadas por ser la fundación del multimillonario George Soros y podría ser catalogada como una asociación que forma parte de la lógica global de *think tanks*.

Aldo Marchesi (2020) entiende que la OSF tiene una agenda alineada a algunas de las demandas de sectores liberales del Partido Demócrata estadounidense. En el sitio web de OSF se señala que: «El trabajo de Open Society Foundations en América Latina y el Caribe, incluye reformas a la política de drogas, reducción de violencia, promoción de la transparencia gubernamental, libertad de información y promoción de la participación de las mujeres en política».¹⁵

En los últimos años, ciertos sectores políticos comenzaron a introducir la idea de que existe una «izquierda sorista», señalando que la nueva agenda de derechos de Uruguay (interrupción

14 *Support, don't punish*. Colaboraciones. Recuperado de <https://supportdontpunish.org/es/acerca-de/partnerships/>.

15 Open Society Foundations. América Latina y el Caribe. Recuperado de https://www.opensocietyfoundations.org/what-we-do/regions/america-latina-y-el-caribe/es?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam_esp_122020.

voluntaria del embarazo, matrimonio igualitario, regulación del cannabis) sería una construcción de Soros y su fundación (Marchesi, 2020). Acuerdo con Marchesi (2020) en que la nueva derecha nacionalista ha vinculado a Soros y la OSF con estas luchas como un modo de deslegitimar a la izquierda y a los movimientos sociales que las llevan adelante. Pero al formar parte de un colectivo que recibió financiamiento de la OSF para la campaña *Support, don't punish* me interesa problematizar esto, teniendo en cuenta además que la racionalidad política neoliberal es característica de la actual gubernamentalidad de las drogas (Sepúlveda, 2011) y considerando que no sería el primer caso en que la derecha y el capital intenten apropiarse de la retórica de los Derechos Humanos y la defensa de la democracia.

Pese a generar cuestionamientos a las luchas de movimientos sociales cuando reciben financiamiento extranjero, la derecha neoliberal y libertaria no denuncia de igual modo el financiamiento proveniente de filántropos y fundaciones cuando este apunta a difundir sus ideas; la relación entre política y dinero es constitutiva del capitalismo contemporáneo (Marchesi, 2020). La Red Atlas es una de las más grandes usinas de pensamiento de la derecha contemporánea a nivel internacional. Lee Fang (2017) señala que los *think tanks* asociados a ella reciben financiamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de la Fundación Nacional para la Democracia, a la que caracteriza como un brazo del «poder blando» de Estados Unidos, en tanto ha promovido reformular los equilibrios de poder en los países donde está presente. La acción política propiamente dicha de asociaciones como la Red Atlas involucra la creación de organizaciones que aparentan ser locales y focalizadas en un determinado tema, con gran actividad en redes sociales y medios de comunicación (Entre, 2019) con el objetivo de lograr incidencia en la opinión pública.

En Uruguay, algunas organizaciones afiliadas a la Red Atlas son el IEMM - Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, el Centro de Estudios para el Desarrollo y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Entre, 2019; Fang, 2017). Marchesi (2020) señala que estas organizaciones están estrechamente vinculadas al sector empresarial, a universidades privadas, a los periódicos *El País* y *El Observador* y a políticos y académicos vinculados a sectores de los partidos tradicionales (Partido Nacional y Partido Colorado).

Lo que me interesa señalar es que los filántropos multimillonarios, *think tanks* y demás eslabones en los que estos organizan su campo de acción política actúan con una capilaridad tal que tienen incidencia en organizaciones locales, nacionales, regionales y globales. Estas organizaciones, por su parte, pueden ser identificadas tanto como neoliberales, por ejemplo, aquellas que forman parte de la Red Atlas, o bien como liberales, por ejemplo, aquellas financiadas por la OSF.

Consideraciones finales

Esta sistematización de una experiencia de investigación-acción activista-militante ha funcionado como una sintética, pero gráfica muestra de las múltiples violencias que se entrelazan en dos situaciones que deberían ser abordadas integralmente, como lo son la situación de calle y el uso problemático de drogas, pero que con frecuencia son abordadas desde un enfoque moral, generando procesos de estigmatización y, desde un enfoque penal, promoviendo la criminalización de estas personas.

Albano *et al.* (2015) afirman:

Para contribuir a una modificación sustantiva en las trayectorias de usuarios problemáticos de cocaínas fumables, no debería ni negarse la realidad de sus vínculos con el mercado ilegal, y por lo tanto la posibilidad de cometer delitos; así como tampoco contribuir con la reproducción de un estigma que solo aumenta riesgos y oblitera posibilidades de cambio (Oliveira *et al.*, 2012). Deberían, en cambio, considerarse desde cerca sus voces y derechos, anhelos de ‘vida buena’ y el deseo de familia y trabajo (p. 122).

En este sentido intentó desarrollar Imaginario 9 la campaña *Acompañe, no castigue* 2018. Compartiendo las voces de personas usuarias o vinculadas a PBC, conociendo sus experiencias y trayectorias, problematizando las situaciones que enfrentan día a día, atravesadas por el estigma, la sospecha, el castigo, el estado de alerta permanente ante múltiples violencias, las sistemáticas vulneraciones de derechos y la criminalización. Compartiendo las voces de personas que desempeñan actividades en ámbitos que históricamente han institucionalizado procesos de vulneración, padecimiento y expulsión social de personas usuarias o vinculadas a PBC, como la Salud Pública o la Fiscalía General de la Nación, para evidenciar que aún desde estos ámbitos es posible construir discursos que cuestionan el prohibicionismo y abstencionismo y en ocasiones (aunque con dificultades) también es posible desarrollar prácticas desde un enfoque de reducción de daños y de cuidados hacia las personas usuarias de drogas.

También me gustaría hacer un breve comentario sobre mi lugar de investigadora-militante. A partir de su investigación con activistas usuarios de cannabis, Corbelle (2016) expresa que para transitar por diversos espacios y situaciones es necesario adoptar múltiples identidades; a veces se es investigadora, a veces activista, a veces parte de un público. Esta versatilidad es una forma de «sostener la presencia en esos múltiples espacios desde un lugar “no neutral” con las dificultades y ventajas que ello trae aparejado para el trabajo de campo (Tiscornia, 2008)» (Corbelle, 2016, pp. 40-41). La investigadora también destaca que los vínculos emergentes de su trabajo de campo dieron lugar a una compleja red de derechos, obligaciones y compromisos

con las organizaciones de activistas-usuarios, que eran parte de su trabajo de campo, pero también eran lo que permitió sostener esos vínculos (Corbelle, 2016).

En la experiencia sistematizada en este artículo mi lugar de investigadora-militante tuvo algunas semejanzas y diferencias, sobre todo por ser este un trabajo de aproximación al tema y porque al momento de hacer las entrevistas a las personas que participaron de la campaña tanto mis compañeras/os de Imaginario 9 como yo nos identificamos como activistas-militantes por los derechos de las personas usuarias de drogas, no como investigadoras/es.¹⁶ Consideramos que identificarnos como personas usuarias de drogas, además de ser una forma de promover el reconocimiento de las personas usuarias de drogas como sujetos políticos que exigimos un enfoque de reducción de daños, que luchamos por nuestros derechos y por ser interlocutores válidos a la hora de diseñar e implementar políticas de drogas, era una forma de generar proximidad con otras personas usuarias o vinculadas con drogas, con el objetivo de abordar las entrevistas desde la horizontalidad. Desde ya tenemos en claro los privilegios de nuestra situación, al ser universitarias/os blancas/os de clase media, sabemos que no tiene comparación con las situaciones que atraviesan personas usuarias de PBC, personas en situación de calle o usuarias de refugios. Pero nos parecía importante dejar en evidencia que todas las personas usuarias de drogas, aunque en muy disímiles niveles, podemos atravesar situaciones de estigmatización y criminalización.

Finalmente, querría mencionar que desde mi lugar como investigadora en formación en el campo de las drogas y como militante por los derechos de las personas usuarias de drogas, los vínculos entre dinero, política, derechos y democracia me generan juicios morales y conflictos éticos. Entiendo que el solo hecho de que un colectivo de la sociedad civil reciba fondos de una campaña financiada por la OSF, como lo es *Acompañe, no castigue*, no necesariamente significa que su lucha está cooptada por el liberalismo. ¿Alguien creería que es un objetivo de los colectivos que trabajamos en el campo de las políticas de drogas desde el Sur Global estar bajo el ala de los *think tanks* liberales del Norte Global? Me resulta más acertado comprender que accedemos a recibir estos magros financiamientos porque no tenemos apoyo por parte del Estado para llevar adelante acciones que promuevan la reducción de daños entre las personas que usamos drogas.

Sin pretensiones de emitir juicios de valor respecto a estas fundaciones y los fines últimos de sus financiamientos, me parece relevante reparar en estas cuestiones para que al mismo tiempo que se acepta este tipo de financiamiento se generen ejercicios deliberativos, reflexivos

16 Mientras llevamos adelante esta campaña, gran parte de las/os integrantes de nuestro colectivo cursamos estudios de posgrado vinculados al campo de las drogas, en el marco de los cuales el curso de Antropología de las drogas motivó este acercamiento entre las prácticas de investigación y el relacionamiento con el medio, que concretamos en la campaña *Acompañe, no castigue* 2018.

y críticos al interior de los colectivos y organizaciones, teniendo presente que el hecho de recibir financiamiento para promover determinados temas, en determinados territorios y en determinados momentos no es algo neutral ni inocente. Ya sea que nos dediquemos al activismo-militancia o a la investigación científica, no debemos perder de vista que nuestro fin último es lograr reformas a las políticas de drogas como una forma de promover el desarrollo y la justicia social.

Referencias

- Aguiar, S., y Musto, C. (2015). El rayo verde: regulación de la marihuana en Uruguay. En B. Caiuby Labate y T. Rodríguez (Eds), *Drogas, política y sociedad en América Latina y el Caribe* (297-316). Ciudad de México: CIDE.
- Albano, G., Castelli, L., Martínez, E., y Rossal, M. (2014). Investigación etnográfica: Efectos y prácticas de consumo problemático de Pasta Base de Cocaína (PBC) en poblaciones ocultas de Montevideo. En Observatorio Uruguayo de Drogas (OUD), *Observatorio Uruguayo de Drogas. Pasta base de cocaína en Uruguay. Compilación*. Montevideo: OUD.
- Albano, G., Castelli, L., Martínez, E., y Rossal, M. (2015). Violencia institucional y reproducción de estigmas en usuarios de cocaínas fumables de Montevideo. *Revista Psicología em Pesquisa*, 9(2), 111-125.
- Álvarez Petraglia, F., y Montedecar, I. (2013). La agravante específica del Art. 35 bis del Decreto-Ley 14.294 (Art. 4.º de la Ley n.º 19.007). *Revista de Derecho Penal*, (21), 11-19.
- Arocena, F., y Aguiar, S. (2017). Tres leyes innovadoras en Uruguay. Aborto, matrimonio homosexual y regulación de la marihuana. *Revista de Ciencias Sociales*, 30(40), 43-62.
- Bayce, R. (2012). Los trasfondos del imaginario sobre «drogas»: valores culturales, Geopolítica, intereses corporativos y hechos mediáticos. En C. Casacuberta, M. Gerstenblüth, P. Triunfo, G. Bardazano, R. Bayce, V. Filardo, ... V. Magone, *Aporte universitario al Debate Nacional sobre Drogas* (pp. 63-118). Montevideo: CSIC, Universidad de la República.
- Bewley-Taylor, D. (2012). Hacia una revisión de las convenciones de drogas de la ONU. La lógica y los dilemas de los grupos afines. *Transnational Institute. Serie Reforma Legislativa en Materia de Drogas*, (19).
- Blickman, T., y Jelsma, M. (2009). La reforma de las políticas de drogas. Experiencias alternativas en Europa y Estados Unidos. *Revista Nueva Sociedad*, (222), 81-103.
- Bringel, B., y Falero, A. (2016). Movimientos sociales, gobiernos progresistas y Estado América Latina: transiciones, conflictos y mediaciones. *Cuaderno CRH*, 29(3), 27-45.
- Cifuentes, R. M. (2016). IAP y sistematización de experiencias: apuestas, propuestas, desafíos para construir educaciones e intervenciones pertinentes y potenciadoras. En *V Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales. Métodos, metodologías y nuevas epistemologías en las ciencias sociales: desafíos para el conocimiento profundo de Nuestra América*. Red Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Recuperado de <http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/v-elmecs/actas-2016/Cifuentes.pdf>.
- Corbelle, F. (2016). *Dar la cara como «usuario responsable»*. *El activismo político de los usuarios de drogas: de la clandestinidad al Congreso Nacional* (Tesis doctoral, Filodigital, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires).
- Deheza, R. del P., y Mariotta, R. (2019). Gestión de riesgos y reducción de daños asociados a las nuevas sustancias psicoactivas. *Revista de Derecho Penal*, (27), 107-124.
- Delacoste, G. (2015). Los límites de la articulación: los movimientos sociales en el Uruguay frenteamplista. *Revista Contrapunto*, (7), 13-25.

- De Sutter, L. (2021). *Narcocapitalismo. Para acabar con la sociedad de la anestesia*. Barcelona: Penguin Random House.
- Diani, M. (2015). Revisando el concepto de movimiento social. *Encrucijadas: Revista Crítica de Ciencias Sociales*, 2(9), 1-16.
- Dominzaín, S. (2007). Hacia la conformación de una Arena Cívica, sociedad civil y acción institucional en Uruguay de los noventa. En *XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología*, Asociación Latinoamericana de Sociología, Guadalajara. Recuperado de <https://cdsa.academica.org/ooo-066/1665>.
- Entre (2019). *La reacción. Derecha e incorrección política en Uruguay*. Montevideo: Estuario Editora.
- Fang, L. (2017, diciembre 13). Esfera de influencia: Cómo los libertarians estadounidenses están reinventando la política de América Latina. *La Diaria*. Recuperado de <https://ladiaria.com.uy/lento/articulo/2017/12/esfera-de-influencia-como-los-libertarians-estadounidenses-estan-reinventando-la-politica-de-america-latina/>.
- Fernández Romar, J., Curbelo, E., y Estela, P. (2015). Estrategias de abordaje comunitario en drogas inspiradas por el metamodelo ECO². En J. Fernández Romar y M. Rossal (Comps.), *Puntos de encuentro / Puntos de mira. Aproximaciones a la reducción de daños en situaciones de extrema precariedad social* (pp. 21-27). Montevideo: FHCE, Universidad de la República.
- Fernández Romar, J., y Rossal, M. (Comps.) (2015). *Puntos de encuentro / Puntos de mira. Aproximaciones a la reducción de daños en situaciones de extrema precariedad social*. Montevideo: FHCE, Universidad de la República.
- Filardo, V., Aguiar, S., Musto, C., y Pieri, D. (2012). La marihuana provoca esquizofrenia. Espacio público y drogas en Uruguay. En C. Casacuberta, M. Gerstenblüth, P. Triunfo, G. Bardazano, R. Bayce, V. Filardo, ... V. Magone, *Aporte Universitario al Debate Nacional sobre Drogas*. Montevideo: CSIC, Universidad de la República.
- Fraiman, R., y Rossal, M. (2009). *Si tocás pito te dan cumbia. (Esbozo antropológico de la violencia en Montevideo)*. Montevideo: MI-PNUD-AECID.
- Góngora, A. (2016). El gobierno de las redes: una etnografía de la reducción de daño en Colombia. *Mana*, 22(2), 277-310.
- Guber, R. (2001). *La etnografía. Método, campo y reflexividad*. Bogotá: Norma.
- Hardt, M., y Negri, A. (2000). *Imperio*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hernández, E. (2015). Reducción de riesgos y daños y tratamiento comunitario en Uruguay: El tránsito de Aleros al Punto de Encuentro. En J. Fernández Romar y M. Rossal (Comps.), *Puntos de encuentro / Puntos de mira. Aproximaciones a la reducción de daños en situaciones de extrema precariedad social* (pp. 17-19). Montevideo: FHCE, Universidad de la República.
- International Harm Reduction Association (2010). What is Harm Reduction? A position statement from the International Harm Reduction Association. Recuperado de https://www.hri.global/files/2010/08/10/Briefing_What_is_HR_English.pdf.
- Keuroglan, L., Ramírez, J., Suárez, H., Rossal, M., y Castelli, L. (2019). *Personas, calle, consumos: dos estudios sobre uso de pasta base en Uruguay. Aproximaciones cuantitativas y etnográficas*. Montevideo: OUD, SND-FHCE, Universidad de la República.
- Legrand, D. (2021, setiembre 29). Persecución del microtráfico en la LUC: 95 % de quienes caen presas por intentar ingresar drogas a las cárceles son mujeres. *La Diaria*. Recuperado de <https://ladiaria.com.uy/justicia/articulo/2021/9/persecucion-del-microtrafico-en-la-luc-95-de-quienes-caen-presas-por-intentar-ingresar-drogas-a-las-carceles-son-mujeres/>.
- Marchesi, A. (2020, mayo 23). Filántropos, izquierda y los mitos de la extrema derecha. *La Diaria*. Recuperado de <https://ladiaria.com.uy/opinion/articulo/2020/5/filantropos-izquierda-y-los-mitos-de-la-extrema-derecha/>.
- Martínez Oró, D. P., y Pallarés Gómez, J. (2013). *De riesgos y placeres. Manual para entender las drogas*. Lérida: Editorial Milenio.

- Massó Guijarro, P. (2014). *Un aleph en el callejón del gato. Espacio, cuerpo y ritual: una antropología de los tratamientos de heroína para la adicción a opiáceos en la biopolítica de la reducción de daños* (Tesis doctoral, Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social, Universidad Rovira I Virgili, Tarragona).
- Merlinsky, G. (2006). La entrevista como forma de conocimiento y como texto negociado. *Cinta Moebio*, (27), 27-33.
- Metaal, P., y Youngers, C. (2010). *Sistemas sobrecargados. Leyes de drogas y cárceles en América Latina*. Buenos Aires: WOLA-TNI.
- Musto, C. (2018). *Regulating Cannabis Markets. The construction of an innovative drug policy in Uruguay* (Tesis doctoral, Universidad de Kent, Canterbury y Universidad de Utrecht, Utrecht).
- Negro Fernández, C. (2013). La nueva regulación de la pasta base de cocaína. *Revista de Derecho Penal*, (21), 21-33.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) (2018). *Informe mundial sobre las drogas 2018*. Viena: ONUDD.
- Pérez Correa, C., y Youngers, C. (2014). *En busca de los derechos: Usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina*. Ciudad de México: CEDD.
- Preciado, P. B. (2020). *Testo Yonqui. Sexo, drogas y biopolítica*. Barcelona: Anagrama.
- Romaní, O., y Sepúlveda, M. (2013). Conceptualización y políticas de la gestión del riesgo. En D. P. Martínez Oró y J. Pallarés Gómez (Eds.), *De riesgos y placeres. Manual para entender las drogas* (pp. 89-102). Lérica: Editorial Milenio.
- Romano, S., Lajtman, T., y García, A. (2018). ¿Por qué y cómo se piensa desde EEUU a América Latina? Función, dinámica e intereses de los think tanks estadounidenses que estudian América Latina. *Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, sección Análisis Geopolítico*. Recuperado de <https://www.celag.org/wp-content/uploads/2018/06/THINK-TANK-CELAG.pdf>.
- Romo Avilés, N. (2020). Propuestas sobre género y masculinidades en el estudio de los usos y abusos de drogas. *Revista Española de Drogodependencias*, 1(45), 5-9.
- Rossal, M., Clavijo, I., Curbelo, M. N., Godoy, P., Lescano, J., y Matto, M. (2015). Entre el rescate y la fisura. A propósito del Punto de Encuentro «Lagarto San Antonio». En J. Fernández Romar y M. Rossal (Comps.), *Puntos de encuentro / Puntos de mira. Aproximaciones a la reducción de daños en situaciones de extrema precariedad social* (pp. 35-64). Montevideo: FHCE, Universidad de la República.
- Segato, R. (2006). Antropología e direitos humanos: alteridade e ética no movimento de expansão dos direitos universais. *Mana*, 12(1), 207-236.
- Segato, R. (2013). *La crítica de la colonialidad en ocho ensayos y una antropología por demanda*. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Sepúlveda, M. (2011). El riesgo como dispositivo de gobierno: neoprudencialismo y subjetivación. *Revista de Psicología de la Universidad de Chile*, 20(2), 103-124.
- Silva Forné, D. (2016). *Drogas y Derecho Penal en el Uruguay. Tolerancia, prohibición, regulación. Evolución del derecho uruguayo, su doctrina y jurisprudencia*. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria.
- Thoumi, F. (2009). La normatividad internacional sobre drogas como camisa de fuerza. *Revista Nueva Sociedad*, (222), 42-59.
- United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) (2019). *Health, Rights and Drugs: Harm Reduction, Decriminalization and Zero Discrimination for People who use Drugs*. Ginebra: Unids.
- Uruguay (2012, noviembre 16). Ley n.º 19.007: Delitos contra la Administración Pública y de Tráfico de Pasta Base de Cocaína. Recuperado de <https://www.impo.com.uy/bases/leyes-originales/19007-2012/4>.
- Valencia, S. (2010). *Capitalismo gore*. Santa Cruz de Tenerife: Melusina.
- Youngers, C., García Castro, T., y Manzur, M. (2020). *Mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas en América Latina: lo que los números evidencian*. Washington: WOLA.

EL ABORDAJE PENTECOSTAL AL CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS.

FRAGMENTOS DE UNA EXPERIENCIA ETNOGRÁFICA EN MONTEVIDEO¹

THE PENTECOSTAL APPROACH TO PROBLEMATIC DRUG CONSUMPTION.
EXCERPTS FROM AN ETHNOGRAPHIC EXPERIENCE IN MONTEVIDEO

A ABORDAGEM PENTECOSTAL AO CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS.
FRAGMENTOS DE UMA EXPERIÊNCIA ETNOGRÁFICA EM MONTEVIDEO

Magdalena Milsev Santana

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. magdalenams610@gmail.com

Recibido: 7/6/2022 | Aceptado: 13/9/2022

¹ El presente texto surge de la tesis de maestría en Ciencias Humanas opción Antropología de la región de la Cuenca del Plata (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República), para la cual se contó con una Beca de Investigación Fundamental de la ANII bajo el código POS_NAC_2017_1_141433.

Resumen: A partir de las experiencias etnográficas desarrolladas en dos sedes de la organización no gubernamental neopentecostal Espíritu, Alma, Cuerpo —y más específicamente de sus Hogares Beraca, orientados al abordaje del consumo problemático de drogas— el presente artículo se propone abordar los relatos de mujeres que residen en tales espacios de vida colectiva e institucionalizada, entendidos aquí como «dispositivos» en el marco de los cuales se reconstituyen subjetividades desde una perspectiva religiosa.

Teniendo al enfoque narrativo en Antropología como marco de referencia teórico-metodológico, el texto se centra en las experiencias que llevan al involucramiento con tal institución, recuperándose para ello las narrativas de mujeres que habitan en dos hogares de dicha organización, los pertenecientes a los barrios la Unión y Tres Cruces de la ciudad de Montevideo, Uruguay.

En vista de las polémicas en torno a los abordajes sociosanitarios como los desplegados en el contexto de Beraca, el trabajo se propone comprender la perspectiva de quienes han proyectado su vida en el interior de la institución, considerando sus procesos reflexivos y sus limitaciones materiales. En este sentido, el involucramiento con la organización es entendido como un acto de agencia y de supervivencia ante situaciones de crisis asociadas a un contexto de pobreza y precariedad.

Palabras clave: religión; neopentecostalismo; drogas; etnografía

Abstract: Based on the ethnographic experiences developed in two branches of the Neo-Pentecostal Non-governmental organization «Espíritu, Alma, Cuerpo» - and more specifically in its Beraca Homes, aimed at addressing problematic drug use - this article aims to address the stories of women who live in such spaces of collective and institutionalized life, understood here as «devices» within the framework of which subjectivities are constituted from a religious perspective.

Keeping the narrative approach in Anthropology as a theoretical-methodological framework, the text focuses on the experiences that lead to the involvement with this institution, taking for this the narratives of women who live in two homes of the mentioned organization, those belonging to the neighborhoods La Unión and Tres Cruces in the city of Montevideo, Uruguay.

Bearing in mind the controversies around socio-sanitary approaches such as those deployed in the context of Beraca, the work aims to understand the perspective of those who have projected their lives inside the institution, considering their reflexive processes and their material limitations. In this sense, involvement with the organization is understood as an act of agency and survival in crisis situations associated with a context of poverty and precariousness.

Keywords: religion; neo-pentecostalism; drugs; ethnography

Resumo: A partir das experiências etnográficas desenvolvidas em duas filiais da organização não governamental neopentecostal «Espíritu, Alma, Cuerpo» - e mais especificamente em suas Casas Beraca, voltadas ao enfrentamento do uso problemático de drogas - este artigo visa abordar as histórias de mulheres que vivem nesses espaços de vida e institucionalizados, entendidos aqui como «dispositivos» no quadro dos quais as subjetividades são reconstituídas a partir de uma perspectiva religiosa.

Tomando a abordagem narrativa em Antropologia como referencial teórico-metodológico, o texto enfoca as experiências que levam ao envolvimento com tal instituição, recuperando para isso as narrativas de mulheres que moram em duas casas da referida ONG, aquelas pertencentes aos bairros La Unión e Tres Cruces na cidade de Montevideo, Uruguai. Diante das controvérsias em torno de abordagens socio-sanitárias como as implantadas no contexto da Beraca, o trabalho visa compreender a perspectiva daqueles que projetaram suas vidas dentro da instituição, considerando seus processos reflexivos e suas limitações materiais. Nesse sentido, o envolvimento com a organização é entendido como um ato de agência e sobrevivência em situações de crise associadas a um contexto de pobreza e precariedade.

Palavras-chave: religião; neopentecostalismo; drogas; etnografia

Introducción

Desde la década del noventa la presencia de organizaciones no gubernamentales religiosas orientadas a la atención de población empobrecida se ha vuelto parte «común» del paisaje social uruguayo, y los abordajes sociosanitarios que proponen resultan las opciones más accesibles especialmente para los casos de consumo problemático de drogas.

Entre el variado espectro de ONG que brindan servicios de este tipo —cuyo alcance y número no ha sido aún dimensionado— se encuentran los Hogares Beraca, espacios de vida colectiva pertenecientes a la ONG Espíritu, Alma, Cuerpo (Esalcu), obra social de la iglesia neopentecostal Misión Vida para las Naciones. En los que suelen convivir entre cincuenta y cien personas a cargo de la autoridad de una pareja de pastores y jerarquías intermedias, y que se estima alojan en Uruguay a unas dos mil personas.

El presente artículo se propone dar cuenta de las experiencias previas al ingreso a dicha organización de mujeres que la habitan desde hace un tiempo considerable (entre uno y siete años), a partir de los relatos recuperados durante el trabajo de campo realizado allí en 2018, tomando para ello como referencia teórico-metodológica al «enfoque narrativo en Antropología» (Jimeno, 2016).

Teniendo en cuenta que se trata este de un trabajo sobre una variante dentro del pentecostalismo y su abordaje al consumo de drogas, se consideran sus antecedentes a nivel nacional, por un lado a las producciones académicas sobre dicho movimiento, y por otro a las investigaciones que han abordado las intersecciones drogas-religión, encontrándose cierta vacancia en lo que respecta al tratamiento de este tema en su especificidad.

En lo que respecta a las investigaciones sobre pentecostalismo, la bibliografía relevada se caracteriza por abordar casi exclusivamente la vertiente brasileña del movimiento así como por dar especial énfasis a su aspecto monetario. Encontrándose en esta línea a los trabajos pioneros de Renzo Pi Hugarte (1992) y Nicolás Guigou (1993). Y posteriormente a los artículos de autores extranjeros sobre la temática, teniéndose por un lado el de Oro y Semán (2000) donde el caso uruguayo es abordado brevemente, y el de Oro (2001) en el cual se hace una aproximación a un episodio montevideano concreto.

Más contemporáneamente, se encuentran trabajos socioantropológicos que, a partir de diferentes enfoques metodológicos, han abordado diversas dimensiones de los pentecostalismos. Con textos que enfatizan en las creencias, como el de Guigou y Yamila Rovitto (2004) que aborda la guerra espiritual en el contexto de la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD) y el de Milsev (2019) que enfatiza en el milenarismo en la IMVN, los textos de

Victoria Sotelo (2011, 2016, 2017, 2021) quien profundiza en las intersecciones entre clase social y religión a partir de las prácticas asociadas a la teología de la prosperidad. Y los trabajos que han enfatizado en las dimensiones políticas del fenómeno, tanto a un nivel discursivo-comunicacional (Guigou, 2006a; 2006b), como situado en contextos etnográficos concretos (Sotelo, 2019, 2021; Milsev, 2020, 2021a, 2021b).

Entre las producciones académicas nacionales destaca como antecedente la tesis de maestría de Rovitto (2006) quien aborda «las narrativas de los procesos de conversión y de las trayectorias de vida a través de las cuales, fieles de la IURD en Montevideo redefinen su lugar en el mundo, interpretan su pasado y se proyectan en el futuro sobre el marco de las soluciones que la iglesia propone en un contexto social particular» (Rovitto, 2006, p. 2).

Dicho trabajo, desarrollado desde una perspectiva teórico-metodológica semejante a la de este texto, permite establecer paralelismos y contraposiciones en cuanto a las dinámicas religiosas presentes en las distintas instituciones, ambas categorizadas como «neopentecostales», por lo que es un importante insumo para dar cuenta de la diversidad a la interna de dicho fenómeno religioso.

Por otra parte, en lo que respecta a las investigaciones sobre las intersecciones drogas-religión, es de destacar que en Uruguay se han centrado en el abordaje de grupos religiosos caracterizados por el uso de sustancias psicoactivas (Apud, 2013; Scuro, 2012, 2015, 2016, 2018), no encontrándose investigaciones que profundicen en la tendencia opuesta —abstencionismo— característica de los dispositivos pentecostales como el de Beraca.

En este sentido, el presente texto se propone sentar un antecedente en Uruguay a través del diálogo con producciones regionales en el tema, considerando a la «espiritualización terapéutica de la conducta adictiva» (Algranti y Mosqueira, 2018) en su carácter transnacional, cuyas lógicas de desarrollo en el caso de la IMVN y de la ONG asociada, se remontan al caso argentino, como se verá más adelante.

El abordaje teórico-metodológico privilegiado en la investigación fue el de la perspectiva narrativa en Antropología, en tanto permite acceder a las experiencias de los sujetos en sus propios términos, así como dar cuenta del carácter no esencialista y cambiante de las identidades. De acuerdo con Jimeno (2016) esta perspectiva, al desdibujar «las distinciones entre relato objetivo y subjetivo, real e imaginario» ayuda a «comprender las relaciones entre producción narrativa, sujeto, grupo social y formación cultural» (p. 9).

En esta línea, se presentan una serie de fragmentos de relatos que pueden considerarse «narrativas de conversión», en tanto implican no solo un ordenamiento temporal de las

experiencias, sino la asignación de un sentido religioso a la propia vida, según un modelo de narrativa testimonial de impronta bíblica.

Como todo relato, estos, lejos de encontrarse en una relación de «transparencia» con el mundo del que pretenden dar cuenta (Visacovsky, 2016), deben comprenderse atendiendo a sus diferentes niveles de «opacidad». Es importante en este caso considerar, por un lado, la funcionalidad que cumplen en el contexto religioso, en tanto relatos testimoniales que vienen a «demostrar» la acción de Dios en el mundo, y, de este modo, evangelizar. Y, por otro, debido a las características de la conversión en tanto proceso, a cuyos orígenes es imposible acceder una vez que el sujeto converso ha constituido un relato religioso de la propia vida y reinterpretado su existencia desde esta perspectiva (Frigerio, 2002).

En este último sentido, siguiendo a Judith Butler (2001), los relatos de conversión no solo constituyen un producto de los procesos de subjetivación que los sujetos han atravesado, sino que son parte constitutiva de tales procesos dada la circularidad del relato de sujeción, «que presupone al mismo sujeto del que pretende dar cuenta» (p. 22).

En el caso que compete al presente artículo, tales narraciones deben de asumir, a su vez, el desafío de tomar en cuenta la institucionalización religiosa a la que se someten los sujetos una vez ingresan a Beraca, sin caer por ello en una perspectiva etnocéntrica que «evalúe» las identidades neopentecostales que pueden llegar a constituirse en tales espacios.

En este sentido, los Hogares Beraca son conceptualizados aquí como «dispositivos» en tanto conjunto heterogéneo que incluye y articula en red elementos discursivos y no discursivos, y que tiene una función estratégica concreta (Agamben, 2014, p. 8). Una «governabilidad ejercida a través de un «programa» institucional, resultado de discursos y prácticas que configuran un espacio practicado por tecnologías de poder» (De Certeau, 1996 en Garbi, 2020, p. 28).

En estos se despliegan diferentes estrategias orientadas no solo a abordar el consumo de drogas desde una perspectiva abstencionista, sino también a actuar y transformar las subjetividades de las y los «internos» en un sentido amplio. Esto es visible en las narrativas de conversión producto de los procesos de resubjetivación recuperadas en tales contextos.

Desde una perspectiva de derechos los abordajes como los de la ONG aquí tratada pueden ser problematizados en más de un sentido. Sin ánimos de polemizar en esa línea, se considera aquí que la asistencia a tales espacios y la permanencia en ellos forma parte de las estrategias y modos de «agenciar» que tienen los sujetos ante situaciones críticas ligadas a estructuras políticas de desigualdad y al solapamiento y continuidad de los distintos tipos de violencia estructural, simbólica y normalizadora que se imprime de modo particular en sectores empobrecidos (Bourgois, 2009, 2010). Es así que se entienden «los procesos macro sociales»

«no como mero contexto», sino como fenómenos constitutivos, que «toman forma, fragilizan, modelan y son modelados, padecidos, resistidos, corporizados por estos conjuntos sociales» (Garbi, 2020, p. 20).

El trabajo de campo

El presente artículo es resultado de la etnografía llevada adelante en la iglesia Misión Vida para las Naciones (IMVN) desde junio de 2018 a julio de 2019, en el marco de la cual se hizo una aproximación etnográfica a los Hogares Beraca para mujeres de los barrios La Unión y Tres Cruces de la ciudad de Montevideo.

Basándose la elección de los citados ámbitos para el desarrollo del trabajo de campo en el protagonismo que la iglesia y la ONG han tenido en el activismo opositor a los proyectos legislativos y educativos vinculados a la ampliación de derechos sexuales y reproductivos, así como a su involucramiento en la política partidaria del país a través del aparato institucional religioso.

La ONG Esalcu (espíritu, alma, cuerpo) más conocida por sus Hogares Beraca constituye la «obra social» de la iglesia neopentecostal Misión Vida para las Naciones, motivo por el cual, pese a la separación legal entre ambas instituciones, hablar de una implica necesariamente hacer referencia a la otra, encontrándose una voluminosa cantidad de fieles que circulan entre ambos espacios y comparten las mismas jerarquías religiosas.

Surgida como escisión de los Ministerios Ondas de Amor y Paz (MOAP) a mediados de los noventa, la IMVN mantiene ciertas características asociadas al «neopentecostalismo argentino» del cual emergió, encontrándose entre ellas especialmente a la labor social desarrollada por la ONG Esalcu, en tanto la existencia de los Hogares puede encontrar su expresión seminal en las actividades entre sectores desfavorecidos desplegadas por MOAP en Buenos Aires (Spadafora, 2004; Algranti y Mosqueira, 2018).

Formalmente, el surgimiento de dicha ONG se remonta a las Comunidades Beraca,² fundadas durante 2002 en el marco de la fuerte crisis económica y social vivida en Uruguay, en la que se sitúa la aparición de la pasta base de cocaína en el país (Albano, Castelli, Martínez y Rossal,

2 Del hebreo *berakhah*, «bendición», hace alusión al relato presente en Crónicas 20 del Antiguo Testamento, en el cual Dios hace que las etnias enemigas de Josafat rey de Judá se destruyan entre sí previo al combate que tenían planeado contra este, otorgándole así la victoria a la tribu judía. «El cuarto día se reunieron en el valle y alabaron al Señor. Por eso se llama Valle de las Bendiciones hasta hoy. Los hombres de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron contentos a Jerusalén, porque el Señor los había colmado de gozo a costa de sus enemigos» (Crónicas 26-28).

Según la publicación de la iglesia «Hogares Beraca. La verdadera Historia» (s/d, 2016), los Hogares se rigen según la Ley n.º 17.885, que «regula el trabajo voluntario en forma directa o indirecta con las instituciones públicas», siendo de destacar que, sin embargo, según el mismo documento «persiste al día de hoy un vacío legal».

2014). Momento a partir del cual han presentado un crecimiento constante, contándose para 2018 con 64 Hogares Beraca, 53 en Uruguay (12 en Montevideo y 41 en el interior del país), y 11 más distribuidos en Argentina, Chile, Brasil y Haití.³

Estos se organizan diferencialmente en Hogares «de hombres», «de mujeres», y «de madres con hijos», donde cada uno se dedica a actividades económicas específicas, tales como panificación, producción textil, serigrafía, trabajo rural, carpintería, herrería, etc. con el fin de auto sustentarse, si bien en algunos casos los hogares más prósperos donan a aquellos con más carencias.

Se considera que cada hogar funciona «como una familia», en la que el matrimonio de pastores encargados cumpliría una «función parental» a través del cuidado y establecimiento de disciplina, existiendo a su vez la figura jerárquicamente inferior e intermediaria del «hermano/a mayor», constituida por residentes que proyectan su vida en la institución.

Imagen 1. Taller de costura



Se puede identificar el pasacalle con el texto «Femenina sí, feminista no», que desató polémica en la marcha por el Día Internacional de la Mujer en 2017 y que separa el taller de costura del de serigrafía. Hogar Beraca para madres con hijos, barrio La Unión, Montevideo. Autoría propia, octubre de 2018.

3 En Argentina se encuentra en San Juan; en Brasil en la localidad de Leme, San Pablo; en Chile en Coquimbo, y en Haití en Puerto Príncipe.

Que las figuras de autoridad provengan de los mismos contextos de los «internos» se considera un «valor agregado», no solo por la cercanía social que facilita la comunicación, sino también por la legitimidad que adquiere una autoridad basada en la experiencia en estos espacios. Es de destacar la presencia prácticamente nula de profesionales, con una única psicóloga que hace las entrevistas al momento de ingreso.

Imagen 2. Niñas y niños mirando televisión luego de la escuela



Hogar Beraca para madres con hijos, barrio La Unión, Montevideo. Autoría propia, octubre de 2018.

En lo que respecta al hogar Beraca de madres con hijos del barrio La Unión en el cual se desarrolló la aproximación etnográfica, puede decirse en principio que constituye un espacio habitacional amplio, en el cual convivían al momento del estudio además de la familia de pastores, dos matrimonios voluntarios y tres voluntarias, encontrándose un total de cuarenta y nueve residentes (dentro de ellos, dieciocho niños y nueve adolescentes).

La casa donde viven las mujeres y sus hijos es una construcción nueva de dos plantas, con piso de portland y techo de chapa, construida como ampliación del hogar original. Ubicada hacia el fondo de la sede central de la ONG Esalcu, separada a la izquierda mediante un muro de un hogar masculino dedicado a la panificación. El total del predio de este «hogar de madres»

es amplio y enrejado, y dado que incluye a las oficinas de la ONG suele encontrarse muy concurrido, por lo que habitualmente se ve a personas haciendo fila hacia el frente para las entrevistas de ingreso.

El establecimiento se organiza según áreas de actividad, edades y sexo de sus residentes, con un amplio hall en la planta baja donde se encuentran los espacios de cocina, comedor, baños, y áreas comunes de recreación, y en el segundo piso, las habitaciones de las madres —donde también duermen bebés— y por otra parte las de niñas, niños y adolescentes.

Hacia los lados de dicha construcción se ubica la casa de los pastores encargados del Hogar, dos patios de tierra y portland con algunos juegos infantiles, y hacia el fondo un galpón donde se localizan los talleres de costura y serigrafía en los cuales las residentes trabajan diariamente ocho horas.

La actividad diaria en este contexto se orienta a pautar el comportamiento a partir del seguimiento de una rutina diaria que comienza a las siete de la mañana con una oración conjunta —un «devocional»— que marca el inicio de la jornada para los adultos, a lo cual le sigue una jornada laboral de ocho horas. El trabajo juega un rol no solo en la sustentación económica de los hogares y quienes los habitan, sino también en la configuración de una nueva corporalidad abocada a la producción, una «biopolítica» —en términos de Foucault— de inspiración religiosa.

Imagen 3. Mujeres trabajando en el taller de serigrafía



Hogar Beraca para madres con hijos, barrio La Unión, Montevideo. Autoría propia, octubre de 2018.

En este contexto, el trabajo de campo discurrió en visitas guiadas por el edificio y sus alrededores, comidas compartidas y entrevistas a mujeres que viven allí. Es de destacar que tales actividades se caracterizaron por la observación de las autoridades y funcionarios de la ONG, quienes reaccionaron a mi presencia con recelo, dada la atención mediática negativa que ha tenido la institución y las denuncias públicas que ha recibido.

Desde cierto «sentido común» liberal las estructuras de poder que presentan los Hogares resultan autoritarias y en muchos sentidos «contrarias a los intereses» de quienes se involucran en estos, llegándose en algunos casos a deslegitimar las identidades religiosas constituidas en estos espacios a través de categorías peyorativas como «lavado de cerebro» o «secta».

Frente a tal postura, ligada estrechamente a un «etnocentrismo de clase» (Bourdieu, Chamboredon, Passeron, 2002) —etnocentrismo que es también religioso, en tanto hay identidades religiosas consideradas «más válidas que otras»—, se pueden llegar a adoptar las siguientes perspectivas problemáticas: por un lado, el enfatizar en el poder de coacción religioso sobre los internos, sin considerar el carácter activo de estos, silenciando sus voces y negando su cosmovisión religiosa o las estrategias de supervivencia que subyacen a su permanencia en estos lugares; y por otro, en un afán relativista, el asumir que quienes habitan estos espacios lo hacen por absoluta elección, y que aceptan en estos términos situaciones de violencia de forma aproblemática.

Teniendo presente los riesgos que se corren desde una perspectiva ética y política al abordar colectivos que resultan «reaccionarios» para quien investiga y su grupo de pertenencia, la etnografía tuvo como guía la propuesta de Gusterson (1993, en Abélès y Badaró, 2015), quien «sugiere una estrategia de escritura polifónica» que ponga en diálogo las diversas posturas de los interlocutores en su contexto, posibilitando «dar cuenta de terrenos culturales y políticos fuertemente controvertidos sin renunciar a una posición crítica, pero también sin renunciar al impulso de comprender y humanizar al Otro, que es la base de la mejor etnografía (Gusterson, 1993, en Abélès y Badaró, 2015, p. 109).

En este sentido, se trató de mantener aquí una postura comprensiva y reflexiva que trata de escuchar las voces de quienes residen en Beraca y sostienen un proyecto de vida en dicho contexto, teniendo presente su situación de vida previa al ingreso, así como sus posibilidades materiales de proyectarse más allá de él.

Viviendo en Beraca: los relatos de dos «internas» y una «voluntaria»

Abuso sexual, violencia de género, actividades delictivas, consumo problemático de drogas, situación de calle, maternidades truncadas fueron algunas de las experiencias narradas por las

interlocutoras en el contexto de Beraca asociadas al crítico momento de su involucramiento con la institución, más allá del distanciamiento temporal entre tales eventos.

El diálogo con algunas de ellas resultó dificultoso. No solo por el mencionado control de las situaciones etnográficas, sino también por el carácter sensible de los temas que atraviesan a sus relatos. En este contexto eran usualmente las residentes más antiguas quienes se sentían con algo más de «libertad» en el marco de la institución y se permitían conversar. Es de destacar que las entrevistas a algunas residentes del hogar de Tres Cruces no sucedieron en el contexto de dicho espacio, sino en el templo de la IMVN tras las reuniones nocturnas.

Se presentan a continuación los fragmentos de los relatos de conversión de Alicia⁴ (cuarenta y seis años, hogar Beraca de La Unión) y Julia (diecinueve años, hogar Beraca de Tres Cruces). En los que, pese a las diferencias etarias entre ambas, pueden encontrarse elementos en común que hacen a la situación de vida previo a su involucramiento con la ONG.

Al relato de Alicia accedí cuando estaba haciendo la aproximación etnográfica en el hogar de La Unión. Las autoridades de la institución tuvieron particular interés en que nos conociéramos, y su historia me fue narrada por otras residentes en varias oportunidades como un ejemplo «milagroso» de transformación en Beraca. Nos conocimos una tarde calurosa de octubre en los cubículos de la sede central de la ONG Esalcu donde se llevan a cabo las consultas de ingreso.

4 Los nombres empleados son pseudónimos.

Imagen 4. Fachada de la oficina central de Esalcu, barrio La Unión, Montevideo.



Fuente: autoría propia. Setiembre 2018.

El relato de Alicia no sigue una linealidad clara —fue levemente reestructurado con fines de facilitar su comprensión— y se caracteriza por un rasgo que suele ser común entre quienes han logrado abandonar el consumo de drogas en Beraca. En este las referencias a Dios se vuelven casi constantes y es muy rara la elaboración de ideas sin apelar a significantes religioso: a la deidad se le atribuyen la permanencia en la institución, la resistencia al consumo, la recuperación de los hijos, y el re-establecimiento de un vínculo amoroso con ellas y ellos.

La trayectoria de consumo de Alicia se remonta al matrimonio con un hombre junto a quien se dedicaba a vender droga, y con el que tuvo dos hijos. Luego de su separación, él es asesinado, ella deja a los niños con los abuelos, y pasa a vivir en situación de calle, donde tiene tres hijos. Su ingreso a Beraca se da luego de que el INAU le quite la tenencia de estos niños, tenencia que es recuperada tras abandonar el consumo en la ONG.

Alicia: ...a los diecinueve tuve a mi primer hijo, de veintiséis ahora, y después a Florencia de dieciocho y ahí me dejé. Mi esposo era delincuente, donde vivíamos bien, pero vivíamos de la delincuencia, vendíamos droga,

y ta, después me dejé, a él lo matan y yo seguí la consumición, la vida de la calle, sabía qué vender, cómo robar. La gente de la calle... me conocía. Me movía por todos lados, seguí hasta que cuando me di cuenta estaba metida en la pasta base. Pero gloria a Dios que este chico me predicó.

Tenía cuarenta y dos años y hacía ya varios años que me habían predicado el Evangelio y no... me pareció que era todo una joda que no me servía en mi vida. Consumía pasta base, dieciséis años. Me había dejado, tenía un esposo y lo había dejado por consumir, tuve dos hijos con él y los dejé con los abuelos y... y así fue hasta que empecé a quedar embarazada, tengo un nene de diez años, otro de nueve y Mariana de seis, esos tres los tuve en la calle. El de diez lo dejé con mi cuñada, Esteban no se crió conmigo, y Tadeo y Marcela dieciséis que tienen ahora, yo consumí con ellos, andaba en la calle con ellos, eso... en mi adolescencia no había sido buena, mis padres no me prestaban atención. [...] Y bueno. El INAU me saca a mis hijos por mala atención y bueno, Marcela tuvo una convulsión y voy a parar al Pereira Rossell y ahí me atienden y va la asistente social y ahí me sacan los niños. Y bueno, ahí busqué ayuda en el juzgado para poderlos tener, mi hermana me podía ayudar económicamente, pero no los podía tener. Y ese día me acuerdo, 26 de agosto de 2015, me vieron en la plaza del Pereira Rossell llorando, no sabía qué iba a hacer, y ahí me acuerdo de ese chico que me predicaba el Evangelio.

Esa misma noche vuelvo a consumir, pero en la madrugada había algo que... que me decía que no, que no, que yo estaba, que mi vida necesitaba un cambio. Busco al chico a la madrugada, no estaba. Estuve con su mamá y a la noche el chico me dice «Yo te voy a buscar un lugar para que puedas estar y vamos a la iglesia». Y ahí un pastor de la iglesia Misión Vida me ve y me dice «mira esta noche te quedas en una casa de alguien de la iglesia que pueda tenerte», y de ahí que entré a los Hogares hace cinco años y he recibido a Cristo en mi corazón y un proceso de sanidad sobre mi vida y entender que es ese padre que nunca tuve. Que sigue haciendo su obra y en mis hijos, porque ellos estuvieron dos años y medio en el INAU mientras yo estuve acá, fue todo un proceso porque Marcela era chiquita, dos años y pico y no me reconocía, yo tenía que pasar las visitas por la ventana porque ella no me reconocía, Tadeo era más grandecito, llega al Hogar después de dos años y medio, él viene al Hogar y fue todo un proceso, porque su rechazo... no me quería, herido, y bueno Dios empezó a hacer un proceso, sigue conmigo, con Marcela

M: ¿Cómo surgió eso?

Alicia: Orando y se pidió ratificación al juez, porque mi tiempo son dos años y pico, yo había entrado al Hogar... los chicos que entran al hogar y se van, no aguantan. Yo entré y me quedé. Por más que haya querido irme no lo hice, fue por Dios. Y esa venida de los chicos al Hogar fue un proceso, porque mi hijo me rechazaba, me pegaba, me insultaba, Marcela también, era chica, venía del INAU, orar por ella, no quería estar conmigo, dormíamos en el mismo cuarto, la ponían al lado mío y la encontrábamos durmiendo en el piso. Fue mucha oración y creer en Dios y ver la obra. Los chicos empezaron

a acercarse a mí. Los otros chicos que tengo afuera, que viste que te dije que tengo tres más, ellos vienen a visitarme, tiempo, vienen los fines de semana, días de semana me llaman, y yo sé que es Dios que ellos van a estar conmigo. No hay palabras para expresar lo que hace Dios en nuestra vida.

M: Cuando ingresaste, ¿cómo fue, cómo te resultó adaptarte? ¿Cuándo te empezaste a sentir cómoda acá, digamos?

Alicia: Pasados varios meses de haber entrado al Hogar. Porque cuando uno entra y se queda, buena la cama, agüita caliente, el techo, descansar. Porque el que consume está creído de que no puede dejar de consumir, son heridas de nuestro corazón... son errores de nuestra vida que lleva en el corazón que uno es adicto, y no es así. A mí me costó, me molestaba ir a la iglesia, me molestaba que hablaran de Dios, me molestaba que me hicieran leer la Biblia.

M: ¿Qué te hizo permanecer?

Alicia: Yo creo que fue Dios. El querer salir y que había algo ahí que no me dejaba

M: ¿Qué pensabas?, ¿qué sentías que no te dejaba ir?

Alicia: El amor que encontré en el hogar. No lo ves a Dios, pero... el amor que tienen las personas que viven en los hogares eso te hace permanecer, Dios está en ese momento. Eso te hace permanecer. Muchas veces quise irme, y no podía, no podía, y después pude ir

M: ¿Qué te decían tus compañeras? ¿Les decías que te querías ir?

Alicia: No... las trataba mal. Cosas molestas a los otros... los que están acá es porque han aceptado a Jesús en su corazón, y yo creo que esa gente transmite eso y por más que uno moleste, uno haga algo... yo era muy molesta, había hecho una cantidad de cosas. Era una mujer grande ya y las cosas que hacía y ninguna... el amor que transmiten te hace decir, «¿Qué le pasa a esta piba, no se molesta porque le digo esto, porque le hago esto?». Es el amor de Dios. Eso hace que toque a las personas. Dios toca a las personas.

[...]

M: ¿Cuándo dejaste de querer consumir?

Alicia: Mira a mí me pasó que consumía, fumaba un cigarrillo, y después ya no me hacía nada, pero sí me enganchaba el alcohol. Y yo entré al Hogar y era una mujer muy boca sucia, y a mí me pasó que... yo recibí a Jesús en mi corazón y mi boca... no entendía por qué había cambiado esa manera de hablar en tan poco tiempo. Sí... del alcohol sí tenía ganas, pero la pasta base no, yo no. Y el cigarrillo en el mismo instante que entré no me costó. Pero el alcohol sí, de pensar en mi mente esas ganas de tomar algo, pero no.

M: ¿Qué pensas que te hizo dejar de pensar en eso?

Alicia: Eh... las palabras, el hogar... los hogares son devocionales... la Palabra es lo primero que se quiere que la persona tome. La Biblia... había cosas que me marcaban... entonces que las chicas... «fa léete este versículo»,

y cosas que las había vivido como que las estaba leyendo de otra manera... me enganchaba en las tareas. Había entrado en la cocina, me gustaba la cocina, limpiar. Y es como que volvés a la vida. Te conectás a la realidad, desayunar, tener una comida, tener tiempo de calidad, tus hijos... leer un libro. Estar, viste, en la realidad. Y los que estamos en la calle consumiendo, no conectamos con la realidad, que hay una vida mejor, y... nos consumimos más, nos vamos metiendo más. En los Hogares encontras eso... Y le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios por el chico este (Entrevista a Alicia, Hogar Beraca para madres con hijos, barrio La Unión, octubre de 2018).

Con Julia nos conocimos en las «Reuniones de amigos» de los jueves, nombre dado a los encuentros de «célula» llevados a cabo semanalmente en el templo principal de Misión Vida. Julia era muy amiga de quien fue mi interlocutora principal durante el trabajo de campo, Luisa (treinta y un años, afro-venezolana), y de Sofía (veinte años, afro-venezolana), y si bien al principio del proceso etnográfico mostró simpatía por mi persona, hacia el final, tras la revelación de mi orientación política, comenzó a evadirme de forma notoria.

Como sucede habitualmente con los relatos de conversión, la narración de Julia se remonta a la infancia, momento en el cual asistía con su madre a la IMVN, y pasa por el creciente distanciamiento que experimenta hacia la institución durante la adolescencia. Etapa en la que hace «lo que cualquier gurí normal hace», y «también consumir y vender drogas», así como «prostituirse» (no queda claro si era menor de edad en ese entonces, motivo por el cual pudo ser un caso de explotación sexual adolescente).

En el relato de Julia se hace referencia a su vez, a otras experiencias profundamente dolorosas, tales como el suicidio del padre y varios intentos de autoeliminación —cuyas marcas persisten—, así como trastornos alimentarios. Y, a diferencia de Alicia, en esta narración aparecen más elaboraciones reflexivas en torno a lo religioso, con menos referencias a la deidad como entidad a cuyo accionar se le atribuyen causalidades directas, y más a los sentimientos experimentados con relación a ella (cuestionamientos, crisis de sentido, amor).

Julia: Yo de chica venía a la iglesia con mi mamá, pero cuando entré en la adolescencia ya era más opcional venir a la iglesia o no... iba a las reuniones de jóvenes, pero me fui apartando como quien dice... Y empecé a hacer lo que cualquier gurí normal hace sin venir a la iglesia, como quien dice, me rateaba del liceo, salía con mis amigas, después un poco más adelante, eso era cuando tenía doce-trece, después a los catorce, ya tenía novio, ya había cambiado de novio varias veces.

A los quince empiezo a fumar marihuana, a los dieciséis a tomar más alcohol, que ya tomaba de antes, pero como que empiezo a hacerlo más seguido. A los diecisiete pruebo la cocaína, empiezo a consumir cocaína. Me voy en pareja con mi novio a los diecisiete años. Me separo varias veces, voy, vengo, voy, vengo... ta... tuve varios trabajos, soy estudiante de gastronomía... y ya la

última vez que vuelvo con el chico ninguno de los dos tenía trabajo, los dos nos habíamos quedado sin trabajo, entonces se le ocurre poner una venta de pasta base en casa... y ta, al principio no me gustó la idea, pero después cedí y empezamos a vender pasta base en casa...

Yo después me empecé a prostituir a escondidas de él. Le dije que había conseguido trabajo de moza en un bar de acá de Montevideo... y me venía para acá todos los fines de semana para acá, pero en realidad me prostituía... Y bueno, a todo esto, una vecina mía que yo conocía de la iglesia de cuando yo venía de chica me empieza a escribir, me empieza a hablar, me invita a un campamento Beraca. Yo no estaba muy enganchada. Ahí dejé de prostituirme. Seguía vendiendo pasta base, seguía consumiendo cocaína, vendía cocaína, fumaba cigarro. Era bulímica, me veía gorda todo el tiempo, tenía un trauma con eso. Y bueno, ella me empieza a hablar, yo me empecé a apartar de las drogas, y entre tantas vueltas me decidí a ir a ese campamento. Y bueno, ella me becó y yo voy al campamento. Yo ahí ya creía, pero como que me cuestionaba muchas cosas

M: ¿Qué cosas te cuestionabas por ejemplo?

Julia: Por qué Dios permitía que yo me peleara con mi pareja, que yo me peleara con mi madre, me peleaba mucho con mi madre. Todo un conflicto interno, dudaba de lo que yo misma creía. Y bueno, mi papá fallece cuando yo tenía diecisiete... Bah, fallece no, en realidad se suicidó.

Y con todo esto que yo te contaba, me da depresión y yo también intento suicidarme como podrás ver [muestra cicatrices en brazos]. Más de una vez me intenté cortar, obviamente no funcionó, sigo viva [ríe]. Me intenté colgar también, varias veces. Y bueno, muchos traumas y complejos... Para mí nada tenía sentido, no le veía un sentido a la vida, quería matarme.

Y bueno, viene esta chica y me ofrece un cambio de vida, me habla de que Dios me ama, de que todo podía ser diferente realmente si yo tomaba en serio a Dios. Y bueno... había probado tantas cosas en mi vida ya, que por qué no probar esto... entonces voy al campamento cristiano y empiezo a escuchar prédicas, talleres. Y bueno, sentí literalmente la voz de Dios que me decía que yo no había nacido para ser una víctima, que yo era una vencedora. Y bueno, acá estoy, yo dije «Si Dios existe quiero ver ese cambio con mis ojos».

M: ¿Hace cuánto de eso?

Julia: En enero cumplí un año, fue en enero de 2018 el campamento. Cumplía diecinueve, ahora ya mañana cumpla veinte. Fue solo una semana ese campamento, pero yo sentí que Dios ahí obró en mi vida.

Y bueno, termina el campamento y me hablan de los Hogares Beraca, yo no estaba ni ahí para entrar, o sea, no pensaba mal ni nada, pero decía, «Yo voy a la iglesia, y salgo y hago mi vida no más». Pero bueno, decido entrar, y ya hace un año y un mes que vivo en un Hogar Beraca... Y más allá de lo físico, que he engordado dieciséis kilos, pesaba cuarenta y seis, ahora peso sesenta y uno... Pero más allá de lo físico, hubo un cambio en mi corazón, en mi

mente, que yo estoy segura de que si no es Dios no hay otra. Y bueno, en ese tiempo me aferré a Dios, venía a la iglesia, escuchaba el Evangelio, y es como decía Luisa, poner por obras. No es fácil, pero la Palabra es simple. Dios dice «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». ¿Qué es lo que tenés que hacer? Amar (Entrevista a Julia, IMVN, noviembre de 2018).

Más allá de las situaciones particulares que describen ambos relatos, estos nos hablan de la precariedad a la que se enfrentan mujeres de sectores empobrecidos, de las violencias que se viven fruto de la intersección de distintos ejes de opresión —en estos casos especialmente género y clase social— y cómo la ONG se presenta aquí como la opción socialmente disponible para lidiar con ellas: a Alicia «le predicaron el Evangelio» antes de su involucramiento con Beraca, a Julia cuando era una niña su madre la llevaba a la IMVN.

Teniendo presentes las motivaciones de ambas mujeres para ingresar a la institución, se presenta a continuación el relato de Luciana, una «voluntaria» de Beraca, categoría que podría contraponerse a la de «interna», si no fuera porque el concepto de «voluntad» o «decisión» en cualquiera de estos casos resulta problemático.

Las «voluntarias» constituyen un grupo considerablemente minoritario y su situación previa al ingreso en los Hogares es más heterogénea, aunque no muy distante en términos socioeconómicos de la de la mayoría de las residentes de Beraca.

En estos casos el involucramiento con la ONG se da a través de la iglesia, en donde las autoridades impulsan a la feligresía a vivir en estas comunidades, y se plantea la motivación del traslado a Beraca en términos «espirituales», con la referencia a situaciones de violencia que no son elaboradas explícitamente como «causalidades» del vínculo con Beraca, pero sí con la iglesia.

Tal heterogeneidad puede verse en los casos de las voluntarias del hogar de madres de La Unión. Mientras Laura, estudiante universitaria de administración, fiel de la IMVN afirmaba haberse ido a vivir hace cuatro años a Beraca motivada por la vida comunitaria y el participar de los «milagros» de las transformaciones en las personas allí alojadas; y Romina, joven enfermera proveniente de una pudiente colonia alemana menonita se fue trabajar en el Hogar Beraca de Haití (manteniendo su adscripción religiosa original), la situación de Luciana se aproxima a la de otras mujeres que viven en el lugar.

A Luciana también la conocí mientras hacía la aproximación etnográfica en el hogar Beraca de La Unión, en el marco de entrevistas habilitadas por las autoridades de la institución. Su relato, a diferencia de lo que suele verse en este contexto comienza en la adultez cuando sufre una situación de violencia de género por parte de una pareja de la que queda embarazada.

Según relata, en el marco de un vínculo sexo-afectivo inestable se planteó la posibilidad de interrumpir el embarazo, posibilidad que terminó descartando, motivo por el que comienza a sufrir acoso por parte del hombre y de personas asociadas a este que quieren forzarla a que se realice un aborto.⁵ Luciana da a luz en este contexto de violencia, y cae en una depresión posparto, momento en el cual decide aproximarse a la IMVN, institución a la que asiste su madre.

De acuerdo a lo expresado por Luciana, la situación de violencia de género sufrida y sus consecuencias la llevan, en primer lugar, a buscar sostén en la iglesia, y posteriormente, a vivir en la ONG como parte de una búsqueda espiritual a otro nivel —si bien cabe considerar el aspecto económico, minimizado en el relato, pero que cabe tener presente considerando que se trata de una mujer sola a cargo de tres hijos—.

Luciana: Y bueno yo tengo treinta y tres años, a los veintisiete acepté ir a la iglesia y ahí empecé a conocer los hogares. Me interesé por lo que hacían, me hablaban de ayudar a la gente, me empezó a gustar, y no solo me empezó a gustar, sino que vi que lo necesitaba. Yo no entré a los hogares por adicción, por situación de calle.

Me acerqué a la iglesia por una situación emocional que yo tuve, yo me divorcio y quedo embarazada a los dos años de una relación casual que tuve. Decido abortar y en ese tiempo nada con Dios, nada con la iglesia. Ahí tenía veintisiete años y quedo embarazada de mi tercer hijo, yo estaba separada, así que era fuera del matrimonio...

Y decido abortarlo y en el proceso de la decisión, yo decido no abortar y ahí empiezo a vivir una persecución por parte del padre de mi hijo. Que querían que abortara, me llamaba una médica amiga de él para insistirme que abortara, me ofrecieron plata para que yo aborte. Entonces empecé a vivir algo que nunca había vivido. Tenía miedo. Yo qué sé... Decidí tenerlo y le dije, «Bueno vos hacé tu vida, yo sigo con el embarazo».

M: ¿Fue por algo religioso que decidiste tenerlo?

Luciana: No, no. Yo ahí simplemente decido tenerlo. En ese momento ni creía que existía Dios. Mi madre creía y me llevaba de chica a la iglesia, pero yo iba porque ella me llevaba, no era que yo creía. Ya a partir de los quince años me fui alejando. Para mí era algo que a mamá le hacía bien, pero no entendía mucho. Pero bueno, ta, cuando decido no abortar a mi hijo empiezo a vivir esa persecución por parte del padre y bueno, lo que te decía,

5 Este no es el único relato recuperado donde la violencia vivida durante un embarazo (y su posible o efectiva interrupción) es referida como experiencia que lleva a la búsqueda de ayuda en la comunidad religiosa. El relato de Luisa citado en otros trabajos, es semejante al de Luciana, en tanto refiere a otra situación de violencia de género basada en la no aceptación de la decisión de la mujer sobre su propio cuerpo. En este, el involucramiento con la institución, a diferencia del presentado aquí, se da luego de que Luisa interrumpa el embarazo y sea acosada por su ex pareja, quien se opuso a dicha determinación.

amenazas, tenía miedo de salir de casa. Me acuerdo de que, bueno, «José» nace y a mí me viene una tristeza muy grande.

Me vino como una depresión posparto y salgo de la internación del hospital y yo no entendía qué me pasaba. Y ahí me decían, que con todos los nervios que había pasado del padre, de las amenazas, del dinero para que aborte, pero bueno, así llegué. Así que un día le dije a mi madre, «Bueno voy a ir a la iglesia que vos vas. Ya probé de todo...»

M: ¿En qué sentido habías probado de todo?

Luciana: Claro, ya había ido a un lugar de estos que te tiran las cartas, con un *pae*... yo económicamente siempre trabajé y tenía para vivir bien. Y bueno probé el valerme por mí misma, el valerme en mis amistades y en mi pareja cuando la tuve. Pero no, nada. Ese bajón, esa tristeza estaba ahí. Y ahí empiezo a asistir a la iglesia.

Y ahí me empiezo a enterar de los hogares y a conectarme con gente que vive en los hogares, y me agradaba lo que hacían. Los veía bien, gente que veía dejando la droga. Y empecé a ver esos cambios en esas personas y dije «Está bueno esto». Y a los seis meses o siete de estar yendo, me invitan a un retiro en Beraca y bueno, asistí a esos tres días y desde ahí decidí que quería vivir en los hogares. Yo estaba trabajando en una zapatería y bueno, decidí venir a ayudar a los hogares.

M: ¿Venir a ayudar y continuar con tu trabajo aparte, o dejaste...?

Luciana: No, dejé. Dejé todo, mi trabajo, mi casa... Y me vine.

M: Con tus hijos

Luciana: Si. Mi hija que cumple dieciocho ahora, llegó acá con once años, y un nenito de seis, que eran los dos hijos del matrimonio, y José que era un bebito de meses. Y ta, empecé y realmente te digo, que yo empecé a ayudar, pero terminé siendo ayudada, porque lo que se aprende en los hogares es muy lindo... Lo mínimo que vos sabes, para otros es mucho. [...] Y hay gente que no tiene ganas de vivir. Que no sabe ni leer ni escribir. Personas que no tienen iniciativa. Y a veces le transmitís cosas a la otra persona, que vos decís lo poco es mucho para otros.

Por ejemplo, yo entré acá y me enseñaron a coser, y ahora soy yo la que enseño. Por ejemplo, me tocó estar con una mujer que me decía «Lo único que sé hacer es prostituirme, es para lo que sirvo». Y yo le decía «¿Y no te ves cómo vivir de otra manera, progresar de otra manera?», «Y no». Y bueno, vos tenés la posibilidad de enseñarles, es una fuente para darles a otros otras posibilidades...

Entonces a mí el entrar al hogar me terminó de ayudar a mí. Mismo mi hija, no solo tiene el apoyo para estudiar, sino que aprende cosas que le van a servir para la vida. Ver otras realidades, ver cosas diferentes y ver sobre todo cómo se puede salir adelante y cambiar de vida. Que yo antes si alguien me

presentaba a una persona que se drogaba pensaba «Ta con este no, nada». Entonces ellos tienen otra manera...

Yo soy líder acá. Hay un pastor encargado, pero las que están de líder como yo, están en un cierto sector. Viste en todo hogar vos tenés que tener algún referente, yo enseñé en el taller y estoy para las consultas. Después en la casa somos una familia. Así como cocina la que recién llegó, cocino yo y todos comemos lo mismo. En los talleres tiene que haber un referente, pero en la casa yo puedo estar limpiando un baño o cuidando niños. Da comunidad todo esto (Luciana, hogar Beraca para madres con hijos, barrio La Unión, octubre de 2018).

Sobre pentecostalismo y consumo de drogas: un acercamiento desde las moralidades y «agencias»

El constante crecimiento de ONG como la aquí abordada, su amplia infraestructura y la derivación a ellas desde el ámbito público —considerando las características de su funcionamiento según un marco estrictamente religioso— constituye un aspecto en el cual ahondar y es una de las dimensiones en las que el binomio religión-política intersecciona contemporáneamente, habilitando a abordajes que hagan foco en el nivel institucional, en los vínculos entre ONG y Estado y sus políticas públicas, como a perspectivas que enfatizan en lo subjetivo, atendiendo a la constitución de sujetos en tales espacios.

El presente artículo se limita a esbozar un acercamiento a este último nivel, asumiendo los riesgos que conlleva el abordar una temática de tales dimensiones a partir de una aproximación etnográfica en dos de los más de cincuenta hogares Beraca en territorio nacional.

En lo que respecta a los relatos recuperados en los hogares Beraca abordados, puede decirse que los sujetos han acudido a ellos ante situaciones de crisis, tanto materiales como simbólicas —si es que tal distinción es acaso válida—.

Tales crisis pueden emerger de conflictividades familiares, con vínculos sexo-afectivos y del contexto de consumo de drogas. Siendo de destacar que a nivel discursivo, independientemente de dónde suelen establecer el punto de partida de tales crisis, estas suelen elaborarse como «crisis morales» que impulsan a la búsqueda y transformación de nuevas disposiciones de sentido y comportamentales (Zigon, 2007).

Estos momentos críticos suelen asociarse a carencias de orden material, a la falta de un resguardo físico, un espacio en el cual poder atender necesidades básicas de techo y alimentación, y también a lo afectivo y simbólico; el pentecostalismo, en sus distintas variantes,

es una expresión religiosa culturalmente cercana a los sectores populares latinoamericanos que acuden a su resguardo (Parker, 1993; Semán, 2001, 2021).

En lo que respecta estrictamente a las relaciones entre pentecostalismo y consumo problemático de drogas, se retoma aquí la perspectiva de Daniel Míguez (2000a, 2000b, 2002, 2007, 2012), quien estudió las intersecciones de tales fenómenos entre jóvenes institucionalizados en comunidades pentecostales de Argentina.

Para el autor, ambos —drogas y pentecostalismo— tendrían en común el extenderse rápidamente entre una población golpeada por diferentes procesos de precarización, empobrecimiento y desinstitucionalización, y serían vías subjetivas alternativas para lidiar con «dolencias del presente» (Míguez, 2002, p. 16), caracterizadas por producir alteraciones a nivel sensitivo y emocional.

Ambos fenómenos, aunque paralelos, se encuentran en las antípodas a nivel moral, como señala el autor, y puede encontrarse de este modo la aparente «sustitución», al menos en el plano discursivo, de uno por el otro en gran parte de los interlocutores, una vez que comienzan a percibir como pecaminosas a las drogas. Es de destacar que ambas prácticas pueden convivir, y de hecho lo hacen, de acuerdo a diversos estudios de lo religioso en el ámbito delictivo (Míguez, 2000a, 2002, 2007, 2012).

En el caso de la ONG aquí abordada, se encuentra que suele presentarse como una alternativa en la trayectoria de búsqueda de sentido de ciertos sujetos que, tras haber llegado a momentos de «crisis moral» o *moral breakdown*, en términos de Jarrett Zigon (2007), encuentran en estos espacios medios simbólicos y prácticos para transformar la situación en la que se encuentran y reorientar su conducta.

En este sentido, el solicitar ingreso a los hogares e iniciar un proceso de identificación con la cosmología neopentecostal —proceso que puede continuarse o no— se presenta como un acto de «agencia», en el cual el sujeto reflexiona y actúa para transformar su subjetividad, asumiendo nuevas estructuras de poder que lo reconstituirán como tal (Butler, 2001).

La agencia, en tanto capacidad de reflexión, acción y crítica, constituye una dimensión de la subjetividad siempre ligada a las estructuras de poder que constituyen al sujeto como tal, y por lo tanto variable según el contexto sociocultural (Ortner, 1995).

En esta línea, criticando las presuposiciones liberales de «autonomía» y «libertad» como ideales universales, Saba Mahmood (2005), antropóloga pakistaní que estudió el Movimiento de la Piedad en Egipto, retomando los aportes del feminismo afro y el postestructuralismo,

llama a atender a las distintas dimensiones estructurales de opresión y a los particulares modos de habitar y desarrollar estrategias de supervivencia asociados a estas.

Una consecuencia de esto es que la agencia no implique meramente un acto de resistencia, sino los diferentes modos de «habitar las normas», resultando «importante el interrogar las condiciones prácticas y conceptuales bajo las cuales diferentes formas de deseo emergen, incluyendo el deseo a someterse a una autoridad reconocida» (Mahmood, 2005, p. 15).

El sujeto no precede de las relaciones de poder en forma de consciencia individuada, sino que siempre es resultado de tales relaciones, las cuales constituyen las condiciones necesarias para su posibilidad de existencia. Siendo central para esta formulación la paradoja de la subjetivación: los mismos procesos y condiciones que aseguran la subordinación de un sujeto, son también los medios por los cuales se vuelve una identidad autoconsciente y un agente (Butler, 1993, 1997 y Foucault, 1980, 1983 en Mahmood, 2005, p. 18, traducción propia).

En esta línea, se constata aquí una «búsqueda de estructuras» —término empleado en este contexto etnográfico y que a su vez tiene una fuerte carga teórica— donde quienes recurren a estos espacios y permanecen en ellos llegan a reconstituir subjetividades a través del sometimiento a la jerarquía religiosa-comunitaria. Este proceso puede modificarse y atravesar transformaciones a lo largo del tiempo, como toda conversión religiosa.

En estos casos, la sumisión es considerada muchas veces «preferible» al modo de vida que se llevaba previo al ingreso al Hogar, por más violenta que esta experiencia pueda presentarse en una primera instancia. Y en esta línea, cabría cuestionarse por la heterogeneidad que encierra tal «sumisión», en tanto no todas las personas que permanecen en estos espacios incorporan de la misma manera los discursos religiosos.

Conclusión

El presente artículo se propuso abordar las experiencias de vida de quienes habitan en la ONG neopentecostal Esalco, más específicamente sus Hogares Beraca, a partir de un breve recorrido etnográfico por sus instalaciones y la recuperación de relatos de quienes habitan estos espacios y han llegado a constituir cierta proyección en el tiempo en ellos.

Teniendo presentes las dificultades teórico-metodológicas y éticas que el abordaje de una temática de este tipo conlleva, se destaca aquí que el presente trabajo se limita al abordaje de los relatos de interlocutoras habitantes de dos de los más de cincuenta Hogares en territorio nacional. Se centra en las experiencias previas al ingreso a estos espacios, a fin de dar cuenta de los procesos reflexivos por los que transitan estos sujetos, sus agencias y precariedades.

A grandes rasgos, quienes se vuelven neopentecostales en Beraca lo hacen en el marco de una búsqueda de experiencias atravesadas por distintas formas de violencia, encontrándose que en los relatos de conversión aparecen notoriamente ciertos «hitos» que señalan momentos de «crisis moral», en los cuales los sujetos manifiestan la urgencia de modificar ciertas pautas de comportamiento que se han vuelto insostenibles, especialmente asociadas a situaciones de riesgo vital (ya sea asociado al consumo problemático de drogas, ya sea por violencia de género).

Tales crisis, que en términos morales podrían considerarse relativas a un plano «simbólico», como pertenecientes a la esfera de las creencias, no resultan por ello menos «materiales» que la situación de pobreza y precariedad a la que estos se enfrentan a diario, y de hecho se vinculan mutuamente.

En el marco de tal situación, es que la ONG religiosa aquí abordada se presenta como la opción social y culturalmente más cercana. Ya sea por la afinidad cosmológica entre la opción pentecostal y las creencias populares, ya sea por su carácter «gratuito» y su amplio alcance a nivel de infraestructura.

En tal contexto, independientemente de las polémicas que desde una perspectiva de derechos se pueden presentar en torno a la naturaleza del abordaje sociosanitario que esta ONG propone, acudir a ella se presenta como un momento reflexivo, y la permanencia en la institución, una estrategia de supervivencia, así transiten o no los sujetos por un proceso de conversión.

Referencias

- Abélès, M. y Badaró, M. (2015). *Los encantos del poder. Desafíos de la antropología política*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
- Agamben, G. (2014). *¿Qué es un dispositivo? Incluye El amigo y La Iglesia y el Reino*. Buenos Aires: Hidalgo.
- Algranti, J., y Mosqueira, M. (2018). Sociogénesis de los dispositivos evangélicos de «rehabilitación de usuarios de drogas en Argentina». *Salud Colectiva*, 14(2), 305-322.
- Albano, G., Castelli, L., Martínez, E. y Rossal, M. (2014). Caminando solos. En G. Albano, L. Castelli, E. Martínez, M. Rossal, H. Suárez y J. Ramírez, J. *Fisuras: Dos estudios sobre pasta base de cocaína en el Uruguay. Aproximaciones cuantitativas y etnográficas* (pp. 61-148), Montevideo: FHCE, Universidad de la República.
- Apud, I. (2013). *Ceremonias de Ayahuasca: Entre un centro holístico uruguayo y el curanderismo amazónico peruano* (Tesis para optar por el título de Magister en Metodología de la investigación científica, Universidad Nacional de Lanús, provincia de Buenos Aires).
- Bourdieu, P., Chamboredon J-C., y Passeron, J-C. (2002). *El oficio del sociólogo*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno editores.
- Bourgois, Ph. (2009). Treinta años de retrospectiva etnográfica sobre la violencia en las Américas. En J. López García, S. Bastos y M. Camus (Coords.), *Guatemala: violencias desbordadas* (27-62). Córdoba: Universidad de Córdoba.
- Bourgois, Ph. (2010). *En busca de respeto. Vendiendo crack en Harlem*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

- Butler, J. (2001). *Mecanismos psíquicos del poder. Teorías sobre la sujeción*. Madrid: Ediciones Cátedra, Universitat de València Instituto de la Mujer.
- Foucault, M. (2003). *Historia de la sexualidad II. El uso de los placeres*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
- Frigerio, A. (2002). *El estudio de la religión desde la perspectiva de los movimientos sociales: sus aportes al análisis de la construcción de identidades religiosas*. En GT Religião e Sociedade XXVI Encontro Anual da ANPOCS Caxambu, MG.
- Garbi, S. (2020). *De aislamientos y encierros. Modos «legos» y «expertos» de tratar los consumos problemáticos de drogas*. Buenos Aires: Teseo.
- Guigou, N. (1993). El dinero en el proceso de integración y desarrollo de las Iglesias Pentecostales Brasileñas en el Uruguay. *Sociedad y Religión*, 10(11), 136-145.
- Guigou, N. (2006a). Religión y política en el Uruguay, En: CIVITAS, *Porto Alegre*, v. 6, n. 2, jul/dez. 2006, 43-54.
- Guigou, N. (2006b). Religião e política no Uruguai. En A. Oro (Org.), *Religião e Política no Cone Sul, Argentina, Brasil e Uruguai, Coleção de antropologia. Movimentos religiosos no mundo contemporâneo*. San Pablo: Attar Editorial.
- Guigou, N., y Rovitto, Y. (2004). Más allá del bien y del mal: la Iglesia Universal del Reino de Dios en el Uruguay. En R. Geymonat (Comp.), *Las religiones en el Uruguay: algunas aproximaciones* (pp. 130-145). Montevideo: La Gotera.
- Horjales, R., Saralegui, S., Sotelo, V., y Vicario, C. (2008). Religión y pobreza: la Iglesia Universal del Reino de Dios en Uruguay. En G. Zalpa y H. Offerdal (Comps.), *¿El Reino de Dios es de este mundo? El papel ambiguo de las religiones en la lucha contra la pobreza* (pp. 115-127). Bogotá: Siglo del Hombre Editores-Clasco.
- Jimeno, M. (2016). El enfoque narrativo. En M. Jimeno, C. Pabon, D. Varela, e I. Díaz (Eds.), *Etnografías contemporáneas III: las narrativas en la investigación antropológica* (pp. 7-23). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Mahmood, S. (2005). *Politics of piety: the Islamic revival and the feminist subject*. Nueva Jersey: Princeton University Press.
- Míguez, D. (2000a). Conversiones religiosas, conversiones seculares. Comparando las estrategias de transformación de identidad en programas de minoridad e iglesias pentecostales. *Ciencias Sociales y Religión*, 2(2), 31-62.
- Míguez, D. (2000b). Jóvenes en riesgo y conversión religiosa. Esquemas cognitivos y transformación de la identidad en iglesias pentecostales. *Sociedad y Religión*, (20/21), 2-21.
- Míguez, D. (2002). Inscripta en la piel y en el alma. Cuerpo e identidad en profesionales, pentecostales y jóvenes delincuentes. *Religião e Sociedade*, 22(1), 21-56.
- Míguez, D. (2007). Identidades conflictivas: droga, delito y religión en un programa de rehabilitación de adictos. *Revista Cultura y Religión*, 1(1), 88-107.
- Míguez, D. (2012). Los universos morales en el mundo del delito. Las lógicas de reconversión en contextos de institucionalización. *Revista de Ciencias Sociales, segunda época* (22), 45-63.
- Milsev, M. (2019). Politics in the temple. Religious doctrine and political activism in a neopentecostal church in Montevideo. A brief approach. *International Journal of Latin American Religions*, 3(2), 325-241.
- Milsev, M. (2020). *Salvación y política en el Final de los Tiempos. Una etnografía en la iglesia neopentecostal Misión Vida para las Naciones*. (Tesis de Maestría en Ciencias Humanas, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República).
- Milsev, M. (2021a). Devenires sexo-genéricos en una iglesia neopentecostal de Montevideo. *Descentrada. Revista Interdisciplinaria de Feminismos y Género*, 5(2), e146. Recuperado de <https://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/article/view/dese146>
- Milsev, M. (2021b). Neopentecostalismo y política en una iglesia de Montevideo. Dimensiones institucionales y subjetivas de un fenómeno complejo. *Plural. Antropologías desde América Latina y del Caribe*, 2(6).

- Recuperado de <https://asociacionlatinoamericanadeantropologia.net/revistas/index.php/plural/article/view/154>
- Oro, A. (2001). Neopentecostalismo: dinheiro e magia. *Ilha*, 3(1), 71-83. <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/165036>
- Oro, A. y Semán, P. (2000). Pentecostalism in the Southern Cone Countries. Overview and Perspectives. *International Sociology*, 15(4), 605-627.
- Ortner, Sh. (1995). Resistance and the Problem of Ethnographic Refusal. *Society for Comparative Study of Society and History*, 37(1), 173-193.
- Parker, C. (1993). *Otra lógica en América Latina: religión popular y modernización capitalista*. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica.
- Pi Hugarte, R. (1992). La iglesia pentecostal Dios es Amor en el Uruguay. *Cadernos de Antropología*, (9), 63-96.
- Rovitto, Y. (2006). A Igreja Universal do Reino de Deus no Uruguai: um estudo antropológico sobre narrativas. (Disertación de Maestría em Antropologia Social, Universidade Federal do Rio Grande do Sul).
- Scuro, J. (2012). *No Uruguai também há Santo Daime: Etnografia de um processo de transnacionalização religiosa* (Tesis defendida para optar por el título de Magíster en Antropología Social, Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre).
- Scuro, J. (2015). De religión y salud a espiritualidad y cura. El neochamanismo como vehículo del cambio. *Ciencias Sociales y Religión/ Ciências Sociais e Religião*, 17(22), 167-187.
- Scuro, J. (2016). *Neochamanismo en América Latina. Una cartografía desde el Uruguay* (Tesis para optar por el título de Doctor en Antropología Social, Instituto de Filosofía e Ciencias Humanas, Universidad Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre).
- Scuro, J. (2018). Religión y drogas: otra arista de la laicidad. *Fermentario*, 12(2), 58 -77.
- Semán, P. (2001). La recepción popular de la teología de la prosperidad. *Scripta Ethnologica*, XXIII, 145-162.
- Semán, P. (2021). *Vivir la fe. Entre el catolicismo y el pentecostalismo, la religiosidad de los sectores populares en la Argentina*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
- Sotelo, V. (2011). *Religiones de ricos y de pobres. Un análisis sociológico sobre el fenómeno religioso en contextos de pobreza en el Uruguay*. Saarbrücken: EAP.
- Sotelo, V. (2015). *La búsqueda de la prosperidad económica en las iglesias neopentecostales de Uruguay*. Ponencia presentada en el Congreso ALAS 2015, San José de Costa Rica. Acta académica: XXX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Recuperado de <http://sociologia-alas.org/congresoxxx/ponencias/>.
- Sotelo, V. (2017). *El surgimiento en Uruguay de la iglesia El Ministerio Internacional Encuentro con Jesús en el marco de la teología de la prosperidad: un análisis cualitativo de la experiencia religiosa de los fieles practicantes*. Ponencia presentada en el XXXI Congreso ALAS 2017, Montevideo.
- Sotelo, V. (2019). *Claves para comprender el accionar de los evangélicos en la política uruguaya*. Ponencia presentada en las X Jornadas Internacionales Ciencias Sociales y Religión-CEIL-Conicet-Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
- Sotelo, V. (2021). Sociología del pentecostalismo en Uruguay. *Revista Protesta y Carisma*, 1(2), 1-46. Recuperado de <http://www.revistaprotestaycarisma.cl/index.php/rpc/article/view/29>.
- Spadafora, A. (2004). *Religión, política y estética: el pentecostalismo en la Argentina de los 90* (Tesis de doctorado, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires).
- Visacovsky, S. (2016). Lo narrativo y la investigación antropológica. Sobre la producción de historias. En M. Jimeno, C. Pabon, D. Varela e I. Díaz (Eds.), *Etnografías contemporáneas III: las narrativas en la investigación antropológica* (pp. 23-56). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Zigon, J. (2007). Moral Breakdown and the Ethical Demand: A Theoretical Framework for an Anthropology of Moralities. *Anthropology Theory*, 7(2), 131-150.

«TRINCHERA DE CUIDADOS» FORMAS DE VIVIR, CONVIVIR Y CUIDAR EN COLECTIVO EN SITUACIÓN DE CALLE

«TRINCHEIRA DE CUIDADOS» FORMAS DE VIVER, CONVIVER E CUIDAR DE
UM GRUPO EM SITUAÇÃO DE RUA

«TRINCHERA DE CUIDADOS» COLLECTIVE CARE & WAYS OF LIVING IN
HOMELESSNESS

Alejandro Guevara

*Proyecto «Desigualdades y conflictos en relación a la situación de calle», Universidad de la República.
alejandro.guevara.alvarez@gmail.com*

Tacuabé González

*Facultad de Medicina y Licenciatura en Antropología; proyecto «Desigualdades y conflictos en relación a la situación
de calle», Universidad de la República. tacuabegc@gmail.com*

Recibido: 10/5/2022 | Aceptado: 13/9/2022

«El mundo de la necesidad lo hace extranjero del mundo humano a la vez que le concede humanidad. Lo guía en la búsqueda: comer, cubrirse, dormir, volver a comer... Sin embargo, aun en las peores condiciones de existencia, asombra encontrar personas individuales, personas agrupadas en diferentes colectivos, que arman redes solidarias que enuncian la errática búsqueda de un pensar y de un vivir de otra manera» (Del Cueto, 2014).

Resumen: La imbricación de las diferentes opresiones experimentadas por personas en situación de calle se entreteje en un entramado de violencias institucionalizadas que invisibiliza, excluye y perpetúa dicha situación. Diferentes estrategias de supervivencia suponen el paso por distintos tipos de dispositivos y servicios sociales caracterizados por su desborde y violencia. En este contexto sobresalen experiencias de personas en situación de calle que llevan adelante una lucha por organizarse para salir de las lógicas de supervivencia hacia una vida digna de ser vivida. En Uruguay el Colectivo Ni Todo Está Perdido representa una de estas experiencias de organización y de manera particular dentro de este colectivo la Trinchera de Cuidados ha acumulado un proceso que busca una autogestión de los cuidados en colectivo. El presente trabajo presenta un avance de algunas de las reflexiones que parten de un proceso de observación participante a lo largo de un año de trabajo de la trinchera que exploran las tensiones entre un acompañamiento par y uno técnico dentro de una política pública que devalúa al primero y favorece una ausencia de diálogo de saberes en torno a los cuidados.

Palabras clave: situación de calle; cuidados colectivos; acompañamiento par

Resumo: A imbricação das diferentes opressões vivenciadas pelas pessoas em situação de rua atrelado a uma rede de violência institucionalizada que invisibiliza, exclui e perpetua tal situação. Diferentes estratégias de sobrevivência envolvem a passagem por diferentes tipos de dispositivos e serviços sociais caracterizados por seu transbordamento e violência. Nesse contexto, destacam-se as experiências de pessoas em situação de rua, que lutam para se organizarem para sair da lógica da sobrevivência em direção a uma vida digna de ser vivida. No Uruguai, o Coletivo Ni Todo Está Perdido (Nem Tudo Está Perdido) representa uma dessas experiências organizacionais e, particularmente dentro desse grupo, a Trincheira de Cuidados acumulou um processo que busca a autogestão coletiva do cuidado. O presente trabalho apresenta um avance de algumas das reflexões que partem de um processo de observação participante ao longo de um ano de trabalho da trincheira que explora as tensões entre pares e acompanhamento técnico dentro de uma política pública que desvaloriza o primeiro e favorece a ausência de diálogo de conhecimento em torno do cuidado.

Palavras-chave: situação de rua; cuidado coletivo; par de acompanhamento

Abstract: Homelessness is invisibilized, excluded and perpetuated by the intertwined oppressions experienced by homelessness people along a web of institutional violence. Diverse survival strategies imply a navigation through different kinds of overloaded institutional and social services characterized by their violence. Social struggle & organization experiences seeking to exit survival logics into a life worth to be lived becomes outstanding in this context. In Uruguay, Ni Todo Está Perdido collective represents one of these social organization experiences. Inside this organization the Care Trench (Trinchera de Cuidados) has accumulated a process of self-organization of collective care. The present work advances some of the reflections coming from a participatory observation process for more than a year of work in this space. It explores the tensions between peer & professional support inside a public policy that devaluates the former leading into an absence of dialogue between different forms of knowledge around care.

Keywords: homelessness; collective care; peer support

Introducción

Desde el 2018 el colectivo Ni Todo Está Perdido (NITEP)¹ lleva adelante un doble cometido de visibilización y modificación de la mirada sobre las personas en situación de calle en Montevideo, Uruguay. A su vez, la «Trinchera de cuidados»² es la comisión de trabajo dentro del colectivo abocada a la construcción de prácticas de acompañamiento a través del procesamiento grupal de situaciones cotidianas tanto internas como externas al colectivo. Este «atrincheramiento» en torno a los cuidados busca generar condiciones para construir una alternativa a las lógicas de tutelaje y rehabilitación que imperan en la política social de la región (Seidmann, Di Iorio, Azzollini y Reigueral, 2015) y ensayar soportes y protección ante un muro de constante violencia contra los cuerpos dentro de los aparatos que tienden a forzar una inclusión social en forma de una civilidad caracterizada por una «afiliación por consumo» (Rose, 2007). El presente trabajo es un primer acercamiento a esa grieta que abre el trabajo del colectivo para mirar hacia el interior de algunas primeras experiencias de construcción de cuidados colectivos en situación de calle.

Aunque las «trincheras» nos recuerdan lo difícil que es salir de la problemática metáfora de la guerra, del otro como enemigo, estar sin techo en la intemperie dificulta nombrar distinto a las formas en que se dan algunas experiencias de cuidados en contextos estigmatizantes. En Montevideo se estima que hay 3,384 personas en situación de calle, donde un tercio padecen alguna patología, problemas de salud mental o consumo problemático de sustancias (MIDES-Dintad, 2021). Esta proporción de problemas de salud en sentido amplio nos permite observar la superficie preliminar de una complejidad —la situación de calle— que es constantemente reducida al consumo problemático y, a la vez, pasar a preguntarnos de qué manera se subsanan las necesidades cotidianas de cuidado, de bienestar subjetivo y de salud. En la misma línea de complejizar, es pertinente traer a cuenta las características de las condiciones de vida en la calle como coincidentes con las determinantes sociales de la salud mental: desempleo, violencia, desnutrición, falta de techo, incertidumbres respecto a la cotidianidad, el sustento y la estigmatización (Di Iorio, 2019).

Situaciones de cuidados en situación de calle

En Latinoamérica y en Uruguay existe un progresivo aumento de las personas que viven sin hogar, en la vereda, sin techo, o como comúnmente se denomina a esta población «en

- 1 Colectivo conformado desde 2018 por personas en situación de calle y sistema refugio en Montevideo, Uruguay que pugna por la restitución de derechos, acceso a la vivienda y el trabajo (<https://plataformanitep.wixsite.com/nitep>).
- 2 La denominación «trinchera» fue una definición tomada por el colectivo Ni Todo Está Perdido en cuanto a cómo nombrar a cada una de sus comisiones de trabajo en el 2019.

situación de calle». Denominación que va acompañada de presuposiciones de ilegalidad asociada a la ocupación indebida de espacios públicos (Domínguez, 2019) o de consumo problemático de sustancias y otros prejuicios que generalizan y estigmatizan a partir de las significaciones sociales que se hacen de forma cotidiana y que parten comúnmente de las políticas públicas que van emergiendo para «lidiar» con esta población (Bufarini, 2020). La situación de calle puede ser comprendida desde tres ejes simultáneos que la definen como

...una paradójica forma de inclusión social sostenida desde la marginalización, la ruptura o fragilidad de vínculos sociales, laborales y familiares, por las dificultades para cubrir necesidades materiales, simbólicas y afectivas, así como también por la vulneración de derechos sociales, económicos y culturales (Di Iorio, 2019).

Correlativamente los modelos de atención de tipo progresivo o en «escalera», como los sistemas de refugios nocturnos en la región, se debaten entre un modelo asilar que simplemente reubica a una ciudadanía infravalorada y con menos derechos³ y uno que se centra en atender las problemáticas individuales desde ideas preconcebidas sobre el sujeto en situación de calle (Busch-Geertsema y Sahlin en Pleace, 2016). Aun así, en otras latitudes donde se ha implementado la solución de vivienda independientemente de los antecedentes de la persona (como Housing First) se resalta la importancia de la continuidad de soportes a problemáticas individuales para hacer «la casa durable» (Newman y Goldman, 2008). En ambos casos se pasan por alto las formas adquiridas de una agencia activa del individuo en la interacción de problemáticas individuales y factores estructurales durante el tránsito entre sistemas y servicios, en las «salidas de la calle» o en las circunstancias previas a la calle (Mcnaughton, 2009).

Así mismo en estos modelos se ha señalado una y otra vez la fuerte dependencia que se genera en los dispositivos de refugio donde se suma un entramado de violencias institucionalizadas que invisibiliza, excluye y perpetúa la problemática (Seidmann, Di Iorio, Azzollini y Reigueral, 2015), ya que esto da lugar a un ocultamiento de cómo se han invisibilizado las condiciones de vida y el devenir sociohistórico de las múltiples desigualdades encarnadas. A la vez, esta «población» se hipervisibiliza por parte de las políticas sociales que les atienden, cuantifican y dan seguimiento, dando lugar a una opacidad social que impide atestiguar y comprender las formas de protegerse, apoyarse, manejar situaciones desbordantes, reparaciones y otras formas de agencia (Di Iorio, 2021). Resulta interesante observar la agencia activa ahora en su manifestación colectiva de asociación y cooperación en un colectivo que transita por estos modelos y que lucha por generar otras experiencias.

3 Asociado a la «vieja ortodoxia» sobre la situación de calle: «Las personas en situación de calle importan menos, tienen menos y son menos que el ciudadano común, razón por la cual terminaron en la calle» Traducción propia. Véase Michele Lancione (2016).

Si entendemos esta agencia como constituyente de una autonomía relacional en interdependencia (Rebellato, 1997) nos permite acercarnos a situaciones donde los cuidados no son meramente la autodefensa de la violencia, resistir la tentación de consumir drogas o las estrategias para subsanar el hambre si no las experiencias de relacionamientos en la cotidianidad que nos permiten «sostener la vida compartida» (Vitón de Antonio y Castro de la Iglesia, 2020).

Por otro lado, los cuidados entendidos como «la gestión de todo lo necesario para la subsistencia» han sido señalados como una línea estratégica de análisis para comprender las insuficiencias y limitaciones que se dan en el tránsito de las personas en situación de calle por los diferentes lugares y servicios de atención y asistencia (Di Iorio, Seidmann, Gueglio y Rigueiral, 2016). Esta definición nos ayuda a trascender la cristalización del cuidado como un problema sanitario o médico y, en el caso de la situación de calle, a comprenderla como resultado de complejas interacciones entre las estrategias de subsistencia de la persona, los entramados vinculares y las limitaciones estructurales asociadas (Pleace, 2016). Además, los cuidados representan un eje de análisis de la política pública en cuanto a la distribución que se da entre el estado, el mercado, la familia y la comunidad de la provisión de los cuidados, donde progresivamente las lógicas que imperan son las del mercado (Ceminari y Stolkiner, 2018). Esta distribución ha sido problematizada bajo el título de *crisis de los cuidados* donde el neoliberalismo ha despolitizado los cuidados con ayuda de estados que facilitan el avance de la monetización de toda necesidad en ese tránsito cotidiano de la subsistencia (Tronto, 2017).

En cuanto a los movimientos sociales, los cuidados han sido de las principales consignas en las luchas desde los feminismos, constituyendo un eje estratégico de sustitución de la centralidad de la valorización económica por la reproducción colectiva de lo social (Federici, 2015). Así mismo, pueden ser considerados como uno de los *comunes relacionales no naturales* al generar responsabilidad compartida y un «actuar en conjunto que, en su devenir, genera sentido, simbolismo, valores, pensamiento, afectos, deliberación, reglas, institucionalidad compartida y, [...] alguna forma de comunidad que lo[s] resguarda del lucro individual y se sitúa por fuera del régimen privado de propiedad» (Vega Solís, 2019). Así considerados los cuidados parecieran coconstituirse por dependencia en una colectividad entramada y a la vez cumplir una función entramadora de organización y cohesión cotidiana que encontramos en lo *comunitario-popular* (Linsalata, 2015) y que, operando coordinadamente en el tiempo a través de relaciones de *compartiencia*, generan una «riqueza social» de múltiples despliegues e intercambios de valores de uso en pugna con el capital (Gutiérrez y Salazar, 2015).

El participar del espacio donde un colectivo de personas en situación de calle reflexiona el diario acompañamiento de la vida en la calle se presenta como un escenario singular en torno

a esa posibilidad de pensar los cuidados como *producción cotidiana de transformación social* (Gutiérrez y Salazar, 2015), y desde donde nos preguntamos: ¿Cómo se conciben y se procesan colectivamente las ideas y acciones que hacen a los cuidados en un colectivo de personas en situación de calle? ¿Qué diferencias y singularidades acontecen en los cuidados entre las personas bajo el estigma de la situación de calle? ¿En qué medida lo institucionalizado impide o facilita apropiarse del cuidado en la situación de calle? ¿Qué aporta la autogestión entonces de los cuidados en situación de calle a las formas de producir mundos en común dignos de ser vividos?

Procesos participativos, narrativos y ética de los cuidados

El presente trabajo es una aproximación reflexiva-interpretativa a un proceso de observación participativa. Dado que la mirada de los autores proviene de una hibridación de campos como la medicina, la filosofía y la antropología y, a su vez, la participación es una temática central de los procesos colectivos de lucha (sujeto colectivo) es que no solo abordamos los contenidos desde una interdisciplinariedad, sino desde un diálogo de saberes de vocación transcultural, es decir de intercambio y afectación entre las perspectivas disciplinares y los saberes encarnados donde no existen observadores neutros, sino parciales e implicados (Castro-Gómez, 2007).

Partimos de una sistematización de un primer año de un proceso grupal ininterrumpido de reflexión y acción de dos años en la Trinchera de Cuidados, espacio grupal dentro del colectivo NITEP destinado a elaborar en torno a las experiencias de acompañamiento no dependiente en profesionales. En este proceso se traen a la reflexión colectiva las situaciones semanales que miembros del colectivo que está en sistema refugio experimentan en la práctica de acompañar diversas situaciones: la salud, el consumo, la salud mental, la convivencia, la violencia institucional, etc., todas colocadas por las personas participantes del espacio de la trinchera dentro del colectivo. Metodológicamente se traen por parte de nuestro equipo de acompañamiento universitario aproximaciones dialógico-reflexivas (Rebellato, 1997), concientización, problematización y búsqueda de acciones conjuntas (Investigación Acción Participativa) mediante un sostenido proceso grupal (Del Cueto, 2014). Dada la naturaleza de este grupo embebido en la violencia estructural y social que implica la estigmatización de la situación de calle y a su vez dentro de un colectivo que pugna por la autogestión y el acompañamiento par es que nos apoyamos en marcos teóricos y de referencia metodológica que logran poner en relación la salud mental comunitaria, la participación y la horizontalidad.

Si bien nuestro acompañamiento y el acompañamiento que lleva adelante el colectivo no surge de un diseño típico de Investigación Acción Participativa, la horizontalidad de los

procesos está presente en toda su metodología con un fuerte componente dialógico-reflexivo y una continua puesta en práctica de acciones para mejorar la realidad de los participantes (Gutiérrez, 2020) y se enmarca desde una ética de los cuidados donde nuestra práctica es una «práctica situada, generadora de vínculo de confianza, comprensividad y compromiso con los otros, con el saber y la construcción de conocimiento, configurando comunidades para avanzar en la democratización de saberes, conocimientos y praxis emancipatorias» (Vitón de Antonio y Castro de la Iglesia, 2020).

Dentro de la Trinchera de Cuidados se fue incorporando no solo una iteración de reflexión y práctica sobre diferentes acciones que se llevaban en torno al acompañamiento de personas con diferentes situaciones en el contexto de refugio o pernoctar en la calle, sino que además conforme las temáticas de consumo y salud mental tomaron relieve y urgencia un trabajo de contención y elaboración fue haciéndose más presente, aproximándose a perspectivas de una salud mental comunitaria fincada en lo colectivo y como transversal del proceso social (Stolkiner y Ardila Gómez, 2012).

A continuación, se presentan algunos desarrollos narrativos a partir de extractos del diario de campo que se llevó a cabo desde el equipo universitario del 2020 al 2021 dentro de la Trinchera. Un primer eje de discursos, prácticas y reflexiones emerge en torno a los procesos de apropiación de los cuidados, a la decisión, organización colectiva y la lucha política del colectivo sobre la situación de calle. Identificamos tres primeras confluencias temáticas: la reducción de daños, la medicación y la alimentación.

Cómo hacer las cosas mal, bien (reducción de daños)

La experiencia durante el 2020 —en plena emergencia sanitaria— de gestión por parte del colectivo NITEP de un inmueble (nombrado como «La Casa»)⁴ destinado a la futura atención de personas en situación de calle, suscitó discusiones sobre la mejor manera de reducir daños frente a situaciones de violencia, abuso de drogas, contagios, etc. Así, después de que la asamblea del colectivo lo aprobara, se junta por primera vez la «Trinchera de Salud», con una frecuencia semanal de reunión.

En las charlas, los integrantes comenzamos a comentar que tenían conocimientos de «cómo hacer las cosas mal, bien», refiriéndonos a la posibilidad de aplicar ciertas medidas de reducción de riesgos y daños en relación al uso de drogas. Así, realizamos una primera lista de temas que se podrían tratar, que incluía primeros auxilios (de interés particularmente

4 Nombre que el colectivo otorga al espacio facilitado por la Intendencia de Montevideo para sus actividades del 2020 al 2021. Posteriormente en 2021 abre bajo el mismo nombre, pero como dispositivo de atención de bajo umbral a personas en situación de calle gestionado por dicha institución.

para algunos integrantes debido a accidentes y conflictos que sucedían en «La Casa», pero también en vínculo con una idea que circulaba de realizar asistencia), salud sexual y reproductiva, consumo de sustancias, etc. También planteamos la posibilidad de que docentes o estudiantes avanzados de Medicina dieran talleres, así como pedir donaciones para tener un botiquín. En ese momento varios integrantes se alejaban del grupo y llegaban otros nuevos, por lo que se multiplicaron rápidamente las temáticas tratadas. Si bien el tema de la pandemia, los primeros auxilios y el botiquín fueron centrales en este tiempo, de a poco las charlas sobre consumo de drogas (principalmente pasta base) fueron emergiendo y ganando la centralidad del espacio bajo la idea de «problema a controlar». A partir de estas discusiones, se planeó en la asamblea la posibilidad de utilizar un día del fin de semana para generar un espacio de conversación con todo el colectivo acerca del uso de drogas, para poder analizar las experiencias en los dispositivos de tratamiento de adicciones, pensar en cómo generar alternativas y brindar herramientas a un nuevo grupo de trabajo del colectivo denominado Trinchera de Cuidados.

En este nuevo grupo de trabajo era sobresaliente que frente a las escenas violencia física que se vivían, las respuestas que se pensaban eran inicialmente solo en el orden de lo asistencial, por ejemplo, adquirir destrezas para poder brindar primeros auxilios. En las discusiones que se sostuvieron más a lo largo del tiempo, principalmente las de alimentación, uso de drogas y salud mental, se empezaron a problematizar algunos vínculos con distintas instituciones, por ejemplo, el hecho de que en los refugios la medicación la controle «el equipo técnico», la gestión (y calidad) de la alimentación de los refugios y comedores, la atención psiquiátrica y sus hospitales así como los dispositivos para tratamiento de adicciones. En particular se comenzó a discutir sobre la idea de «referente par» que se escuchaba en otras instancias por donde habían pasado algunos integrantes del colectivo, así como la posibilidad de generar en la trinchera una experiencia al respecto.

Otras oposiciones tales como conocimiento académico o experiencia de vida, tener casa o no tenerla, «ser refugiado» o estar en calle, consumir pasta base o no hacerlo, iban atravesando los espacios del colectivo, el cual posee la consigna «abrazar y no expulsar», que se encontraba pintada en un cartel y colgada en una pared de La Casa.

Servando

Al poco tiempo de iniciar las reuniones de la trinchera, Servando⁵ nos contó que estaba intentando superar un consumo problemático de pasta base. En distintas ocasiones contó cómo cuando decidió dejar de consumir se fue caminando del barrio donde vivía hasta el centro, demorando tres días en recorrer una distancia de aproximadamente 7 u 8 kilómetros. Al tiempo, al

5 Se han modificado todos los datos personales o de posible identificación de los sujetos.

ir participando en las discusiones de la Trinchera y del colectivo sobre cómo salir del consumo, pidió que le consiguiéramos una pelota y comenzó a llevar adelante un espacio deportivo, así mismo se entregaron oficios de solicitud institucional para calzado y otros materiales. Su idea era que, a través del ejercicio físico, se pudiera combatir la abstinencia cuando se detenía el consumo abusivo de pasta base.

A su vez, en la Trinchera fue desarrollando un rol cada vez más activo. En el último tiempo estaba preocupado por el estado de salud de las personas de la calle que llegaban a La Casa. Comenzamos a pensar más seriamente en la posibilidad de seguimiento de integrantes del colectivo en sus vínculos con el sistema de salud. Planteamos esto en la asamblea, la que lo aprobó. En medio de esta situación se dio el cierre de La Casa. La pelota quedó dentro de La Casa y ya S. no tuvo acceso a ella. En las reuniones de la Trinchera en otros espacios fue mostrándose cada vez más ansioso. Si desde la ventana se veía a alguien consumiendo pasta base, le producía un malestar grande, que comunicaba. Existía en esa época una sensación de mucha frustración por el cierre del que hasta ese momento era el espacio de funcionamiento y autogestión del colectivo.

Después de un período de no acudir al grupo se comunicó por teléfono con nosotros, y luego de contar una historia que involucraba acusaciones erróneas por un delito, solicitó que se le enviara dinero para volver en ómnibus desde la seccional donde supuestamente se encontraba, hasta el centro, donde se ubica el refugio al que iba. Se decidió no girarle el dinero. A la semana siguiente volvió a la Trinchera. Comentó que había llamado pidiendo plata. Nos contó que el teléfono se le había caído en la calle y lo había pisado un camión, historia que nadie creyó. Ese día se lo veía más ansioso que de costumbre, con una expresión de rigidez en el rostro. Fue la última vez que estuvo en la Trinchera. Un compañero cercano nos contó que había vuelto a su barrio y a consumir.

El hecho de que una gran parte de los usuarios de pasta base de cocaína han pasado en el último año por más de un dispositivo de atención al uso abusivo de drogas, evidencia la ineficacia en la respuesta de los mismos a la demanda (Rossal *et al.*, 2018). En este primer relato encontramos la historia de una recaída que frágilmente se sucede por una coyuntura institucional y después por una decisión de cuidado compleja por parte del colectivo. Permite observar los principios paradójicos del acompañamiento que por parte del colectivo se suscitan. Este escuchó, permitió, validó, impulsó y pugno institucionalmente por una estrategia de disminución de síntomas de abstinencia y de acompañamiento par. Sin embargo, ante un cambio en el acceso a un recurso como una pelota y las consecuentes conductas percibidas los límites de este acompañamiento se hacen visibles: se manifiesta la autonomía en términos de interdependencia (Rebellato, 1997), en vínculos que van articulando redes de sostén y a su vez significados comunes (Vega Solís, 2019), como por ejemplo, los que en el

relato pudieran estar depositados en esa búsqueda de «el barrio» como territorio semiótico en disputa (Colanzi y Del Manzo, 2017) y en el cual un colectivo en situación de calle pudiera contribuir a avanzar otros sentidos.

Medicina, mediación y medicación

Una segunda temática que emerge continuamente es la suscitada por el rol de acompañamiento que no es considerada par, es decir, la asociada a equipos técnicos y que era claramente depositada y proyectada en nuestra participación.

Jonathan

Durante el mes de julio alguno de nosotros no pudo asistir a la reunión de la Trinchera de cuidados. Johnatan nos había comentado la semana anterior en una conversación de pasillo, que había realizado un autoajuste en la medicación para el Parkinson, aumentando la dosis para controlar la sintomatología y por lo tanto quedándose sin medicación una semana antes de poder retirarla nuevamente. Acordamos que fuera a un hospital cercano para pedir hora, y comentó que precisaba tanto para el neurólogo como para el psiquiatra. Hablamos acerca de la necesidad que eso fuera supervisado por un especialista, de contarle su experiencia subjetiva con la dosificación y el control de la sintomatología al neurólogo, para que en última instancia sea el profesional quién aumente la dosis (y por lo tanto eso se refleje en la cantidad de medicación a retirar) y se evite la automedicación.

Ofrecimos que trajera su historia clínica para leerla juntos y poder interpretar juntos el contenido, para ayudarlo en la comprensión de la misma y la comunicación con los profesionales del sistema de salud. En la semana consiguió horas de consulta con los profesionales, pero no pudo conseguir quien lo orientara hacia la obtención de la medicación que precisaba. Le facilitamos nuestro número de teléfono y fue llamando primero cuando finalizó su visita al hospital, y luego más frecuentemente mientras pasaban los días y se preocupaba por la falta de medicación, llegando a llamar más de una vez por día, poniéndonos en contacto también en una ocasión con la enfermera de su refugio para hablar sobre el tema.

A partir de sus llamadas nos contactamos con un conocido neurólogo y luego de contarle el caso, solicitamos ayuda para conseguir la medicación, dado que la suspensión de la misma de forma repentina trae aparejadas consecuencias negativas (rigidez muscular, fiebre, movimientos involuntarios del cuerpo, confusión). El miércoles de mañana pasamos por la dirección de uno de los principales hospitales públicos, donde nos dieron una receta para que retirara la medicación en la farmacia. Luego de un intercambio en la farmacia del hospital, logramos retirarla nosotros sin que el compañero asistiera, lo que por cuestiones de horario era imposible.

En el colectivo conviven integrantes que tuvieron uso problemático de drogas, otros que lo tienen, y otros que nunca lo tuvieron; personas con experiencias de institucionalización tales como el hospital psiquiátrico o la cárcel, con la correspondiente afectación en la vuelta a la vida en comunidad (Ciapessoni, 2019); experiencias en el sistema de refugios o en dispositivos de tratamiento de adicciones son factores asociados a mayores dificultades para la salida de la situación de calle (Evans, 2019). A su vez, esto se va expresando en las formas en que aparecen representados para los integrantes del colectivo el Estado, la Universidad, los actores institucionales y los propios actores del colectivo. Sobre este aspecto de las representaciones y los distintos «papeles» que uno puede interpretar, es interesante ver cómo en el trabajo de Santiago Bachiller (2015) con personas en situación de calle, se plantean ciertos roles como habilitantes en la aproximación y el relacionamiento, frente a una población donde los lazos sociales son el recurso principal.

En el caso de uno de los que acompañamos desde la universidad, el hecho de ser estudiante de medicina marcó fuertemente el perfil de varios vínculos, donde se lo catalogó como «doctor», se le dio la razón en discusiones sobre temas lejanos a sus estudios, y luego de pasado cierto tiempo, la demanda de funciones asistenciales se fue haciendo cada vez más acentuada. Este segundo relato nos acerca a un nodo de problemáticas complejas: la medicalización de la sociedad con sus consecuentes prácticas de sobremedicación y control del comportamiento de lo anormal; las prácticas de discriminación de los servicios de salud; el asistencialismo etc.

Sin embargo, independientemente de lo que se «actúe» o se «represente» en ese lugar social del rol médico la participación en la trinchera acerca vínculos concretos y saberes específicos que pudieran ser apropiados por el colectivo. A su vez, quienes participamos desde estos lugares en la trinchera nos permite poner en juego las perspectivas teórico-prácticas y éticas que abogan por horizontalidad e implicación de nuestras condiciones y saberes (Rebellato, 1997). Resulta interesante que en la bibliografía sobre experiencias de actividades con actores universitarios en el contexto de investigación e intervención con personas en situación de calle se ven como ejes los procesos de reelaboración identitaria, la ampliación de las redes sociales, desarrollo de habilidades sociales y «reactivación de la afectividad» (Di Iorio *et al.*, 2016).

Patricio

En julio, finalizando la reunión de la Trinchera de Cuidados en La Casa, hablamos con un muchacho que llegó a La Casa en muy mal estado. Estaba muy decaído, poco orientado, con debilidad muscular y sintiendo frío. Los compañeros del colectivo le trajeron una frazada. Hablando con él y con bastante dificultad debido a su estado, logramos entablar una conversación y fui pudiendo seguir el hilo de su relato para entender lo que le había pasado. Dijo que esa mañana había ido al Hospital Vilardebó a buscar medicación

para tratamiento por consumo de pasta base, y luego de eso fue al barrio de su madre a visitarla. Contó que, al llegar al barrio, vio un grupo de gente reunida en la calle en torno a un familiar al que le habían disparado debido a un conflicto que no logramos nunca entender. Entonces explicó que debido a la crisis psicológica que le produjo ese hecho, había empezado a tomar desmesuradamente su medicación de uso habitual: contamos 11 comprimidos de quetiapina y 8 de clonazepam. Miramos uno de los papeles que el muchacho tenía en su billetera, era una historia clínica de consulta en el Hospital Vilardebó, de la cual nos llamó la atención dos cosas: aparecía la frase «retardo mental» a modo de diagnóstico, y como motivo de consulta aparecía «consumo de pasta base».

Decidimos que había que llamar a la emergencia para que vinieran a asistirlo. Le dimos la billetera a un compañero de su refugio. Llegó un patrullero, le tomó los datos (para lo cual oficiamos de mediadores) y nos condujo hasta el Hospital, donde ingresamos con él y lo acompañamos hasta la sala donde recibiría asistencia, dejándolo con una doctora a la cual le explicamos lo que sabíamos de la historia. Ella comenzó a hacerle preguntas y nos dijo que no nos preocupamos, dándonos a entender que ellas se harían cargo, por lo que luego de anotarle nuestro número, volvimos a La Casa. Un par de horas después, notamos que hacía una hora y media nos habían llamado del Hospital Maciel. Cuando llamamos, nos dijeron que el muchacho se había puesto agresivo y lo habían dejado irse, que él ya había consultado de mañana en el hospital. Les preguntamos si lo habían dejado irse en ese estado, y respondieron que sí. No supimos si creerles que se había puesto agresivo o simplemente quisieron liberarse de un paciente. Al rato nos encontramos con el compañero a cargo de la billetera el cual nos dijo que lo había visto y le había devuelto la billetera. Nos comentó que el muchacho era a veces agresivo.

De la volqueta a la volqueta

En las primeras semanas de septiembre del 2021 —durante la cuarentena— un miércoles de mañana, se reunió nuevamente la Trinchera de Cuidados para discutir las actividades que íbamos a hacer en adelante. Retomamos las actividades que habíamos planificado desde la Trinchera durante el trabajo previo en «La Casa» antes de que escalaran las medidas sanitarias, así como la propuesta de realizar talleres en el horario de funcionamiento de la Trinchera, sobre los temas de salud y cuidados: alimentación, consumo, primeros auxilios, etc. Debido a las demoras en los plazos establecidos de regreso a «La Casa» y por la sensación de estar «estancados», se comenzó a pensar en la trinchera como hacer una autoformación. Al comenzar los primeros intercambios siguiendo esa idea, el tema de la alimentación de las personas en situación de calle y refugio fue tomando centralidad. A medida que se iba conversando, una compañera de la Trinchera elaboró un dibujo con forma de pirámide dividida en cinco niveles. En esta se representaba su

reflexión sobre cómo atravesaban las personas los procesos de autonomía en relación con la situación de calle, los refugios y la alimentación, bajo la idea de que el pasaje por los distintos niveles (desde la base de la pirámide hasta la cima) representa el aumento progresivo de la autonomía, en una forma cíclica, donde la base y la punta de la pirámide se tocan:

El primer nivel representa la situación de calle y las personas que, encontrándose en peor situación, consiguen alimentos de las volquetas⁶ donde se vierten los residuos de los hogares. Allí la persona se encuentra en la situación de máxima vulnerabilidad alimentaria y no cuenta con demasiadas herramientas para mejorar su situación.

El segundo nivel representa a las personas que recién se integran al sistema estatal de refugios y de comedores. La persona ha perdido una cuota de autonomía en función de un menor nivel de vulnerabilidad.

El tercer nivel representa el proceso de «rehabilitación» que se atraviesa cuando la persona se pone en contacto con el equipo técnico de los refugios (educadores, psicólogos), que «miran» hacia los procesos de las personas en el segundo y primer nivel.

El cuarto nivel representaría un equilibrio entre el segundo y el tercero. Una opción por menor vulnerabilidad y una opción por «menor autonomía» en el sentido de «inserción en el sistema», junto a un proceso de trabajo sobre las causas de la situación que se está atravesando, con apoyo profesional, que conduce finalmente a salir del sistema de refugio. «Yo me quedaría ahí» expresa la compañera.

El quinto y último nivel, que se toca con el primero, sería el nivel donde la persona «recupera» totalmente su autonomía y le corresponde tomar decisiones hacia dónde conducir su vida, donde la vuelta a la situación de calle parece una opción posible.

Este último relato nos muestra un acumulado en el trabajo de la trinchera y una apropiación del espacio a través de una propuesta concreta de herramienta o modelo de comprensión de la situación de calle que surge de un proceso de acción en torno a varias problemáticas experimentadas en la experiencia del primer año. Además, consideramos que hace una fuerte crítica a la «afiliación por consumo» (Rose, 2007) donde el nivel más alto de autonomía lo asocian a un factor de riesgo particular quizás por su fuerte impronta individualista; recordamos una de las consignas del colectivo NITEP, «a cualquiera le puede pasar». Sin embargo, no deja de llamar la atención el marcado horizonte que los refugios imprimen en el imaginario colectivo.

6 En Uruguay, *volquetas* es la forma de denominar a los contenedores de basura en los vecindarios o barrios.

Conclusiones

Un colectivo que se organiza y designa un espacio dedicado a los cuidados en asamblea muestra una clara manifestación de una agencia opacada por los estereotipos asociados a la situación de calle y su definición a través de conceptos individuales (Mcnaughton, 2006). La diversidad de respuestas que se fueron dando a los asuntos y los temas que se fueron poniendo sobre la mesa en un primer año de experiencias en la trinchera, dan cuenta de la composición heterogénea de esta potencia colectiva. Así mismo, es posible percibir lo apremiante de los contextos que no facilitan la salida a la situación de calle y por otro lado la ineficiencia de las respuestas institucionales. Lo anterior sumado a una cultura que reduce los cuidados a la salud y a necesidades corporales específicas incrementa fácilmente una sensación de urgencia que dificulta la reflexividad conjunta y favorece un equiparamiento de los cuidados a la asistencia (Vitón de Antonio y Castro de la Iglesia, 2020). Esta igualación pudiera ser uno de los principales impedimentos de un desanclaje de la dependencia estructural que los sistemas refugios enfrentan (Di Iorio, 2021).

Nuestras reflexiones sobre esta agencia potenciada del colectivo en una dedicación a los cuidados colectivamente pudiera representar un alternativa donde posiblemente tenga lugar una transformación social cotidiana (Gutiérrez y Salazar, 2015) y simultáneamente: 1) se refuerce el lazo social y las redes de soporte, 2) se tenga lugar un acompañamiento par y su elaboración conjunta, 3) se avancen interpelaciones institucionales y defensa de derechos y, 3) se consoliden propósitos colectivos que resignifiquen y dignifiquen la situación por la que se atraviesa.

Referencias

- Bachiller, S. (2015). Reflexiones etnográficas sobre un trabajo de campo con personas en situación de calle. Población y sociedad. *Población & Sociedad*, 22(2), 135-144.
- Bufarini, M. (2020). Percibir y resistir los estigmas. Un estudio sobre la cotidianeidad de personas en situación de calle. *Kamchatka. Revista de análisis cultural*, (16), 215-230.
- Castro-Gómez, S. (2007). Decolonizar la universidad. La hybris del punto cero y el diálogo de saberes. En S. Castro-Gómez y R. Grosfoguel (Eds.), *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global* (pp. 79-91). Bogotá: Siglo del Hombre Editores- Universidad Central-Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos-Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar.
- Ceminari, Y., y Stolkner, A. (2018). El cuidado social y la organización social del cuidado como categorías claves para el análisis de políticas públicas. En *X Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, XXV Jornadas de Investigación, XIV Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur*. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Ciapessoni, F. (2013). *Recorridos y desplazamientos de personas que habitan refugios nocturnos* (Tesis de maestría, Universidad de la República, Montevideo).

- Ciapessoni, F. (2019). La prisión y después. Violencia, reingreso y situación de calle. *Revista de Ciencias Sociales*, 32(45), 15-38.
- Colanzi, I. C., y Del Manzo, M. B. (2017). Modos de habitar el barrio: territorio de disputa y agencia colectiva. *Anuario Temas en Psicología*, 3, 135-157.
- Del Cueto, A. M. (2014). *La salud mental comunitaria. Vivir, pensar, desear*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Di Iorio, J. J. (2019). Vivir en situación de calle en contextos urbanos: subjetividades en resistencia. *Revista Interamericana de Psicología/Interamerican Journal of Psychology*, 53(2), 167-179.
- Di Iorio, J. (2021). Producción social de cuidados con personas en situación de calle en el escenario de la pandemia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. *Salud Mental y Comunidad*, 8(10), 72-89.
- Di Iorio, J., Seidmann, S., Gueglio, C., y Rigueiral, G. (2016). Intervenciones psicosociales con personas en situación de calle: el cuidado como categoría de análisis. *Psicoperspectivas*, 15(3), 123-134. 0.5027/PSICOPERSPECTIVAS-VOL15-ISSUE3-FULLTEXT-838
- Di Iorio, J., Seidmann, S., Rigueiral, G., Gueglio, C., Rolando, S., y Azzollini, S. (2016). Construyendo comunidad: Investigación acción con personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. En *VIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, XXIII Jornadas de Investigación XII Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur*. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Domínguez, G. (2019). ¿Personas en situación de calle u ocupantes indebidos del espacio público? La nominación oficial y sus consecuencias en la intervención social. *Fronteras*, (12), 48-60.
- Evans, T. (2019). Trayectorias de exusuarios de refugios del MIDES. Entre la salida de situación de calle y desventajas sociales persistentes (Tesis de maestría, Universidad de la República, Montevideo).
- Evans, T. (2021). Rutas de salida de refugios para personas en situación de calle en Montevideo. *International Journal on Homelessness*, 1(1), 50-78. <https://doi.org/10.5206/ijoh.2021.1.13362>
- Federici, S. (2015). Sobre el trabajo de cuidado de los mayores y los límites del marxismo. *Nueva Sociedad*, (256), 45-62.
- Gutiérrez, E. J. D. (2020). Otra investigación educativa posible: investigación-acción participativa dialógica e inclusiva. *Márgenes. Revista de Educación de la Universidad de Málaga*, 1(1), 115-128.
- Gutiérrez, R., y Salazar, H. (2015). Reproducción comunitaria de la vida. Pensando la transformación social en el presente. *El Apantle. Revista de Estudios Comunitarios*, 1, 15-50.
- Lancione, M. (2016). Racialised Dissatisfaction: Homelessness Management and the Everyday Assemblage of Difference. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 41(4), 363-375.
- Linsalata, L. (2015). *Cuando manda la asamblea: lo comunitario-popular en Bolivia: una mirada desde los sistemas comunitarios de agua de Cochabamba*. Bolivia: Sociedad Comunitaria de Estudios Estratégicos.
- McNaughton, C. (2006). Agency, Structure and Biography: Charting Transitions Through Homelessness in Late Modernity. *Auto/Biography*, 14(2), 134-152.
- Mcnaughton, C. (2009). Agency, Transgression and the Causation of Homelessness: A Contextualised Rational Action Analysis. *European Journal of Housing Policy*, 9(1), 69-84. [10.1080/14616710802693607](https://doi.org/10.1080/14616710802693607)
- Newman, S., y Goldman, H. (2008). Putting housing first, making housing last: Housing policy for persons with severe mental illness. *American Journal of Psychiatry*, 165(10), 1242-1248.
- Pleace, N. (2016). Researching Homelessness in Europe: Theoretical Perspectives. *European Journal of Homelessness*, 10(3), 19-44.
- Rebellato, J. L. (1997). *Ética de la autonomía*. Montevideo: Roca Viva.
- Rose, N. (2007). ¿La muerte de lo social?: Re-configuración del territorio de gobierno. *Revista Argentina de Sociología*, 5(8), 113-152. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/269/26950807.pdf>.

- Rossal, M., Keuroglan, L., Ramírez, J., Suárez, H., Castelli, L., Coimbra, A.,... Méré, J. (2019). *Personas, calle, consumos: dos estudios sobre uso de pasta base en Uruguay. Aproximaciones cuantitativas y etnográficas*. Montevideo: Junta Nacional de Drogas.
- Seidmann, S., Di Iorio, J., Azzollini, S. C., y Reigueral, G. (2015). Sociabilidades en los márgenes: prácticas y representaciones sociales de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. *Anuario de Investigaciones*, XXII, 253-261.
- Stolkiner, A., y Ardila Gómez, S. (2012). Conceptualizando la salud mental en las prácticas: consideraciones desde el pensamiento de la medicina social/salud colectiva latinoamericanas. *Vertex. Revista Argentina de Psiquiatría*, 23(10), 57-67.
- Tronto, J. (2017). There is an alternative: homines curans and the limits of neoliberalism. *International Journal of Care and Caring*, 1(1), 27-43.
- Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos (Dintad) (2021). Evolución y caracterización de las personas en situación de calle en Uruguay. <https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/sites/ministerio-desarrollo-social/files/documentos/publicaciones/Informe%20relevamientos%20PSC%202020-2021.pdf>
- Vitón de Antonio, M. J., y Castro de la Iglesia, F. D. (2020). Contextos socioculturales del cuidar y ejercicio ético. Reflexividad y compromisos pedagógicos para la democratización de la vida compartida. *Saber & Educar*, (27), 1-9.
- Vega Solís, C. (2019). Reproducción social y cuidados en la reinención de lo común. Aportes conceptuales y analíticos desde los feminismos. *Revista de Estudios Sociales*, (70), 49-63.

ETNOGRAFIA DE UM COLETIVO VOLTADO À GERAÇÃO DE RENDA PARA MULHERES CIS E TRANSGÊNERO NA CRACOLÂNDIA

ETHNOGRAPHY OF A COLLECTIVE FOCUSED ON GENERATING INCOME FOR
CIS AND TRANSGENDER WOMEN IN CRACOLÂNDIA

ETNOGRAFÍA DE UN COLECTIVO CENTRADO EN LA GENERACIÓN DE
INGRESOS PARA MUJERES CIS Y TRANSGÉNERO EN CRACOLÂNDIA

Ygor Diego Delgado Alves

Universidade Federal de São Paulo. antropologiaygor@yahoo.com.br

Pedro Paulo Gomes Pereira

Universidade Federal de São Paulo. pedropaulopereira@hotmail.com

Recibido: 29/4/2022 | Aceptado: 13/9/2022

Resumo

Objetivo: o artigo tem por objetivo verificar a influência da participação de mulheres cis e transgênero no Coletivo Tem Sentimento (CTS), voltado à geração de renda, sobre seu consumo de crack. Metodologia: empreendemos uma pesquisa de tipo etnográfico em que pelo período de um mês estivemos convivendo diariamente com as mulheres do CTS. Resultados: pudemos verificar a complexidade do trabalho na oficina de costura, as conexões do Coletivo naquele território e o cotidiano vivido por aquelas mulheres, estruturado em torno de atividades rotineiras e distante do consumo de álcool e crack. O CTS promove um ambiente com valores compartilhados como a assiduidade e o bom convívio, que exercem sanção no sentido de impedir que as mulheres que dele participam façam uso de drogas. Conclusão: participar do CTS pode ter influência positiva no controle do uso de crack e álcool, fazendo com que esse uso possa ser enquadrado em momentos que não atrapalhem a presença no Coletivo, como nos finais de semana.

Palavras-chave: mulher; crack; travesti; Cracolândia; trabalho

Abstract

Objective: The article aims to verify the influence of the participation of cis and transgender women in the Has Feeling Collective (HFC), aimed at income generation, on their crack consumption. Methodology: we undertook an ethnographic type of research in which for a period of one month we were living daily with the women of the HFC. Results: we were able to verify the complexity of the work in the sewing workshop, the connections of the Collective in that territory and the daily life lived by those women, structured around routine activities and distant from the consumption of alcohol and crack. The HFC promotes an environment with shared values such as assiduity and good coexistence, which exercise sanctions in order to prevent the women who participate in it from using drugs. Conclusion: participating in the CTS can have a positive influence on the control of crack and alcohol use, allowing this use to be framed in moments that do not interfere with the presence in the Collective, such as on weekends.

Keywords: woman; crack; transvestite; Cracolândia, labor

Resumen

Objetivo: El artículo tiene como objetivo verificar la influencia de la participación de mujeres cis y transgénero en el Colectivo Tiene Sentimiento (CTS), destinados a la generación de ingresos, en su consumo de crack. Metodología: se realizó una investigación de tipo etnográfica en la que durante un mes estuvimos conviviendo diariamente con las mujeres de la CTS. Resultados: pudimos constatar la complejidad del trabajo en el taller de costura, las conexiones del Colectivo en ese territorio y el cotidiano vivido por aquellas mujeres, estructurado en torno a actividades rutinarias y alejadas del consumo de alcohol y crack. La CTS promueve un ambiente con valores compartidos como la asiduidad y la buena convivencia, que ejercen sanciones a fin de evitar que las mujeres que participan en él consuman drogas. Conclusión: la participación en el CTS puede influir positivamente en el control del uso de crack y alcohol, permitiendo enmarcar ese uso en momentos que no interfieren con la presencia en el Colectivo, como los fines de semana.

Palabras clave: mujer; crack; travesti; Cracolândia; trabajo

Introdução

O artigo trata do Coletivo Tem Sentimento (doravante CTS), voltado a geração de renda e autocuidado (Lima, 2021) através do exercício da costura para mulheres cis e transgênero, em situação de vulnerabilidade, da Cracolândia paulistana. A pesquisa foi realizada como parte das investigações que os autores vêm desenvolvendo nessa região nos últimos 10 anos. A escolha do trabalho desenvolvido no CTS como objeto de nossa investigação se deu por este localizar-se na Cracolândia, o que faz com que importante parcela das mulheres que participam do coletivo seja ou tenha sido usuária de crack; e que parte dessas mulheres tenha sido ou seja moradora em situação de rua na região. Ao perceber essas características, vimos que acompanhar o cotidiano de mulheres cis e transgênero usuárias ou ex-usuárias de crack e que estão ou passaram pela situação de rua nos permitiria observar o quanto uma iniciativa voltada ao trabalho para geração de renda teria influência sobre o consumo de drogas entre esse público.

Frúgoli Jr e Cavalcanti (2013) observam que a Cracolândia seria um território em disputa no contexto de uma grande intervenção urbana, o que geraria conflitos, mas também conexões com outros espaços. Na mesma linha, Rui (2014) nota que, embora se trate de uma territorialidade considerada como local perigoso e que se deva evitar, a Cracolândia exerce grande atração e não se encontra isolada do restante do bairro da Luz. Seus moradores e frequentadores que consomem crack circulariam por diferentes instituições instaladas no território, mas teriam, para Fromm (2017), suas próprias estratégias cotidianas de sobrevivência. O que tornaria esse espaço habitável, para Alves e Pereira (2021), seriam as relações estabelecidas entre pessoas, e entre materiais em movimento, que demandariam dessas pessoas um esforço incessante para manterem as coisas íntegras no interior do “fluxo”, nome dado à porção mais concentrada de usuários de crack no interior da Cracolândia. Por outro lado, os movimentos produzidos pela ação do Estado se perderiam no interior do que Nasser (2018) chama de labirintos, uma sequência de percursos institucionais ineficazes para as pessoas que usam crack e demandam por serviços públicos.

Consideramos importante observar que a maioria de nossas interlocutoras transgênero se identifica como travesti; e que estudar as possibilidades de reduzir o consumo de crack nessas pessoas, tanto quanto entre mulheres cisgênero, se justifica por haver literatura indicando que o consumo de drogas pode estar ligado a atividades com consequências prejudiciais aos dois perfis.

O envolvimento de mulheres cisgênero com o tráfico de drogas e conflitos com a Justiça provocado pelo uso do crack está relatado em Marangoni e Oliveira (2012). Em Garcia (2008) o abuso de drogas chegou a ser registrado como motivo para execução atividades ilegais por parte

de travestis; e o crack foi apontado como droga ilícita não-injetável mais utilizada por travestis na cidade paulista de Ribeirão Preto (Passos e Figueiredo, 2004). As travestis pesquisadas por Garcia (2007) foram unânimes em relacionar a disseminação do crack em São Paulo, nos anos 90, com o aumento da violência contra clientes; além disso afirmaram utilizar quase a totalidade do dinheiro obtido na atividade de prostituição na manutenção do uso da droga. O envolvimento com o consumo e o tráfico do crack pode também advir da própria dinâmica imposta pela ilicitude da droga. Com a repressão policial à venda e uso, os hotéis evitam a entrada de pessoas desacompanhadas, que possivelmente iriam apenas valer-se do quarto por curto período para consumir drogas. Isto leva a procura por travestis como acompanhantes para possibilitar o ingresso nestes estabelecimentos. O que induz muitos a iniciar, desta maneira, o consumo e, por vezes, a atividade de comercializar crack (Garcia, 2007).

O consumo do crack aparece em Amorim, Vieira e Brancaloni (2013) como motivado pela baixa autoestima e desvalorização imposta as travestis. Malheiro (2019) ainda observa o quanto problemas com autoestima podem estar ligados ao abuso do crack entre mulheres cisgênero. O consumo do crack também esteve ligado, no Distrito Federal, ao aumento de situações de mendicância e de moradia na rua; onde uma travesti declarou em De Souza (2010, p. 3), sobre a chegada destas pessoas na rua, que “tudo aquilo que elas ganham durante a noite elas consomem com a droga. Ficam sem dinheiro para o aluguel, daí o dono despeja [...]”. De Souza, Signorelli, Martin e Pereira (2014) observam que, no município de Santa Maria, região central do Rio Grande do Sul, existem regras quanto ao consumo do crack nas pensões frequentadas por travestis. Os conflitos no núcleo familiar e a violência doméstica também se fazem presentes entre mulheres cisgênero usuárias de crack, e foram relatados por Marangoni e De Oliveira (2012). Malheiro (2019) relatou a importância do estigma em torno das mulheres em situação de rua e usuárias de crack na cidade de Salvador, Bahia.

Para Antunes (2011) as travestis buscam habitar espaços onde são aceitas, após expulsão da família e de sofrerem intenso preconceito; e suas condições de moradia estão intimamente ligadas a sofisticação e adequação de seus corpos aos padrões de beleza, que possibilita maiores ganhos no mercado do sexo. O uso da droga prejudica, aparentemente por uma questão estética, a obtenção de clientes para as que trabalham como profissionais do sexo; e a falta de recursos para aquisição do crack acaba por gerar problemas com roubos. Isto coloca o cuidado com o corpo, de um ponto de vista estético, no centro das preocupações.

Com a estética em primeiro plano pode-se, por hipótese, melhor compreender os equívocos verificados entre este público quanto às formas de transmissão do HIV/AIDS (Ferreira Jr, Francisco e Nogueira, 2016). O conhecimento das formas de transmissão, ao não influir de imediato sobre um modo de vida organizado, em muitos casos, em torno da prostituição e

do consumo de crack, acabaria, possivelmente, por ser negligenciado frente as preocupações imediatas com a aparência e o corpo. Pesquisa com mulheres cisgênero usuárias de crack (Medeiros, Maciel, Sousa e Vieira, 2015) apontou que a droga é considerada pelas usuárias como elemento desagregador, responsável por causar abandono ou afastamento das funções femininas. Silva (2000) observa que as mulheres que consumiam crack e se prostituíam na região da Luz, próxima a Cracolândia, costumavam cobrar menos pelos programas que as não usuárias; além de se exporem mais as DSTs/AIDS pela situação de pobreza e crenças do que seja ser saudável.

Não existem muitos estudos publicados que tratem do CTS. Lima (2021) utilizou o CTS como ponto de acesso ao campo na Cracolândia e percebeu que entre as mulheres cis e transgênero que o frequentavam havia agências para satisfazer desejos, enfrentar adversidades e elaborar vivências. Alves e Pereira (2020) se valeram do referencial teórico proporcionado pelas ideias de Achille Mbembe para concluir que os usuários de crack, marcados pela necropolítica, mas com apoio de militantes de diversas entidades e coletivos, como o CTS, negam o necropoder; com táticas de contenção da letalidade materializadas em oficinas de autocuidado, distribuição de alimentos e iniciativas de ajuda mútua. Alves, Pereira e de Freitas Silva (2020) ressaltam a existência de uma disposição entre consumidores de crack para prevenirem riscos relacionados ao consumo da droga, que pôde ser agenciada, no contexto da Covid-19, por ativistas e profissionais engajados na defesa da saúde dessas pessoas, entre os quais se inclui o CTS, com a distribuição de kits de higiene, concomitante a entrega de refeições e vestimentas. Jacopini (2021) também resalta o trabalho realizado durante a pandemia, como a distribuição de marmitas, a horta sustentável e a geração de renda através da produção de vestimenta. A distribuição de alimentos pelo CTS também é relatada por Nogueira (2021), que destaca a importância da confecção e distribuição de máscaras pelas mulheres, no contexto da COVID. A promoção da autoestima e autonomia das mulheres através de encontros produtivos, que geraria “uma noção de pertencimento e afeto fora do “fluxo””, é ponto central na análise de Ramos (2020, p. 137) sobre o CTS. A autora também destaca a distribuição de peças íntimas e de máscaras no contexto pandêmico, que seriam “costuradas pelas mulheres do território, para a população do território”. A importância dessa produção também está presente em Martins (2021). O processo de criação do CTS pela assistente social Carmen Lopes é descrito em Carnevale (2021, pp. 162-163), a assistente social é mostrada como uma trabalhadora da Luz “sempre cercada de usuários e pessoas em condições de extrema vulnerabilidade”. O autor também se refere aos jantares românticos organizados pelo CTS “por conta do dia dos namorados, no Teatro do Faroeste”.

Sabemos então que o consumo do crack entre travestis e mulheres cisgênero pode: ser motivado pela baixa autoestima e desvalorização; provocar o aumento de situações de

mendicância e de moradia na rua; prejudicar a obtenção de clientes, no caso das que recorrem a prostituição; aumentar a exposição às DSTs/AIDS; e gerar problemas com roubos e tráfico de drogas. Almeida, Santos, Brito, Silva e Nappo (2018) observaram em pesquisa sobre aspectos relacionados ao sucesso do tratamento da dependência do crack na visão dos usuários, a importância da oferta de um espaço protegido da droga e da qualificação profissional atrelada com a inserção no mercado de trabalho. Uma travesti entrevistada nessa pesquisa declarou que desejava em seu tratamento: “Mais atividade né, [...] tipo profissionalizante, que mexesse mais com motivação da gente sair... se a gente fizesse um cursinho, de qualquer coisa, um artesanato, uma coisa ou outra, ajudaria, saísse encaminhado pra um emprego”. Nessa afirmação estão presentes dois aspectos relevantes para o CTS: atividade laboral e formação profissional.

Vimos que não existe até o momento da elaboração deste artigo nenhum trabalho publicado dedicado exclusivamente ao CTS, mas pesquisas que o citam como parte de um interesse maior por algum aspecto da Cracolândia; sejam as mulheres usuárias de crack, a produção artística local, a resistência durante a pandemia ou os múltiplos coletivos e iniciativas ali presentes. Por ser fruto de uma pesquisa etnográfica dedicada exclusivamente a conviver com aquelas mulheres cis e transgênero, agrupadas em torno de uma iniciativa dedicada ao trabalho com produção de vestuário, acreditamos poder trazer alguma contribuição original sobre o papel de um coletivo com essas características, principalmente a da geração de renda, na relação dessas pessoas com o consumo do crack.

Nosso artigo procurará verificar a influência da participação de mulheres cis e transgênero no CTS sobre seu consumo de crack.

Metodologia

Este artigo é fruto de uma etnografia realizada no CTS, em que convivemos com as mulheres cis e transgênero em situação de vulnerabilidade social, com inserção diária no campo pelo período de um mês, em junho de 2021. O CTS se localiza no bairro de Santa Efigênia na região paulistana antigamente conhecida como Boca do Lixo e desde meados dos anos 1990 chamada de Cracolândia.

O pesquisador e primeiro autor desse artigo pôde aproximar-se do campo por conhecer previamente a assistente social Carmen Lopes, ou Dona Carmen como é comumente chamada, responsável pelo CTS; assim foi possível ter amplo acesso as atividades e ao convívio diário no Coletivo, porém um procedimento precisou ser adotado. Para conseguir permanecer no campo e minimizar um pouco o desconforto causado pela presença do etnógrafo, propusemos

à assistente social responsável que trabalhássemos durante nossa pesquisa; e sugerimos o desempenho de atividades braçais como carregar caixas de tecido, o que foi prontamente aceito. No decorrer dos dias passamos a desempenhar outras tarefas como a de distribuir as marmitas, outra atividade desempenhada pelo coletivo, em convênio com a prefeitura, além da costura. Após duas semanas de inserção no campo éramos a pessoa responsável por receber as 400 marmitas diárias e organizar a distribuição, o que também incluía trabalho braçal no manejo dos conjuntos com dezenas de embalagens entregues pelos fornecedores.

No entanto, passamos a ser a única presença masculina cisgênero em tempo integral naquele local, o que trouxe alguma preocupação quanto a segurança de nossas interlocutoras, principalmente uma mulher cisgênero casada e vítima de agressão constante por parte do marido. A presença do corpo do antropólogo naquele espaço e em interação com aquelas mulheres poderia causar alguma desconfiança por parte do marido. Como forma de tentar driblar o problema passou-se a tratar o pesquisador como uma “maricona”, termo pejorativo utilizado pelas travestis para referirem-se aos seus clientes; e a qualquer um que perguntasse sobre aquela presença masculina seria informado tratar-se de homem gay. Essas questões serão tratadas em um artigo específico sobre o corpo do antropólogo nesta pesquisa etnográfica.

No decorrer da etnografia tivemos contato diário com 12 mulheres em situação de vulnerabilidade, 3 cisgênero e 9 transgênero, além das outras quatro mulheres que compunham o corpo técnico e diretivo do Coletivo durante aquele período. Foi possível ter interlocução com todas essas mulheres, compartilhar momentos de trabalho e lazer, gravar conversas, tirar fotografias e filmar. Fizemos entrevistas semiestruturadas com 9 delas, 3 técnicas e 6 mulheres em situação de vulnerabilidade, 2 cisgênero e 4 transgênero. As entrevistas foram transcritas e juntamente com o caderno de campo, as fotografias feitas com o uso do telefone celular e as filmagens compõe o material cuja análise dá base a este artigo.

Ao conviver com essas mulheres buscamos, com Lofland e Lofland (1995): 1) os significados, as categorias linguísticas utilizadas pelas mulheres para se referir a vida social, como definições e estereótipos; 2) as práticas, atividades contínuas ou rotineiras, os procedimentos; 3) os episódios, que contrastam com a rotina, eventos marcantes; 4) os encontros, como as reuniões da equipe técnica com as mulheres vulneráveis; 5) os papéis, que permitam tipificar as pessoas; 6) as relações, de tipo íntima, maternal ou amigável; 7) o CTS como organização, os mecanismos de controle, hierarquização, seus rituais e valores; e 8) estilos de vida, comportamento adaptativo comum a uma situação similar. Para Grinnell (1997) uma observação de campo deve identificar problemas e gerar hipóteses para futuros estudos, esforço que nos dispusemos a empreender. Além disso, recomenda a atenção aos detalhes, pois tudo pode ser relevante: o clima físico, as cores, odores, espaços e a linguagem não verbal.

Após o término da fase de pesquisa de campo passamos a revisar o material produzido e concluímos estar de acordo com os objetivos da pesquisa. Os materiais foram inicialmente organizados cronologicamente, do primeiro ao último dia da etnografia; e posteriormente os separamos por algumas unidades de análise: 1) a convivência diária (chegada/café/início do trabalho/preparação para boca de rango/volta ao trabalho/despida); 2) as relações sociais em torno da oficina de costura: divisão do trabalho, relações de trabalho, relações com as máquinas (aprendizado, conserto), resolução de conflitos; 3) os diferentes processos de produção envolvidos nos produtos fabricados pelo coletivo (moletons, roupas transformadas, sacolas, máscaras para COVID, sacos de dormir); 4) as relações com o ambiente da Cracolândia; e 5) a participação no Coletivo e o consumo do crack. Finalmente, o material também foi dividido pelo perfil das participantes: mulher transgênero em situação de vulnerabilidade; mulher cisgênero em situação de vulnerabilidade; mulher membro da equipe técnica.

Os autores desse artigo reconhecem a importância do conceito de performatividade e da teoria *queer* (Butler, 2006) para etnografias entre travestis (Miskolci e Pelúcio, 2007; Pereira, 2015), porém decidimos adotar aqui perspectivas diversas, mais dedicadas ao consumo de drogas e ao trabalho coletivo. Então, como base teórica de nosso artigo, iremos nos valer de pesquisadores como Zinberg (1984) que sustentou que para entender a motivação de alguém para utilizar drogas, e como afeta o usuário, deve-se considerar o *setting* social; visto que certos contextos sociais possuem a capacidade de manter o uso de drogas sob controle através do desenvolvimento de sanções sociais, entre outros fatores. Grund (1993) sugere então que, além dos controles sociais informais discutidos por Zinberg, deve-se também levar em conta a estrutura de vida dos usuários; cuja forma e grau são resultado de atividades regulares, relacionamentos, compromissos, responsabilidades e ambições. Ainda iremos nos valer da noção de encontro focado em Goffman e Mcginnis (1961). Para os autores, o encontro focado envolve um foco visual e cognitivo único de atenção, que imerge os participantes em um ambiente capaz de intensificar a relevância mútua de seus atos, assim como de maximizar a oportunidade de cada participante perceber o monitoramento do outro sobre ele. Por último, iremos recorrer a ideia de retificação presente em Sennett (2019), em que partes de um objeto podem ser substituídas preservando a forma antiga; e de reconfiguração em que o objeto quebrado serve de oportunidade para criar algo diferente. Retificação e reconfiguração abrem espaço, por exigirem criatividade, para experiências sociais de caráter radical; geram novas formas de cooperação e preservam entre os participantes o sentimento de que são capazes e competentes.

Quanto aos aspectos éticos de nossa pesquisa é importante informar que não consideramos apropriado solicitar a assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), por tratarem-se de pessoas, em sua maioria, envolvidas em ao menos uma prática delituosa:

o consumo de uma droga ilícita, o crack. Concordamos com Macrae e Vidal (2006) ao salientarem as dificuldades éticas dos etnógrafos em pessoas cujas atividades incluem atos ilegais; para os autores termos de consentimento podem se tornar surreais nessas ocasiões. Nossa inserção no campo não poderia ter sido imposta, pelo motivo de a responsável pelo Coletivo não ter qualquer dívida conosco nem ter lhe sido oferecido qualquer vantagem, portanto nos encontrávamos sob as regras do Coletivo e nesse contexto podemos afirmar que os diálogos eram consentidos por definição (Oliveira, 1996). Algumas interlocutoras assinaram termo de autorização de uso de imagem por desejarem aparecer nos artigos e demais produtos de nossa pesquisa. As imagens em que pessoas aparecem com rosto borrado são devido a falta de assinatura do termo. Todos os nomes utilizados no artigo são fictícios, exceto o da coordenadora do CTS, a assistente social Carmen Lopes que é uma pessoa pública.

Resultados

O CTS se localiza na altura do número 85 da rua dos Protestantes, no bairro de Santa Ifigênia, São Paulo, no interior do território que abriga a Cracolândia desde meados dos anos 1990. A área mais concentrada da cena aberta de uso de crack, conhecida como “fluxo”, estava, até março de 2022, a 600 metros de distância do Coletivo, ou 6 minutos a pé. O “fluxo” foi posteriormente deslocado para a praça Princesa Isabel, passando então a se localizar, no momento em que escrevemos esse artigo, a 800 metros do CTS.

O Coletivo surgiu em meados de 2018, após o afastamento de sua coordenadora, a assistente social Carmen Lopes, do trabalho que vinha desenvolvendo na Cracolândia junto a prefeitura de São Paulo, desde o início do programa De Braços Abertos (DBA), ou seja, desde janeiro de 2014. O fim do DBA, em maio de 2017, foi acompanhado pela demissão em massa de suas trabalhadoras sociais e da saúde, mas o trabalho de Carmen não parou; ao lado do “fluxo”, na rua Helvetia, montou sua primeira iniciativa de autocuidado para mulheres cis e transgênero da Cracolândia (Alves e Pereira, 2019). Pouco depois, a ação iria se mudar para o Largo General Osório, a 180 metros de onde hoje se localiza o CTS. Uma outra atividade que Carmen organizou após ser desligada da prefeitura foi a oficina de produção de calcinhas, nela percebeu que “as mulheres ao costurar, rememoravam histórias da infância e de familiares” (Lima, 2021, p. 74); e dessa constatação surgiu a ideia de uma proposta de geração de renda para essas mulheres através da costura.

O CTS começou a produzir camisetas e sacolas a partir de retalhos de pano doados por uma empresa têxtil. O trabalho foi organizado em uma pequena oficina que ocupava todo um andar de um prédio abandonado localizado na rua dos Protestantes, nos fundos do terreno atual do

Coletivo. É um imóvel precário, em boa parte sem iluminação, sem parte elétrica ou hidráulica funcionando e faltando algumas paredes dos antigos cômodos, assim como o parapeito da escada. O edifício mal possui janelas ou um teto que abrigue o interior da chuva, vento, calor ou frio a depender da estação do ano.

Quando veio a pandemia da COVID-19, o CTS ocupava um container nos fundos do Teatro Mungunzá, local em que permanece até a elaboração deste artigo. O Teatro se credenciou junto a prefeitura para ser ponto de distribuição de marmitas durante a pandemia; as mulheres do CTS passaram a participar dessa distribuição, além de costurar e entregar máscaras para prevenção da doença. Na figura 1 o pesquisador distribui marmitas em frente ao Coletivo.

Figura 1.



Fonte: acervo pessoal dos autores.

Após essa breve explanação sobre os antecedentes do CTS, prévios ao início de nossa etnografia, iremos sintetizar os achados relevantes de nossa pesquisa.

A convivência diária

Ao iniciarmos nossa etnografia o CTS passava por um momento que podemos classificar como de transição entre um centro de convivência para um projeto de geração de renda. Os centros de convivência são equipamentos destinados à população em situação de rua, com apoio

psicológico, assistencial e atividades em grupo; são “espaços onde os indivíduos podem cuidar da própria higiene pessoal, descansar e receber um lanche. Além disto, são efetuadas visitas culturais ou institucionais, em grupo” (Serafino e Luz, 2015, p. 80).

Por não ter mais como manter o pagamento de um auxílio de 712 reais por mês às meninas, como geralmente eram chamadas as mulheres que participavam do Coletivo e como iremos nos referir às nossas interlocutoras daqui em diante, a coordenadora Carmen Lopes passou a exigir um maior compromisso com o trabalho, o que na prática significava cumprimento de horários e algumas atividades. As frases abaixo, ditas por Carmen em uma reunião durante o café da manhã e no primeiro dia de nossa incursão no campo, dão um pouco o sentido de urgência da situação que o CTS passava a viver.

A bolsa, gente, eu não sei o quanto eu vou pagar porque não sei o quanto eu vou ter. Eu não tenho condições de pagar 712 (reais). Aqui não é um programa, gente, do poder público. Não tem dinheiro do poder público. A gente não tem grana.

Motivada pela falta de financiamento, Carmen, em decisão conjunta com as demais técnicas do Coletivo, uma assistente social e duas auxiliares, passa a exigir o cumprimento de um horário de chegada ao trabalho às 8:00. Porém, chegar não significava na prática assumir um local em frente a máquina de costura e iniciar a produção, significava preparar o café. Antes de tudo, os dois containers que abrigam o Coletivo eram abertos, um deles, onde ficava o banheiro, a pia e uma pequena despensa, se localiza no nível do solo; o outro, com o dobro do tamanho e onde se localizava a oficina de costura, era acessado por uma escada, ficando logo acima do primeiro.

A preparação do café era feita por uma das meninas ou por uma das técnicas; e era comum que trouxessem pão, que não poucas vezes era dividido. As pessoas se sentavam sob uma pequena área coberta ou um pouco mais afastadas, ao ar livre. Carmen costumava aproveitar o momento para algum recado, pedido ou instrução; fora isso a conversa fluía animadamente com risos, por vezes altos, música e até alguns gritos animados. Apenas, aproximadamente, às 9:00, as meninas se dirigiam às suas atividades, horário cobrado por Carmen e pelas técnicas.

Dentre as atividades desenvolvidas pelo CTS está a distribuição de refeições à população de rua da Cracolândia; e partir das 9:00 começavam a chegar as 400 marmitas distribuídas diariamente. Os fornecedores mudavam muito e cada um tinha seu cardápio diário. A qualidade podia variar significativamente entre os fornecedores e todas as refeições continham algum tipo de carne ou omelete; vinham em caixas de papelão ou geladeiras de isopor, que ficavam sob a guarda do Coletivo até o próximo dia, quando seriam devolvidas e substituídas por outras cheias. Eram geralmente 5 fornecedores diferentes, os isopores eram colocados sobre

4 mesas dispostas em frente ao portão de entrada do Coletivo; além disso os garfos e facas, fornecidos juntos com as marmitas, eram colocados em uma caixa. Quando havia máscaras produzidas pelo Coletivo, eram colocadas em outro recipiente para distribuição na hora do “rango”, meio dia. Uma longa fila começava a se formar a partir das 11:30, aproximadamente. A distribuição precisava da contribuição de várias pessoas: uma na repartição dos talheres de plástico; outra no álcool gel, que era administrado nas mãos de todos antes de receberem a marmita; duas pessoas entregando as marmitas; uma outra organizando a fila, impedindo que fosse furada; e uma ou duas outras retirando as marmitas dos isopores e entregando, geralmente de 5 em 5 unidades, à responsável pela distribuição. Acrescente a distribuidora de máscaras e por vezes de cobertores, quando havia disponíveis e se a temperatura descesse muito. Casos de pessoas que entravam várias vezes na fila eram comuns e administrados segundo suas particularidades, mas havia um princípio de que cada um deveria pegar apenas uma refeição. Um cesto de lixo também era colocado na rua, próximo ao portão, para receber as embalagens vazias. Após o término das 400 marmitas, o portão era rapidamente fechado e as participantes do CTS poderiam finalmente almoçar as refeições que haviam separado antecipadamente; em um processo em que uma menina verificava o conteúdo dos diferentes fornecedores, fazia um cardápio, perguntava a cada uma o que queria, anotava em um papel e levava as refeições, com o nome da dona anotado sobre a tampa da marmita, até uma mesa.

A imagem abaixo retrata um momento de descanso após o almoço. Vemos à esquerda um container com as duas portas abertas, onde se faz o café da manhã; acima dele está a oficina de costura. O container da direita é utilizado por outra iniciativa, o Paulestinos. Há uma mesa no centro com algumas marmitas que serão levadas para o jantar.

Figura 2.



Fonte: acervo pessoal dos autores.

Após o descanso do almoço, as meninas retornam ao trabalho que pode ser realizado tanto dentro da oficina quanto em uma área coberta localizada logo abaixo; e até mesmo mais afastado, debaixo da árvore em uma área cimentada ao lado do Teatro Mungunzá. Veremos agora como se trabalha no CTS.

As relações sociais em torno da oficina de costura

A oficina do CTS trabalha com três tipos distintos de máquinas de costura industriais: a reta, a overloque e a galoneira. Algumas informações a respeito da constituição, funcionamento e operação das máquinas se fazem necessárias para que possamos entender a complexidade do trabalho.

A máquina reta possibilita costurar com mais de uma linha por vez, o que dá mais agilidade e rapidez na costura; com duas linhas o trabalho é feito sem interrupções, enquanto uma linha costura a outra enche a bobina, de onde sai o fio em direção à agulha que o introduzirá no tecido. Para a linha chegar até a agulha é necessário percorrer um intrincado caminho com 12 pontos diferentes de passagem por toda máquina. Porém, é possível utilizar a linha que já está na máquina como guia para uma linha nova, de outro carretel, esse e outros “truques” são passados no dia a dia de trabalho. Alguns ajustes importantes têm de ser feitos antes de iniciar a costura, um dos mais importantes é o comprimento do ponto que pode variar de tecido para tecido. Aprender a trocar a agulha também é uma habilidade requerida da costureira, diferentes tecidos podem precisar de agulhas mais grossas ou mais finas. No trabalho com a máquina reta são utilizadas as duas mãos e as pernas. O pé-calcador, que segura o pano enquanto a agulha introduz e retira o fio, é constantemente levantado para liberar o corte do fio ao término de cada costura e é acionado empurrando uma alavanca com o joelho; e com os pés a costureira acelera ou diminui a velocidade da costura.

Na máquina overloque o processo para passar a linha do carretel até a agulha também é bastante intrincado, mas o pé-calcador é levantado por intermédio de um pedal e não com o joelho direito como no caso da máquina reta. A aceleração é feita por outro pedal, maior e mais à esquerda. A máquina galoneira pode utilizar até duas ou três agulhas; e passagem dos fios é igualmente complexa em comparação com a máquina reta e a overloque. A galoneira passa dois fios de máquina reta e um de overloque para costurar o viés ou galão que dá acabamento às peças de vestuário.

Dada a complexidade dos equipamentos de costura, nem todas as meninas eram operadoras de máquina. É fato que as máquinas não são igualmente difíceis de operar e, a grosso modo, podemos dizer que existe uma progressão no grau de dificuldade, que seria: reta,

overloque e galoneira. Portanto, os primeiros exercícios para iniciar na costura eram feitos na reta e consistiam em colocar a linha na agulha, costurar em linha reta sobre um retalho e, posteriormente, aprender a fazer o retrocesso. Para evitar que a costura se desfaça no início ou final do pano, a costureira deve aprender a retroceder o pano na máquina, para costurar uma segunda vez e em sentido contrário.

Os trabalhos mais complexos eram feitos por meninas com algum treino na costura, geralmente com antecedentes de trabalho na área, seja por histórico familiar, profissional ou ambos. Identificamos duas mulheres transgênero, Grazy, 30 anos de idade e Giovana, 40 anos, e uma cisgênero, Mc Docinho, 31 anos, com condição de assumir plenamente as atividades de costura. Porém, existe uma fase do trabalho que antecede a costura: o corte. Antes de subir para a oficina, o tecido precisava ser cortado, o que acontecia geralmente no piso térreo do CTS, sob a pequena área coberta em frente a cozinha ou ao ar livre. Dois cavaletes eram armados e uma madeira era colocada de modo a formar a mesa de corte. O trabalho era realizado com uma máquina de cortar tecido de 4 polegadas, capaz de trabalhar sobre vários tecidos ao mesmo tempo, o que encurtava muito o tempo necessário para produzir, por exemplo, uma grande quantidade de máscaras contra COVID-19. Outra peça fundamental para fazer o corte eram os moldes. Geralmente fornecidos por terceiros, os moldes dos moletons vieram de uma parceria com a loja de roupas C&A, eram colocados sobre os tecidos e riscados, ou seja, com uma caneta se contornava o molde sobre o tecido deixando uma marcação. Esse trabalho era feito por uma única mulher cisgênero, Edmara, 36 anos, e demandava atenção para não cometer erros, o que poderia causar a perda do tecido e até mesmo ferimentos nas mãos.

Nem as meninas ou as técnicas que trabalhavam no CTS quando de nossa etnografia recebiam salário ou qualquer tipo de bolsa por parte do Coletivo, o que as impelia a buscarem renda de outra forma. Uma das mulheres transgênero recebia bolsa do programa municipal Transcidadania, instituído pelo ex-prefeito Fernando Haddad (PT). São R\$ 1.272,60 para garantir que travestis, mulheres transexuais e homens trans em situação de vulnerabilidade concluam o ensino fundamental e médio. Caso diverso é o da mulher trans, Valéria, 34 anos, que se prostituía no período noturno, na região da Avenida Indianópolis, zona centro sul de São Paulo; outra, Adriane, 35 anos, trabalhava em casa de prostituição ou “privê” como se diz na cidade. Ambas declararam que o trabalho no CTS era uma oportunidade de aprender uma profissão e sair da prostituição. Das três técnicas, uma trabalhava em Organização Social que prestava serviço para a prefeitura e as outras duas nada recebiam pelo trabalho no Coletivo, estavam esperando conseguir algum financiamento para poderem ser remuneradas. Em conversa com a coordenadora nos foi dito que precisariam de 10 mil reais mensais para manter o projeto.

As atividades diárias eram determinadas pela coordenadora do Coletivo com auxílio das três técnicas, o que acontecia um pouco a contragosto de Carmen, que desejaria deixar essa função apenas para as técnicas e se dedicar exclusivamente a procurar financiamento para o CTS. Na prática, pela manhã, geralmente durante o café, as tarefas do dia eram distribuídas: quem iria trabalhar na costura, o que iria produzir; quem iria aprender a costurar; se haveria atividade de corte; e quem ficaria responsável por outra tarefa qualquer. Porque além da produção de peças novas nas máquinas de costura havia também a reforma de roupas doadas.

Os diferentes processos de produção envolvidos nos produtos fabricados pelo coletivo

O Coletivo recebia de algumas fábricas dois tipos de matérias primas: retalhos de tecido e peças danificadas, além de peças em bom estado. Os retalhos de tecido serviam para produção de camisetas nas máquinas overloque e galoneira. As peças danificadas possuíam orifícios de onde uma amostra de tecido teria sido retirada à máquina, segundo Carmen Lopes para que uma fábrica pudesse analisar e copiar o modelo da outra, nas palavras dela: “Na moda nada se cria, tudo se copia”. Essas peças eram guardadas em grandes caixas no edifício em ruínas onde o Coletivo começou, localizado atrás dos containers, onde o CTS está agora. Trazíamos essas caixas para baixo, percorrendo uns dois andares por escadas sem parapeito, e as colocávamos na área externa aos containers, na mesma mesa usada no corte. Da oficina eram trazidas agulhas, linhas, fitas, contas e miçangas dos mais variados tipos e sentávamos ao redor da mesa para costurar manualmente as miçangas e contas entorno dos orifícios das camisetas. As doações eram de peças danificadas, muitas vezes únicas, mas também tínhamos peças intactas e repetidas, mas cada peça saía dessa pequena oficina, montada em volta da mesa, diferente das outras.

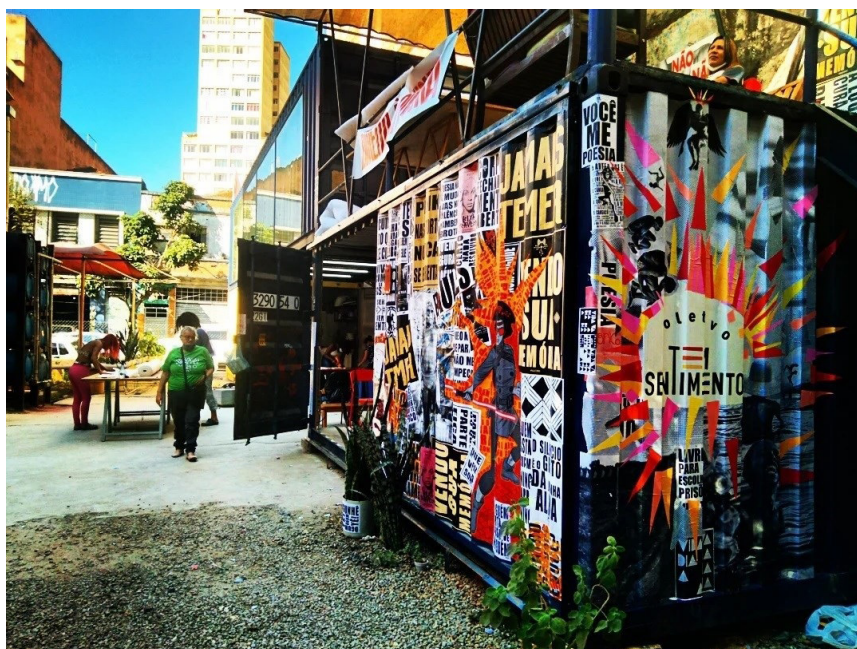
As doações de retalhos acabaram por gerar um estilo próprio de vestimenta do CTS, que compreendia: as camisetas de retalhos; as peças reformadas; os moletoms com detalhes; e as sacolas coloridas. Como todas essas peças são feitas com retalhos ou deles são acrescentadas, e como esses retalhos cortados pela Edmara visam o aproveitamento máximo do pano disponível, resulta que os retalhos são de tamanhos e formatos distintos uns dos outros. A variedade de formatos dos retalhos faz com que uma camiseta, feita a partir da junção dessas pequenas peças na overloque, nunca seja idêntica a outra. No caso dos casacos de moletom, o tecido adquirido no vasto comércio de tecidos do bairro do Bom Retiro é acrescentado de detalhes também provenientes de retalhos de tecidos conseguidos em doação pela coordenadora do Coletivo. Com a sacolas coloridas dá-se um processo parecido ao das camisetas, com a diferença que os tecidos são de cores diferentes, enquanto as camisetas costumam ser brancas.

As relações com o ambiente da Cracolândia

Além da distribuição de marmitas vale observar que a regulação e manutenção das máquinas era feita por um membro da comunidade boliviana de São Paulo, e a professora, Dona Sônia, contratada para ensinar técnicas de costura às meninas também era boliviana. O bairro do Bom Retiro, onde há grande concentração dessa comunidade (Cymbalista, 2007), é lindeiro ao bairro de Santa Efigênia, onde se localiza o CTS. Foi nessa vizinhança que acompanhamos, em algumas oportunidades, uma das técnicas do Coletivo para adquirir tecidos e aviamento.

A oficina do Coletivo, onde ficam suas máquinas, está apoiada sobre dois outros containers. A parte de trás da oficina está totalmente repousada sobre o container da cozinha do CTS, e a frente se apoia sobre o container ocupado pelo “colaborativo” Paulestinos, formado por dois artistas plásticos que trabalham com imagem e poesia sobre lambe-lambe. Na imagem abaixo, Dona Carmen caminha em direção a câmera, enquanto ao fundo e à esquerda, Edmara corta, com o auxílio da travesti Fani, 25 anos, tecido de moletom proveniente de um grande rolo, colocado do outro lado da mesa de corte. O container dos Paulestinos está com a porta frontal, aquela virada para a cozinha do CTS, aberta, assim como a porta lateral, que havia sido feita dias antes dessa fotografia; as pinturas que decoram o container são os lambe-lambe produzidos pela dupla e impressos numa máquina plotter, instalada em seu interior.

Figura 3



Fonte: página dos Paulestinos no Facebook. <https://www.facebook.com/557141114327460/photos/a.3014817081893172/5901061383268713/>

Os Paulestinos não são a única iniciativa artística com quem o CTS se relaciona. Desde meados de 2020, dezenas de artistas somaram esforços na arrecadação de fundos emergenciais para enfrentamento dos efeitos mais duros da pandemia da COVID-19 sobre a Cracolândia. Reunidos em torno do que passou a se chamar Birico buscaram comercializar obras de arte pela internet, a preços módicos, no intuito de fazer caixa para auxiliar financeiramente pessoas do território. Metade do valor angariado foi dividido entre os próprios artistas, a outra serviu para auxiliar pessoas do local, próximas aos artistas, que necessitavam sair da situação de rua; iniciativas de redução de danos, como a distribuição de piteiras de silicone aos usuários de crack; e também para adquirir os containers que abrigam o CTS.

A participação no Coletivo e o consumo do crack e álcool

Uma mulher participar do CTS significa interagir com outras em um ambiente de trabalho, assim não é permitido chegar “colocada” de manhã cedo para trabalhar, seja pelo uso do crack ou do álcool. Veremos cinco casos que ilustram essa característica do trabalho no Coletivo.

O primeiro é de Vaninha, uma mulher cisgênero com cerca de 30 anos de idade que habitava o “fluxo”. Vaninha deixou de comparecer ao trabalho por dias seguidos e era vista na Cracolândia, abrigada em malocas, na companhia de homens, usando crack e álcool. Logo que Dona Carmen fez as mudanças, no início de nossa etnografia, voltando o CTS mais ao trabalho e à geração de renda, Vaninha foi afastada. A justificativa dada foi que não seria mais possível permanecer no Coletivo sem ser capaz de cumprir horários e trabalhar. Nas palavras da técnica Maura, 50 anos, vemos que o consumo do álcool é apontado como principal causador do absenteísmo:

Não é nem porque ela perdeu o lugar para morar. Ela não estava conseguindo vir pra cá. Quando ela bebe demais, ela chegava a ficar 3, 4 dias fora daqui; uma semana e não dá. A Edmara veio no mesmo esquema (com lugar para morar, mas tendo perdido em seguida e ficando na rua) e a Edmara está aqui. Ela (Vaninha) poderia ter continuado aqui, só que não deu. Quando ela bebe é estrago, ela não dá conta.

Mesmo sem saber costurar, o trabalho de Vaninha e seu compromisso com o CTS é reconhecido por Maura. O motivo de seu afastamento não está ligado diretamente ao cumprimento de tarefas, habilidade ou comportamento.

Ela (Vaninha) é o tipo de pessoa que mesmo não sabendo costurar, quando pede alguma coisa ela pega e faz. Não fica questionando. Quando ela termina de fazer, ela volta e pergunta se tem mais alguma coisa pra fazer. Ela tem iniciativa, tem boa vontade. Mas não deu pra segurar.

O segundo caso é o de Ana Moranah, travesti, 23 anos, que deixou de frequentar o Coletivo. Embora tivesse experiência prévia com costura não demonstrou interesse em cumprir os horários e tarefas cotidianas na oficina de costura e desistiu de comparecer, preferindo permanecer no “fluxo” fazendo uso de crack.

O terceiro caso é da travesti Valéria, 34 anos, que para enfrentar o frio e perigos do trabalho como prostituta fazia uso de álcool, chegando a comparecer no Coletivo “colocada” e a ser desligada, para no dia seguinte voltar a se apresentar para o trabalho e ser readmitida. Valéria não possuía habilidades de costura, mesmo assim quis permanecer e desempenhar atividades mais simples ligadas a reforma de roupas doadas.

O quarto é de Yara, travesti com 29 anos de idade que dormia nas proximidades da praça da Luz, um pouco afastada do “fluxo”. Yara possuía experiência com costura e gostava de trabalhar no Coletivo, dormia com seu companheiro em uma maloca, como são chamadas as moradias improvisadas nas calçadas de São Paulo. Yasmim “se colocava” usando crack, mas apenas nos finais de semana para não atrapalhar sua rotina de trabalho.

O quinto e último caso é de Edmara, mulher cisgênero com 34 anos, que havia perdido seu quarto em uma pensão na região da Cracolândia e estava residindo em uma maloca na praça Princesa Isabel. Edmara prosseguia fazendo uso do crack regularmente, sem ter muitos problemas com absenteísmo. Sofria, por vezes, violência física de seu companheiro, com quem dividia seus aposentos acompanhada pela filha de 10 anos de idade. A criança frequentava o CTS em bases diárias e após o término de nossa etnografia, mãe e filha voltaram a morar numa pensão próxima a Cracolândia, com o aluguel pago por um dos dois participantes do Paulestinos; e com dinheiro proveniente do Birico, do qual a dupla faz parte.

Não era apenas pelo desempenho no trabalho que as meninas poderiam permanecer ou não no CTS, mas também pela preocupação com a manutenção de um ambiente propício à boa convivência. As declarações da técnica Maura reproduzidas abaixo discorrem sobre as dificuldades em lidar com a “colocação”, ato de beber e consumir drogas, antes de chegar no Coletivo.

Ela (Vaninha) fica fora uma semana, dez dias, com um monte de gente querendo vir pra cá; e também não é justo com quem está aqui. Se for ver a grande maioria que está aqui tem problema com vício também.

(Quando alguém aparece colocada) acaba acionando vários gatilhos nas pessoas. E a gente tem que administrar isso, tentar segurar a onda de quem está colocada, mandar voltar. Você entendeu, tirar daqui de dentro. As outras ficam olhando toda aquela situação.

Ao concluirmos a redação desse artigo Vaninha havia sido reincorporada ao CTS. Além dela, chegamos a manter interlocução com uma travesti que não se envolvia nas atividades de costura, mas frequentava regularmente o Coletivo e chegava constantemente “colocada”. Enrica, 31 anos, consumia álcool, gritava e fazia ameaças, causando preocupação e até algum temor nas técnicas e em algumas das meninas. No momento em que escrevemos esse artigo, Enrica também permanece frequentando o Coletivo.

Discussão

Nessa seção apresentamos os achados tidos como mais relevantes em nossa pesquisa, para que a possamos avalia-la criticamente em suas limitações e aspectos positivos; em seguida procuramos comparar nosso trabalho com a literatura, e passamos à interpretação de nossos achados.

Localizado próximo ao “fluxo”, o CTS provê às mulheres cis e transgênero que dele participam um cotidiano estruturado em torno de atividades rotineiras: chegar em certo horário; fazer e tomar café da manhã conversando; trabalhar na costura; preparar e distribuir as refeições para a população de rua; almoçar e descansar; retorno ao trabalho, café da tarde e despedida. Dada a complexidade dos equipamentos de costura nem todas as mulheres, ou meninas como são chamadas no dia a dia, operam as máquinas reta, overloque e galoneira, que possuem graus diferentes de dificuldade de operação. Há, portanto, um viés de aprendizado, uma expectativa de aprender uma profissão no ramo da costura, tanto porque o CTS não possui meios de pagar uma bolsa mensal para as meninas. Ao aprendizado se soma a criatividade requerida pelo tipo de trabalho ali desenvolvido. Como o Coletivo vive de doações de retalhos e peças danificadas acabou por gerar um estilo próprio de vestimenta e acessórios: as camisetas de retalhos; as peças reformadas; os moletons com detalhes; e as sacolas coloridas. O imperativo de aproveitar ao máximo os retalhos leva ao corte de pedaços de tamanhos e formatos diferentes uns dos outros, nenhuma peça é idêntica a outra.

A produção de vestuário não ocorre alheia a Cracolândia, mas de certa forma integrada à região. Por se localizar no terreno do Teatro Mungunzá, o CTS se responsabilizou pela distribuição de 400 marmitas diárias, oriundas de contrato do teatro com a prefeitura. As meninas têm, portanto, contato diário com as pessoas vulneráveis que se valem desse serviço para terem acesso a alimentação. O Coletivo também se vale dos serviços de manutenção das máquinas e de aprendizado na costura fornecidos por membros da comunidade boliviana, presente no território. O terreno utilizado pelo teatro também abriga o “colaborativo” Paulestinos, formado por dois artistas plásticos que trabalham com imagem e poesia sobre

lambe-lambe; que também atuam no Birico, onde buscam comercializar obras de arte pela internet, no intuito de auxiliar financeiramente pessoas do território, inclusive do Coletivo.

Por trabalhar em um coletivo voltado à geração de renda, estar em contato com pessoas vulneráveis e também com artistas locais e outras pessoas não necessariamente envolvidas com o consumo de crack, como os bolivianos e os artistas, as mulheres não podem chegar “colocadas” para trabalhar. Há uma preocupação por parte da assistente social que coordena o Coletivo e das outras três mulheres, ou técnicas, que a auxiliam em manter um ambiente propício à boa convivência.

Os relatos colhidos durante nossa etnografia nos permitiram descrever muito brevemente algumas das atividades desenvolvidas no CTS, como o corte, a costura e a distribuição de marmitas; dar uma ideia do cotidiano vivido por aquelas mulheres; alguns valores compartilhados como a assiduidade e boa convivência. O fato do pesquisador ser homem cisgênero, heterossexual, casado e com idade igual a da técnica mais velha do Coletivo certamente enquadrou os assuntos que poderiam ser tratados por aquelas mulheres com um etnógrafo com essas características. O tempo de imersão no campo de um mês também não permitiu verificar as possíveis sazonalidades, dadas, por exemplo, pelas diferentes estações do ano e o vestuário correspondente. Mesmo assim, pelo que dizem nossas interlocutoras, o material por nós colhido é até o momento o mais vasto entre as pesquisas acadêmicas desenvolvidas naquele local.

O CTS se encontra imerso entre as conexões (Frúgoli Jr e Cavalcanti, 2013) existentes na Cracolândia, território que atrai (Rui, 2014), nesse caso, técnico e professora boliviana, artistas, doações e pessoas em vulnerabilidade na hora do “rango”. As meninas consomem marmita e fabricam roupas como parte de sua própria estratégia cotidiana de sobrevivência, como fazem outros naquele território (Fromm, 2017); ao mesmo tempo em que essas mulheres estabelecem relações entre si (Alves e Pereira, 2021), de ajuda mútua, de trabalho e conversa, o que torna o espaço do Coletivo habitável.

Se o CTS está imerso nas conexões existentes na Cracolândia é porque se abre para fora, distribui alimentos e cobertores para as pessoas vulneráveis do território que atrai (Rui, 2014), além de máscaras (Nogueira, 2021), produzidas pelo próprio coletivo; e essa produção obriga voltar-se para dentro. O movimento para dentro faz com que em seu interior ocorram dois movimentos importantes: 1) novos vínculos sejam formados; e 2) parcela do mundo externo é deixada do lado de fora. O Coletivo se torna um espaço protegido da droga que oferece qualificação profissional através das atividades que desenvolve em torno da costura, como no caso das máscaras; lembrando com Almeida, Santos, Brito, Silva e Nappo (2018) que espaço

protegido e qualificação profissional podem estar ligados ao sucesso no abandono do consumo prejudicial de crack.

Participar do CTS é estar sujeita a valores e regras de conduta, sanções sociais nos termos de Zinberg (1984), que definem se e como uma droga em particular deve ser usada. A máxima “tirar daqui de dentro quem está colocada”, que podemos inferir da fala da técnica Maura, impõe um freio ao consumo de crack e álcool por parte das meninas. Nesse sentido, a rotina de atividades narradas no artigo, que preenchem o cotidiano com atividades voltadas às pessoas do entorno do Coletivo, como a distribuição de marmitas; os diferentes tipos de trabalho no corte e costura; as conversas e momentos de descontração estruturam a vida daquelas mulheres (Grund, 1993), o que também pode contribuir para o autocontrole do uso de crack e álcool. No CTS, chegar colocada para trabalhar, como no caso de Valéria, ou sob efeito de álcool para apenas conversar, como fazia Enrica, constitui evento relevante, atrai a atenção (Goffman e McGinnis, 1961) das outras meninas e obriga a tomada de atitude por parte das técnicas; a pessoa é admoestada e até afastada, podendo chegar até a situação vivida por Yara que reservou os finais de semana para se colocar. Yara seria, portanto, um exemplo de sucesso no trato do CTS com o consumo de crack, mas o caso de Valéria também nos chama particularmente a atenção. Para escapar da prostituição, Valéria, mesmo sem qualquer habilidade em costura e tendo lapsos de consumo de álcool, era dirigida para trabalhos de reconfiguração (Sennett, 2019) de roupas doadas, através do acréscimo de lantejoulas e retalhos. Sua busca por autonomia fora da prostituição parece ser reconhecida e recompensada.

Conclusão

Podemos afirmar que, segundo os resultados obtidos em nossa etnografia, para as mulheres cis e transgênero em situação de vulnerabilidade com quem tivemos interlocução, participar do Coletivo Tem Sentimento proporciona um cotidiano estruturado em torno de atividades de trabalho e descanso, no interior de um ambiente avesso à permanência de pessoas sob efeito de crack e álcool; o que pode ter influência positiva no controle do uso dessas substâncias, fazendo com que esse uso possa ser enquadrado em momentos que não atrapalhem a presença no Coletivo, como nos finais de semana.

Os resultados obtidos na pesquisa não permitem sua generalização para outras mulheres cis e transgênero nem para outras iniciativas voltadas à geração de renda, mas sugerem a importância de estudos mais profundos.

Referências

- Almeida, R. B. F. D., Santos, N. T. V., Brito, A. M. D., Silva, K. S. D. B., e Nappo, S. A. (2018). O tratamento da dependência na perspectiva das pessoas que fazem uso de crack. *Interface-Comunicação, Saúde, Educação*, 22, 745-756.
- Alves, Y. D. D., e Pereira, P. P. G. (2019). *Sob fogo cruzado: antecedentes, construção e desmonte do programa De Braços Abertos na Cracolândia paulistana*. Salvador: EDUFBA.
- Alves, Y. D. D., e Pereira, P. P. G. (2020). Da guerra às drogas à guerra ao vírus: necropolítica e resistência na Cracolândia. *Cadernos de Campo (São Paulo-1991)*, 29(supl), 319-328.
- Alves, Y. D. D., e Pereira, P. P. G. (2021). Interações, trilhas e caminhos de uma cidade em fluxo: etnografia na Cracolândia. *Revista de Antropologia*, 64(1). <https://doi.org/10.11606/1678-9857.ra.2021.184481>
- Alves, Y. D. D., Pereira, P. P. G., e De Freitas Silva, E. (2020). Aspectos relevantes da cultura do crack para a transmissão da COVID-19 entre consumidores da droga e possíveis meios de prevenção. *Capim Dourado: Diálogos em Extensão*, 3(2), 101-127.
- Amorim, S. M. G., Vieira, F. de S., e Brancaloni, A. P. (2013). Percepções acerca da condição de vida e vulnerabilidade à saúde de travestis. *Saúde em Debate*, 37, 525-535.
- Antunes, P. P. S. (2011). Quais condições de moradia algumas travestis têm encontrado ao longo da vida? *Revista Longevidade*, (16), 38-54.
- Butler, J. (2006). *Deshacer el género*. Barcelona: Paidós.
- Carnevale, M. F. (2021). *Vizinhança: a palavra como território de coexistência*. (Dissertação de Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo).
- Cymbalista, R. (2007). A comunidade boliviana em São Paulo: definindo padrões de territorialidade. *Cadernos Metrópole*, (17), 119-133.
- De Souza, E. K. (2010). Quando algumas travestis esbarram na dependência química: caminhos e espaços para o tratamento. Seminário Internacional Fazendo Gênero, 9. Diásporas, Diversidades, Deslocamentos. *Anais...* Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina.
- De Souza, M. H. T., Signorelli, M., Martin, D., e Pereira, P. P. G. (2014). Itinerários terapêuticos de travestis da região central do Rio Grande do Sul, Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, 19, 2277-2286.
- Ferreira Jr, S., Francisco, P. M. S. B., e Nogueira, P. A. (2016). Perfil de travestis e transgêneros: tuberculose e HIV/AIDS na cidade de São Paulo. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 40, 410-417.
- Fromm, D. (2017). Percursos e refúgios urbanos. Notas sobre a circulação de usuários de crack pela trama institucional da Cracolândia de São Paulo. *Ponto Urbe. Revista do Núcleo de Antropologia Urbana da USP*, (21), 1-15. <https://doi.org/10.4000/pontourbe.3604>
- Frúgoli Jr, H., e Cavalcanti, M. (2013). Territorialidades da(s) cracolândia(s) em São Paulo e no Rio de Janeiro. *Anuário Antropológico*, 38(2), 73-97.
- Garcia, M. R. V. (2007). *Dragões: gênero, corpo, trabalho e violência na formação da identidade entre travestis de baixa renda*. (Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo).
- Garcia, M. R. V. (2008). Prostituição e atividades ilícitas entre travestis de baixa renda. *Cadernos de Psicologia Social do Trabalho*, 11(2), 241-256.
- Goffman, E., e Mcginnis, R. (1961). *Encounters: two studies in the sociology of interaction*. Indianápolis: The Bobbs-Merrill.
- Grinnell, R. M. (1997). *Social work research & evaluation: quantitative and qualitative approaches*. Itasca: E. E. Peacock Publishers.
- Grund, J.-P. C. (1993). *Drug use as a social Ritual: Functionality, symbolism and determinants of self-regulation*. Rotterdam: Institute Voor Verslavingsonderzoek, Erasmus Universiteit.

- Jacopini, J. R. (2021). Teatro Horizontal: íntima atração ética e estética. *Pitágoras* 500, 11(1), 101-113.
- Lima, L. S. (2021). *As mulheres “do” fluxo: um estudo etnográfico na Cracolândia*. (Dissertação de Mestrado em Saúde Coletiva, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo).
- Lofland, J., e Lofland, L. H. (1995). *Analyzing social settings: a guide to qualitative observation and analysis*. Belmont: Wadsworth Publishing-University of California.
- Macrae, E., e Vidal, S. S. (2006). A Resolução 196/96 e a imposição do modelo biomédico na pesquisa social: dilemas éticos e metodológicos do antropólogo pesquisando o uso de substâncias psicoativas. *Revista de Antropologia*, 49(2), 645-666.
- Malheiro, L. S. B. (2019). *Tornar-se mulher usuária de crack: trajetória de vida, cultura de uso e políticas sobre drogas no centro de Salvador-BA*. (Dissertação de Mestrado, Universidade Federal da Bahia, Salvador de Bahia).
- Marangoni, S. R., e De Oliveira, M. L. F. (2012). Uso de crack por múltipara em vulnerabilidade social: história de vida. *Ciência, Cuidado e Saúde*, 11(1), 166-172.
- Martins, R. C. R. (2021). *Fazer nada? como dispositivo de intervenção clínica e política em territórios*. (Dissertação de Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo).
- Medeiros, K. T., Maciel, S. C., Sousa, P. F. D., e Vieira, G. L. S. (2015). Vivências e representações sobre o crack: um estudo com mulheres usuárias. *Psico-USF*, 20, 517-528.
- Miskolci, R., e Pelúcio, L. (2007). Fora do sujeito e fora do lugar: reflexões sobre performatividade a partir de uma etnografia entre travestis. *Revista Gênero*, 7(2), 257-269.
- Nasser, M. M. S. (2018). Entre a ameaça e a proteção: categorias, práticas e efeitos de uma política de inclusão na Cracolândia de São Paulo. *Horizontes Antropológicos*, 24, 243-270.
- Nogueira, P. V. D. F. (2021). *Profissionais da saúde e militantes na Cracolândia paulistana: uma etnografia*. (Dissertação de Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo).
- Oliveira, R. C. de. (1996). O trabalho do Antropólogo: olhar, ouvir, escrever. *Revista de Antropologia*, 39(1), 13-37.
- Passos, A. D. C., e Figueiredo, J. F. de C. (2004). Fatores de risco para doenças sexualmente transmissíveis entre prostitutas e travestis de Ribeirão Preto (SP), Brasil. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 16(2), 95-101.
- Pereira, P. P. G. (2015). Queer decolonial: quando as teorias viajam. *Contemporânea-Revista de Sociologia da UFSCar*, 5(2), 411-411.
- Ramos, L. G. (2020). *Musealidade e Território: uma metodologia de curadoria colaborativa para o Memorial da Resistência de São Paulo*. (Dissertação de Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo).
- Rui, T. (2014). Usos da “Luz” e da “cracolândia”: etnografia de práticas espaciais. *Saúde e Sociedade*, 23, 91-104.
- Sennett, R. (2019). *Juntos: os rituais, os prazeres e a política da cooperação*. Rio de Janeiro: Editora Record.
- Serafino, I., e Luz, L. C. X. (2015). Políticas para a população adulta em situação de rua: questões para debate. *Revista Katálysis*, 18(1), 74-85.
- Silva, S. L. D. (2000). *Mulheres da Luz: uma etnografia dos usos e preservação no uso do crack*. (Dissertação de Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo).
- Zinberg, N. E. (1984). *Drug, Set and Setting: The Basis for Controlled Intoxicant Use*. Londres: Yale University Press.

NO MEIO DA PANDEMIA TINHA UMA PEDRA? UMA ANÁLISE DAS POLÍTICAS PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO CONTEXTO PANDÊMICO BRASILEIRO

EN MEDIO DE LA PANDEMIA, ¿HUBO UNA PIEDRA? UN ANÁLISIS DE LAS
POLÍTICAS PARA LA POBLACIÓN EN LAS CALLES EN EL CONTEXTO DE LA
PANDEMIA BRASILEÑA

IN THE MIDDLE OF THE PANDEMIC, THERE WAS A ROCK? AN ANALYSIS
OF POLICIES FOR THE HOMELESS PEOPLE IN THE BRAZILIAN PANDEMIC
CONTEXT

Kíssila Teixeira Mendes

*Doutoranda em Psicologia na Universidade Federal de Juiz de Fora. Professora na UniAcademia.
kissilamm@hotmail.com*

Pedro Henrique Antunes da Costa

*Professor na Universidade de Brasília (UnB), Brasil.
phantunes.costa@gmail.com.*

Recibido: 28/3/2022 | Aceptado: 13/9/2022

Resumo: No artigo, analisamos as principais mudanças durante a pandemia nas políticas orientadas ao cuidado à população em situação de rua (PSR) com necessidades decorrentes do consumo de drogas no Brasil. Trata-se de uma pesquisa documental, de abordagem qualitativa nos seguintes documentos estatais: Nota Técnica 13/2020; Portaria 64/2020; Resolução 40/2020; e cartilha “Atendimento e Acolhimento Emergencial à população em situação de rua no contexto da pandemia da COVID-19”. Os resultados foram organizados em torno dos fundamentos e horizontes do cuidado à PSR e, sobretudo, do recrudescimento dos processos de segregação, manicomialização e mercantilização, de caráter classista e racista, sintetizados na existência e centralidade das Comunidades Terapêuticas nas referidas políticas. Apesar das contradições, frutos da luta de classes e expressas em resistências e elaborações progressistas, constatamos que nem a pandemia foi capaz de frear o *modus operandi* higienista-segregatório à PSR no Brasil. Pelo contrário, sob argumentos de se retirar certas pedras do caminho, retiraram os sujeitos (tornados coisas, objetos), demonstrando quem, de fato, são os obstáculos indesejáveis.

Palavras-chave: população em situação de rua; drogas; políticas; pandemia; Brasil.

Resumen: En el artículo analizamos los principales cambios durante la pandemia en las políticas orientadas a la atención de la población en las calles (PSR) con necesidades derivadas del consumo de drogas en Brasil. Es una investigación documental, con enfoque cualitativo en los siguientes documentos estatales: Nota Técnica 13/2020; Ordenanza 64/2020; Resolución 40/2020; y cuadernillo «Atención y Acogida en Emergencias a la población sin hogar en el contexto de la pandemia del covid-19». Los resultados se organizaron en torno a los fundamentos y horizontes de la atención de la PSR y, sobre todo, al recrudescimiento de los procesos de segregación, asilo y mercantilización, de carácter clasista y racista, sintetizados en la existencia y centralidad de las Comunidades Terapéuticas en las citadas políticas. A pesar de contradicciones, fruto de la lucha de clases y expresadas en resistencias y elaboraciones progresistas, encontramos que ni la pandemia pudo detener el *modus operandi* higienista-segregador de la PSR en Brasil. Por el contrario, bajo el argumento de quitar ciertas piedras del camino, quitaron los sujetos (convertidos en cosas, objetos), demostrando quiénes, en realidad, son los obstáculos indeseables.

Palabras clave: población en las calles; drogas; políticas; pandemia; Brasil.

Abstract: In the article, we analyze the main changes during the pandemic in policies oriented to the care of homeless people (PSR) with needs arising from drug consumption in Brazil. This is documentary research, with a qualitative approach in the following state documents: Technical Note 13/2020; Ordinance 64/2020; Resolution 40/2020; and booklet “Emergency Assistance and Reception for the homeless population in the context of the Covid-19 pandemic”. The results were organized around the foundations and horizons of PSR care and, above all, the resurgence of segregation, asylum and commercialization processes, of a classist and racist character, synthesized in the existence and centrality of Therapeutic Communities in the aforementioned policies. Despite some contradictions, results of class struggle and expressed in resistance and progressive developments, we found that not even a pandemic was able to stop the hygienist-segregator *modus operandi* for PSR in Brazil. On the contrary, under the argument of removing certain stones from the path, they removed the subjects (turned into things, objects), demonstrating who, in fact, are the undesirable obstacles.

Keywords: homeless people; drugs; policies; pandemic; Brazil.

Introdução

A pandemia do coronavírus e sua conseqüente crise sanitária acarretaram um escancaramento dos contornos das crises econômica e política, que, por sua vez, estão conformadas pela crise estrutural do capital em seu atual estágio de desenvolvimento. Nesta conjuntura de crise(s), se considerarmos que a população em situação de rua (PSR) é uma “expressão radical da questão social contemporânea” (Silva, 2006, p. 83), podemos afirmar que houve também um recrudescimento numérico e qualitativo desta população, bem como, por suas características evidentes, ela estava e está mais exposta ao vírus e à mortalidade. Embora uma simples passada por qualquer centro urbano já confirme o aumento da PSR, faltam dados dos impactos da pandemia sobre tal realidade e nesta população (como, por exemplo, o número de infectados e de óbitos), escancarando a falta de políticas públicas para a PSR e, numa perversa complementação, trazendo mais empecilhos para se pensar em políticas públicas de saúde e de proteção social durante e após a pandemia.

Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2020) estimam que, entre fevereiro e março de 2020, momento de eclosão da pandemia, havia 221 mil pessoas em situação de rua no Brasil. Durante a pandemia, pesquisas locais deram conta desse contingente populacional. De acordo com o censo realizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro durante 2020, com dados coletados nas ruas, casas de uso, hospitais, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Unidades de Acolhimento e Comunidades Terapêuticas (CTS), 31% das pessoas estavam na rua há menos de um ano, sendo 64% por perda de trabalho, moradia ou renda. Além disso, houve um crescimento significativo de mulheres em situação de rua.

Em São Paulo, o censo realizado pela prefeitura entre outubro e novembro de 2021 também constatou o crescimento da PSR na capital: em dois anos, o aumento foi de 31%. Atualmente, há 31.884 pessoas vivendo nas ruas da cidade; em 2019 eram 24.344. Também não há uma mudança significativa do perfil em relação às pesquisas anteriores: há prevalência do sexo masculino (83,4%), maior percentual na faixa etária entre 31 e 49 e com 70,8% parda ou preta. No entanto, há um aumento quantitativo importante, fazendo com que hoje em São Paulo haja 257 pessoas em situação de rua por cada 100 mil habitantes (São Paulo, 2021).

Apresentados os dados, no presente artigo, analisamos as principais mudanças durante a pandemia nas políticas orientadas ao cuidado da PSR com necessidades decorrentes do consumo de drogas no Brasil. Para tal, refletir sobre a PSR para além da pandemia se faz importante como forma de balizar uma elucidação sobre as condições que a tem enquanto segmento populacional pauperizado e subalternizado, e para chegarmos a alguns porquês sobre as políticas a ela destinadas na contemporaneidade e suas contradições. Entre essas

condições, podemos destacar a pobreza extrema, a fragilização de vínculos familiares como materializações de problemas econômicos e fatores ligados à história de vida, como desavenças, preconceitos e intolerância, e a não existência de moradia convencional, sendo a rua o local de moradia e/ou sustento (Mendes, Ronzani e Paiva, 2019). Além disso, trata-se de uma característica da estrutura do capitalismo, para onde são conduzidas parcelas da classe trabalhadora enquanto superpopulação relativa e exército industrial de reserva, desde os seus primórdios, sendo fruto da situação de escassez e degradação do/pelo trabalho alienado e exploratório.

Assim, embora pesquisas de cunho censitário e estatístico sejam importantes, é primordial caracterizar as dimensões e a historicidade do fenômeno da PSR no Brasil e no mundo, fundamentalmente por ser um elemento complementar à compreensão da pobreza nas sociedades capitalistas. Entretanto, a existência de pessoas itinerantes data desde a Antiguidade, por conta do crescimento de cidades e de desapropriações de terras. Desde então, essa população é vista como contraventora e perturbadora da ordem social. Na Idade Média, as denominações de mendigos e vagabundos também descrevem tal população itinerante, cujas obras de caridade ligadas à Igreja Católica já atendiam.

É com o início da industrialização, porém, que o fenômeno vai se delinear melhor. O contingente de mão de obra decorrente da separação entre trabalhador e meio de produção e das expropriações de terra não foi absorvida tão rapidamente pela ainda nascente indústria ou não se adaptava a ela, dando início ao circunstancial processo de pauperismo que se generalizou na Europa em desenvolvimento capitalista. Essas pessoas eram definidas como mendigos, ladrões e vagabundos, o que originou também rígidas leis e instituições disciplinares, em que o Estado administrava as contradições histórico-estruturais geradas no próprio seio do desenvolvimento capitalista. Além disso, as leis anti-vadiagem tinham o intuito de restringir o direito à cidade e forçar que esse contingente aceitasse trabalhos sub-remunerados e não se deslocassem, gerando um grande exército de reserva. A PSR se localiza nesse exército de reserva, mais precisamente em sua forma estagnada, que possui grandes jornadas de trabalho sem que, portanto, tenha proteção social ou algum tipo de seguridade.

No Brasil, a expansão urbana e do capital, a migração para as cidades, a desapropriação de grandes moradias populares, como os cortiços, levam à conclusão de que a falta de trabalho e habitação para todos conduziu a um aumento da PSR nesse período. Os estudos sobre o tema, porém, crescem somente na década de 1990, quando os impactos neoliberais dão outros contornos para a PSR. Não por acaso, o período de 1990 no país possui semelhanças com as mudanças no capitalismo já ocorridas em nível mundial a partir da segunda metade de 1970. E é em meados dos anos 1990 e, sobretudo, pós anos 2000, que surgem os primeiros

esforços em quantificar e elaborar políticas destinadas à PSR no país. Em 2005, há uma responsabilização do Estado Brasileiro, e passa a constar na Política Nacional de Assistência Social, pela Lei nº 11.258/05 (Brasil, 2005), a obrigatoriedade de as políticas de assistência criarem programas direcionados à PSR. A Política Nacional para a População em Situação de Rua (Brasil, 2009) é criada em 2009 e define a PSR como grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, a inexistência de moradia convencional regular, utilizando os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória (Brasil, 2009). Fica evidente o papel central do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), enquanto regulador dos serviços de acolhimento e proteção social, e dos municípios, que são responsáveis pela estruturação dos serviços e dados censitários da PSR local. Seus objetivos são: assegurar o acesso aos serviços e às políticas públicas, instituir a contagem oficial da PSR, com produção de dados sobre a rede de assistência a essa população, incentivo à pesquisa sobre a PSR, implementação dos centros de defesa dos direitos humanos para a PSR e dos centros de referências especializados vinculados à proteção especial do SUAS, articular o Sistema Único de Saúde (SUS) e o SUAS, criar padrões básicos de qualidade dos serviços, implementar ações de segurança alimentar e oferecer programas de qualificação profissional para a PSR (Brasil, 2009).

Assim, no âmbito das políticas públicas, a PSR foi assumida primeiramente como responsabilidade da assistência social. Cabe ressaltar que tal processo se dá no bojo da correlação de forças e luta de classes, não sendo mera benesse ou movimento espontâneo do Estado. Nisso, ela “chega” à área da saúde a partir de intervenções focalizadas no uso de drogas que, a despeito de exemplos pioneiros e importantes, como a experiência do Consultório de Rua de Salvador nos anos 1990, majoritariamente, faziam uma relação errônea e simbiótica entre PSR e consumo de drogas. Em âmbito nacional, os Consultórios de Rua foram fortalecidos e expandidos como política pública de caráter nacional através do Plano Emergencial de Ampliação do Acesso ao tratamento e Prevenção em Álcool e outras Drogas, não sem algumas contradições, e em 2012 surge uma nova modalidade de serviço: os Consultórios na Rua, onde as equipes voltadas para a PSR passam a ser vinculadas ao Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Além do nome, mudam também as ações, agora voltadas para o acesso à atenção primária à saúde e não somente com questões relacionadas à saúde mental e ao uso de drogas. Porém, a associação PSR/droga permanece hegemônica.

Tais decisões são fruto de decisões políticas e resultados de lutas históricas, reverberando também nos movimentos e concepções históricas de cada período. Tomemos o crack como exemplo. Embora surgido no final dos anos 1980 na periferia de São Paulo atrela-se a inúmeras ações locais nos anos 90 quando “surge” no centro da cidade. Somente nos anos 2000, mais precisamente em maio de 2010, que é criado por decreto o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas (Brasil, 2010), cujo objetivo, embora tenha trazido avanços na tentativa de articular as áreas de saúde, educação e assistência social, já é compreendido no verbo que consta em seu próprio título: “enfrentamento”, mistificando que não se enfrentam drogas, se enfrentam pessoas que consomem drogas. Na campanha presidencial de 2014, contudo, é que o “combate ao crack” ganha destaque alinhado ao discurso de limpeza urbana necessária - junto à gentrificação e revalorização dos centros urbanos - aos eventos internacionais ocorridos no Brasil, como a Copa do Mundo de Futebol, em 2014, e as Olimpíadas do Rio em 2016. A “cracolândia”, então, passa a ser o “grande centro da questão social brasileira contemporânea” (Rui, 2013, p. 288).

Embora a “cracolândia” seja composta de uma territorialidade itinerante e campo de relações mutáveis, as ações governamentais possuem um foco específico, que é a região da Luz. Entre 2012 e 2013 operações estatais com foco na retomada do território via internações compulsórias ganharam espaço na mídia nacional. Nesses locais de uso, a compreensão do fenômeno passa para uma concepção moral, onde o crack é o grande corruptor das pessoas, cabendo ao Estado agir compulsoriamente sobre elas e tirando a autonomia do sujeito. Assim, há uma relação fetichista, onde o crack se torna o sujeito da ação e as pessoas que o consomem viram mercadorias, objetos. Embora deva ser considerado como uma questão de saúde pública relevante, há a necessidade de a droga, por si própria, não ser o ponto principal de análise, pois ela é um desafio entre tantos outros encontrados na rua (Mendes, Ronzani e Paiva, 2019). Tal constatação nos remete ao objetivo deste artigo ao atualizarmos como, na pandemia, as concepções e ações estatais sobre o consumo de drogas atualizam ou retrocedem tais debates históricos sobre a PSR.

Método

Trata-se de uma pesquisa documental. Segundo Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009, p. 5) é “um procedimento que se utiliza de métodos e técnicas para a apreensão, compreensão e análise de documentos dos mais variados tipos”, recorrendo a “materiais que ainda não receberam tratamento analítico, ou seja, as fontes primárias” (p. 6). Foram analisados os seguintes documentos: Nota Técnica nº 13/2020 (Brasil, 2020a); Portaria nº 64/2020 (Brasil, 2020a); Resolução nº 40/2020 (Brasil, 2020b); e cartilha “Atendimento e Acolhimento

Emergencial à população em situação de rua no contexto da pandemia da Covid-19 - Informações e Recomendações” (Brasil, 2020c).

Os quatro são documentos estatais que sintetizam e expressam as atuais concepções e condução política do cuidado à PSR no país com necessidades decorrentes do consumo de drogas. Dialeticamente, é na/pela mediação de tais documentos que tais políticas são concretizadas na prática. Ao terem naturezas formais diferentes (nota técnica, portaria e resolução), constituem um arcabouço estatal não só normativo, regulador, mas também orientador das ações.

Para chegarmos até eles, realizamos um processo de busca em sites e bases de dados ministeriais do governo de Jair Bolsonaro, a saber: Ministérios da Saúde, da Cidadania, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Também realizamos buscas no Diário Oficial da União, utilizando termos correlatos à *população em situação de rua*. O recorte temporal foi de março de 2020 a fevereiro de 2022.

O tratamento e análise dos dados ocorreu conforme apontamentos de Gomes (2011) sobre Análise de Conteúdo temática. As seguintes etapas foram conduzidas: (a) pré-análise, com organização e leitura flutuante do material; (b) exploração do material, que consistiu na definição das unidades de análise (os temas), de contexto (como estes expressam a conjuntura social, econômica, política e suas especificidades no campo aqui estudado) e início da categorização; e (c) tratamento e interpretação dos resultados, com refinamento do processo de categorização, expansão da síntese na forma de texto corrido e discussão a partir do diálogo com a literatura e referencial teórico. Enquanto documentos políticos, estes não podem (e não foram) analisados de maneira ensimesmada, mas expressando e conformando a correlação de forças na área, bem como circunscritos a uma totalidade que os tem enquanto manifestação, ao mesmo tempo que é produzida neles/por eles.

Resultados e Discussão

Na Tabela 1, apresentamos uma breve descrição dos documentos analisados e seus conteúdos. Como é possível observar, as iniciativas são de caráter interministerial (intersetoriais), gerenciadas pelo Ministério da Cidadania (MC), responsável pelas políticas de assistência social e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), que, em decorrência da pauta dos direitos humanos, também possui incidência nas políticas voltadas à PSR.

Tabela 1: Documentos analisados

Documento	Órgãos
Portaria nº 69, de 14 de maio de 2020	Ministério da Cidadania, Secretaria Especial do Desenvolvimento Social/Secretaria Nacional de Assistência Social
Nota Técnica nº 13, de 14 de maio de 2020	Ministério da Cidadania
Resolução nº 40, de 13 de outubro de 2020	Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Conselho Nacional dos Direitos Humanos
Atendimento e Acolhimento Emergencial à população em situação de rua no contexto da pandemia da Covid-19 - Informações e Recomendações	Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Secretaria Nacional de Proteção Global do MMFDH

Fonte: Autores

Uma ressalva é que a Nota Técnica 13/2020 foi inicialmente construída e publicada pelo Ministério da Saúde, com o título “Recomendações do Ministério da Saúde para o acolhimento adequado à população em situação de rua durante a pandemia do coronavírus (COVID-19)”. No entanto, foi posteriormente incorporada como anexo na Portaria nº 69, de 14 de maio de 2020, e aprovada, como comprova o trecho a seguir da referida portaria: “Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo, a Nota Técnica nº 13/2020, com recomendações gerais para a garantia de proteção social à população em situação de rua, inclusive imigrantes, no contexto da Pandemia do novo Coronavírus, Covid-19” (Brasil, 2020a, s. p.). A Portaria 69/2020 consiste na Nota Técnica 13/2020 por ela aprovada - por isso serão referenciadas como um mesmo documento. Tal contextualização nos alerta ao fato de não haver nenhum documento de responsabilidade do Ministério da Saúde, mesmo se tratando de uma conjuntura de crise sanitária, reforçando o viés histórico de “público da assistência” atribuído à PSR.

A seguir, apresentamos os achados que estão divididos em dois eixos temáticos: fundamentos e horizontes do cuidado à PSR; e recrudescimento dos processos de segregação, manicomialização e mercantilização, sintetizados na existência e centralidade das CTS.

No meio da rua tinha um vírus: o cuidado à PSR com necessidades decorrentes ao consumo de drogas

Apesar de todos os materiais ressaltarem como o coronavírus e a pandemia aguçaram uma condição já subalternizada, sendo, pois, o cuidado à PSR uma prioridade, constatamos um cenário heterogêneo quanto a este cuidado. Isso se reflete no próprio conteúdo e propósito dos

materiais, com um mais genérico e sintético (Brasil, 2020c) e os outros que, de fato, se prestam a orientar a assistência na área (Brasil, 2020a; 2020b).

Enquanto elementos comuns aos documentos e que podem ser apreendidos como núcleos estruturantes das políticas, ao menos retoricamente, destacamos: trabalho intersetorial; cuidado integral e compartilhado; abordagem da “temática das drogas” como um dos elementos do processo de cuidado que deve ser integral. Damos mais importância no presente eixo temático à Nota Técnica 13/2020 (Brasil, 2020a) e à Resolução 40/2020 (Brasil, 2020b), sobretudo esta - cujos motivos serão explicitados à frente -, por detalharem as especificidades do cuidado à PSR com problemas decorrentes do consumo de drogas.

É colocada a necessidade de um *continuum* de cuidado (promoção social e de saúde, prevenção e proteção sociais e tratamento) que possibilite atenção integral a partir das necessidades e características singulares dos indivíduos. É necessário o cuidado compartilhado e trabalho articulado entre diferentes serviços, níveis assistenciais e setores (SUS, SUAS, sistema de justiça etc.)

Art. 55 O trabalho social com a população em situação de rua deve ter atenção com os determinantes e impactos sociais das suas condições de saúde, atuando de forma articulada com a Rede de Atenção à Saúde, compartilhando cuidados entre as equipes, principalmente em relação à Tuberculose, Hanseníase, HIV/AIDS, necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, demais questões de saúde mental e deficiências, dentre outras (Brasil, 2020b)

Apesar das similitudes e convergências entre os materiais, é importante negritar como há um esforço na Resolução 40/2020 de orientar os processos de cuidado nas/pelas concretudes dos sujeitos e suas condições de vida e como elas expressam, singularmente, nossas estruturas e totalidade social desiguais, racistas, machistas, por ações que “priorizem o fortalecimento dos vínculos familiares e/ou comunitários, incluindo temas transversais como saúde da população negra, gênero, orientação sexual e identidade de gênero, o uso prejudicial de drogas, prevenção” (Brasil, 2020c, art. 109, XI). Busca-se, assim, contornar e reverter esquecimentos e apagamentos comuns nas políticas sociais e em movimentos importantes que nelas incidiram, como a Luta Antimanicomial e Reforma Psiquiátrica, expressando o próprio caráter estrutural de nosso antagonismo de classes e racismo (Passos, 2019).

No caso da PSR, isso é ainda mais evidenciado, enquanto população que expressa as manifestações e desdobramentos mais extremados da “questão social”, da condição imanentemente desigual do capitalismo que, por sua vez, se concretizam nas/pelas mediações e determinações de raça, gênero, sexualidades etc. O próprio consumo de drogas por tal população, sem nenhum tipo de moralismo, ao mesmo tempo que se apresenta enquanto

sintoma social dessa dinâmica histórica - até mesmo como forma de satisfazer necessidades básicas de vida -, também sinaliza uma condição de vida violentada, devendo ser analisado a partir desse seu caráter de *crítica*, de sinalização da incongruência dos indivíduos como seres sociais (singulares) e a realidade que, ao invés de os possibilitarem um desenvolvimento e condição humanizantes, os desumanizam (Mendes, Ronzani e Paiva, 2019).

Dessa forma, ao invés de focalizar nas drogas, reforçando a imagem da PSR como sinônimo de consumidora de drogas e, mais, de dependente, reproduzindo toda a construção ideológica pejorativa, negativa dela como perigosa, foca-se nos sujeitos, colocando as substâncias em parênteses; e um sujeito histórico, social que se faz nas relações com outros, em determinados contextos, ao mesmo tempo que os produz, de modo a atuar para o fortalecimento de vínculos, laços comunitários, “evitando institucionalizações que violem direitos” (Brasil, 2020b, art. 109, I) e reforcem ainda mais uma vida isolada. Como consequência, o próprio cuidado às pessoas em situação de rua com necessidades decorrentes do consumo de drogas passa a ser circunscrito ao cuidado como um todo, que deve ser planejado de modo a abarcar as condições de vida e de saúde, como:

[...] infecções sexualmente transmissíveis - ISTS -, tuberculose, hanseníase, hipertensão arterial, diabetes, desnutrição infantil e entre pessoas idosas, anemias e outras deficiências nutricionais, doenças respiratórias, problemas dermatológicos, transtornos mentais, prevenção à violência, necessidades decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, entre outras (Brasil, 2020b, art. 110).

Ainda na Resolução 40/2020, a Redução de Danos (AIDS) aparece não só como conjunto de técnicas e procedimentos, mas como racionalidade a orientar os processos de cuidado. Reforça-se uma concepção não moralista, não preconceituosa acerca das drogas e das relações que se estabelece com elas, indo de encontro, no caso da PSR, às tradicionais construções ideológicas dela como *drogada*, *cracuda*, que adicionam *camadas* de *desumanização* a pessoas já desumanizadas, bem como recrudescem a imagem de perigosas, justificando medidas de segregação e higienismo. A partir da AIDS é possibilitada uma assistência integral e humanizada, assegurando direitos e fortalecendo os indivíduos e seus contextos de vida, a partir das suas características e necessidades, que devem balizar o cuidado. Nesse sentido, a AIDS mostra-se em consonância com o caráter territorial-comunitário dos serviços públicos antagônicos à lógica asilar-manicomial, à própria Reforma Psiquiátrica e princípios do SUS (e SUAS) como garantidores de direitos, como pode ser visto em:

Os serviços/dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS devem garantir a atenção integral da população em situação de rua em articulação com os demais serviços da Rede de Atenção à Saúde e intersetoriais, em garantindo o acesso inclusive por busca ativa, a partir da lógica da redução

de danos e da priorização do cuidado comunitário, evitando-se o higienismo social a partir de seu afastamento em locais de segregação, quebra de vínculos comunitários e demais violações de seus direitos (Brasil, 2020b, art. 113).

A capacitação e atualização dos/as gestores/as e trabalhadores/as de saúde deve incluir as especificidades do atendimento à população em situação de rua, como atendimento humanizado, sob a lógica da redução de danos (Brasil, 2020b, art. 118).

Constatamos na Resolução 40/2020 uma explícita orientação em defesa da vida e dos direitos da PSR, assim como posições antimanicomiais, em defesa do SUS, não-asilares e de caráter territorial-comunitário. A título de ilustração, em nenhum momento se faz menção a CTS e são frisados os dispositivos públicos do SUS, da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e demais redes de atenção à saúde, bem como os do SUAS. Inclusive, segundo o art. 114: “devem ser priorizados os recursos do SUS para a construção de mais Centros de Atenção Psicossocial, em especial os CAPSADS [Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas] nos municípios” (Brasil, 2020b, s. p.). É importante também demarcar que, a despeito da maior relevância aos CAPS, não se resume a RAPS e os processos de cuidado a eles, com várias menções sobre a necessidade de trabalho com Consultórios na Rua, Unidades de Acolhimento Transitório da Saúde, “equipes e programas da Atenção Primária à Saúde, com ênfase na estratégia Saúde da Família” (Brasil, 2020b, art. 110) e serviços e programas “do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), da rede pública estatal ou privada, nos níveis de Proteção Social Básica e Especial de Média e Alta Complexidade, bem como ao Cadastro Único para programas sociais do governo federal” (Brasil, 2020b, art. 35).

No entanto, há evidentes contradições entre o conteúdo da Resolução 40/2020, suas fundamentações e horizontes, com o dos demais documentos - que serão abordadas na seção seguinte. Ressaltamos que tal resolução, apesar de ser formalmente oriunda do MMFDH, foi construída no âmbito do Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) que, apesar de circunscrito ao MMFDH, é uma instância de controle e participação social com relativa autonomia, de caráter paritário, em que metade dos integrantes não é do próprio Estado, mas representantes de organizações da sociedade civil com relevante atuação na defesa dos direitos humanos. Ou seja, o conteúdo do referido documento e suas orientações vão de encontro às posições do governo de Jair Bolsonaro no que se refere às políticas voltadas para a PSR, e isso se dá por conta da própria natureza do CNDH, recrudescendo a importância da participação social. Nesse sentido, não só é necessário analisar de maneira integrativa tais documentos, contextualizando a Resolução 40/2020 nos marcos de uma gestão que se antagoniza ao que por ela é pressuposto e defendido, mas submetê-la - e o restante do material - à conjuntura, a qual fazem parte, expressam e conformam, numa análise totalizante. Não é nosso intuito analisar

como tais políticas se concretizam na prática, mas, a partir do exposto, podemos hipotetizar que os principais balizadores para a implantação das ações à PSR na pandemia, ao menos as de *cima para baixo*, são: a Portaria 69/2020 e a Nota Técnica 13/2020 (Brasil, 2020a) e o documento com informações e recomendações do MMFDH (Brasil, 2020c), que são produções diretas do *governo Bolsonaro*.

Da mesma forma, tudo isso serve para explicitar o caráter de disputa das políticas e no âmbito político - não dissociando-o da totalidade das relações produtivas, do terreno histórico e social do qual emana e incide, dialeticamente. Grosso modo, temos nas especificidades de tais materiais, nas contradições expressas neles/por eles a correlação de forças, fragmentos da luta de classe referentes às especificidades da PSR na pandemia. Fazemos tais apontamentos também para não cairmos em romantizações acerca do que é dito, desconsiderando o não-dito, as entrelinhas e os jogos de força e de poder envolvidos. Isso fica evidente quando, por exemplo, o MMFDH diz que “nesse contexto a participação da sociedade civil organizada se faz absolutamente necessária” (Brasil, 2020c, p. 3), porém, no restante dos documentos, tal participação é desconsiderada. Se “a participação da sociedade civil organizada se faz absolutamente necessária”, por que os outros documentos foram produzidos pelos Ministérios sem a participação social? Discorreremos sobre algumas destas contradições e o que desvelam a seguir.

No meio da RAPS tinha uma Comunidade Terapêutica: segregação, higienização, remanicomialização e mercantilização do “cuidado” à PSR

A partir da exposição, abordamos no presente eixo temático como, sob o véu de cuidado à PSR e, considerando o caráter progressista da Resolução 40/2020, temos o recrudescimento de medidas higienistas, de segregação, remanicomialização e mercantilização, marcadamente classistas e racistas sintetizados pela centralidade das CTS. Para isso, focamos na Portaria 69/2020 e Nota Técnica 13/2020 (Brasil, 2020a) e no documento com informações e recomendações do MMFDH (Brasil, 2020c).

Com relação à última, há uma breve seção, específica às pessoas em situação de rua “que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas” (Brasil, 2020c, p. 7). Junto à recomendação de acesso e articulação com os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), dispositivos substitutivos às instituições tradicionais asilares-manicomiais, de caráter comunitário de atuação territorializada, também se recomenda a articulação com a “rede de Comunidades Terapêuticas”, que “também irá disponibilizar vagas para o público que aceitar a oferta de ingresso nessas instituições” (Brasil, 2020c, p. 7).

Nas “Recomendações Gerais ao Órgão Gestor da Política de Assistência Social, Unidades e Serviços Socioassistenciais direcionados a Pessoas em Situação de Rua” da Nota Técnica 13/2020 (Brasil, 2020a), há um tópico somente das CTS: “Quanto à articulação com as Comunidades Terapêuticas previstas no Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas” (Brasil, 2020a, s. p.). Chamamos atenção para o fato de que um ponto sobre a “articulação com o Sistema Único de Saúde (SUS)” (Brasil, 2020a, s. p.). Ou seja, as CTS são colocadas no mesmo patamar de importância do SUS, ao passo que não são serviços do SUS, por mais estejam na RAPS, no nível de atenção residencial transitório (Brasil, 2011). No total, as CTS são mencionadas nove vezes no documento, mas, novamente, com essa diferença qualitativa: a de que configuram um eixo de recomendação para a política de assistência social, o que não acontece com nenhum outro serviço público da RAPS. Dessa forma, em consonância com o que foi observado por Passos, Gomes e Santo (2022), ao contrário do que se diz, das CTS como meio para a diversificação das estratégias de tratamento, “o que se apresenta é a recondução do financiamento público para a garantia do funcionamento das CTS, bem como a reorganização da Rede de Atenção Psicossocial, trazendo para a sua centralidade o serviço em tela” (p. 215).

Um dos mecanismos de legitimação das CTS é o ocultamento ou mistificação de sua natureza asilar-manicomial, como se pudessem ser caracterizadas como instituições *residenciais*, de *acolhimento* - de maneira genérica -, como é visto em:

As Comunidades Terapêuticas são entidades privadas, sem fins lucrativos, que realizam o acolhimento em regime residencial transitório, em caráter voluntário, de pessoas com problemas associados ao uso nocivo ou dependência de substância psicoativa, no âmbito do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD (Brasil, 2020a, s. p.).

Tal movimento é observado nas recentes modificações do aparato legal-político em álcool e outras drogas, como na nova Lei de Drogas (LD), a Lei 13.840, de 05 de junho de 2019, que passa a denominá-las de *Comunidades Terapêuticas Acolhedoras* (Brasil, 2019a). Contudo, conforme constatado por Costa (2021), numa análise sobre as CTS nas atuais políticas brasileiras sobre drogas:

[...] mesmo com as tentativas discursivas de desmanicomialização e humanização das CTS, o isolamento social e o asilamento continuam como seus elementos constitutivos; ou seja, compartilham destas premissas manicomiais. Mesmo que vedada pela LD a internação e/ou o isolamento nas CTS, a prática de tratar alguém nestas instituições retirando-o de seu contexto de vida, ancorada nos pilares da disciplina, trabalho e religiosidade, caracterizam a internação e asilamento, sendo mais propício a práticas violadoras de direitos, conforme a própria realidade mostra (CFP, MNPCT e

MPF, 2018). Ou seja, não existe CT sem internação e segregação/asilamento, seja ela *acolhedora* ou não (pp. 32-33).

Aliado a isso, outro mecanismo justificador das CTS é o fato de elas se pautarem na/pela abstinência como horizonte único para os processos de “cuidado”, indo ao encontro das *novas-velhas* LD (Brasil, 2019a) e Política Nacional sobre Drogas (PNAD) (Brasil, 2019b) - que, na verdade, é uma política *antidrogas* -. Nesse sentido, busca-se deslegitimar e negar a Redução de Danos enquanto racionalidade, fundamento e ética do cuidado em álcool e outras drogas, por meio do reforçamento de moralismos e construções ideológicas das drogas como males em si. Mesmo que tal aspecto não apareça nos documentos aqui analisados, é necessário que seja pontuado, até porque fica evidenciado na LD e PNAD, sendo elas referenciadas no Decreto, Nota Técnica e Portaria - até por serem instrumentos legais e políticos aos quais se submetem.

Em comparação, na mesma Nota Técnica 13/2020, os CAPS são mencionados apenas duas vezes em todo o documento, sendo uma vez os CAPS gerais e outra os CAPSad. A RAPS é mencionada apenas duas vezes, com uma fazendo referência às CTS, para que fossem construídos “protocolos e fluxos de encaminhamento com as Comunidades Terapêuticas cadastradas junto à Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas” (Brasil, 2020a, s. p.). As Unidades de Acolhimento, que fazem parte do mesmo nível assistencial das CTS na RAPS (atenção residencial de caráter transitório) só foram mencionadas uma vez, assim como as Residências Terapêuticas, um importante serviço substitutivo de desinstitucionalização. Quanto às menções a outros dispositivos da RAPS, temos: Consultórios na Rua, cinco vezes; Unidades de Atenção Primária à Saúde (incluindo as Equipes de Saúde da Família), quatro vezes. É importante mencionar que há dispositivos do SUAS que também devem ser considerados quando pensamos em acolhimento da PSR, tais quais: os Centros Pop, na média complexidade, e os Serviços de Acolhimento Institucional e Acolhimento em Repúblicas, na alta complexidade.

Esse movimento de hegemonização das CTS nos processos de cuidado em álcool e outras drogas - não ficando restrito à PSR - é, muitas das vezes, colocado como forma de suprir lacunas assistenciais, a carência de dispositivos públicos frente às demandas e necessidades de usuários, como pode ser visto:

Nos casos em que a rede pública de serviços for insuficiente para atender toda a demanda da população em situação de rua no contexto da pandemia, sugerimos o fortalecimento dessa rede a partir de articulações realizadas com as organizações civis e religiosas, bem como com o setor privado e empresarial, coordenado pela gestão pública local e com atuação intersetorial (Brasil, 2020c, p. 4).

Contudo, o fortalecimento das CTS enquanto serviços privados - inclusive, com repasse de verbas públicas - implica na manutenção e recrudescimento do subfinanciamento e deslegitimação da “rede pública de serviços”, afinal retira-se verbas destas para repassar às primeiras. Ademais, tal enfraquecimento e deslegitimação dos dispositivos públicos também diz respeito ao fato de que as CTS, apesar da retórica, são instituições de caráter asilar-manicomial, continuidades dos manicômios em nosso atual estágio de desenvolvimento capitalista, tendo sido recentemente o principal dispositivo e mecanismo de remanicomialização e mercantilização do cuidado em saúde mental, álcool e outras drogas que constituem a Contrarreforma Psiquiátrica brasileira (Costa, 2021; Costa e Mendes, 2020; Passos, Farias, Gomes e Araujo, 2020). Ou seja, quanto mais se financia e fomenta as CTS enquanto dispositivos asilares-manicomiais e privados, mais se enfraquece e deslegitima os serviços públicos, de caráter territorial-comunitário e, em extensão, as conquistas e avanços da Reforma Psiquiátrica brasileira.

No caso da PSR, não é demais lembrar como, sob o pânico moral forjado a partir da suposta epidemia do crack, as CTS ganharam corpo e relevância junto a ações como a internação compulsória, vide os exemplos das cidades de São Paulo, na chamada *cracolândia*, e no Rio de Janeiro. Sobre a internação compulsória, é importante salientar que ela foi estendida às pessoas com necessidades decorrentes do consumo de drogas - até então era restrita a pessoas em sofrimento psíquico, com os ditos transtornos mentais - e regulamentada na nova(-velha) LD podendo ser requerida “a pedido de familiar ou do responsável legal ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública” (Brasil, 2019a, s. p.), ou seja, por um amplo rol de indivíduos. E, por mais que a internação compulsória seja vedada nas CTS, não é incomum que aconteça nelas (Ferrazza, Sanches, Rocha e Justo, 2017; Musse, 2018; CFB, MNPCT e MPF, 2018).

Ainda nessa direção, põe-se a Resolução nº 3, de 24 de julho de 2020, que regulamentou, “no âmbito do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad, o acolhimento de adolescentes com problemas decorrentes do uso, abuso ou dependência do álcool e outras drogas em comunidades terapêuticas” (Brasil, 2020d, s. p.). Temos o Estado brasileiro, num contexto de pandemia, legitimando e fomentando a segregação e o asilamento de adolescentes em tais instituições. E não parou por aí. Em novembro de 2021 foi sancionada a Lei nº 14.251, que, dentre várias ações, destinou R\$ 78 milhões adicionais ao já “anabolizado” montante do fundo público para as CTS (Brasil, 2021a); e, em 16 de dezembro, sancionou-se a Lei Complementar nº 187, que certifica as entidades beneficentes que recebem imunidade de contribuições à seguridade social e que incluiu as CTS no rol de instituições com imunidade

tributária (Brasil, 2021b) - com votos favoráveis de parlamentares de partidos de esquerda, do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Partido Comunista do Brasil (PCDOB).

Também relembramos os casos de retiradas compulsórias de bebês de mulheres em situação de rua, mormente negras, em Belo Horizonte e o abrigo deles. Por mais que nestes casos o processo não envolva as CTS, constatamos como se trata de uma ampla lógica de remanicomialização (que é também mercantil, afinal se trata de instituições privadas), que, no caso da PSR, deixa ainda mais evidenciado seu caráter segregatório, higienista, classista, racista e machista (Passos e Moreira, 2017; Passos, 2019).

Fossi e Guareschi (2015, pp. 103-104) apontam que as CTS, “em sua estrutura e funcionamento, organizam-se e articulam-se como cadeia, igreja e hospital psiquiátrico”, “é na articulação do funcionamento destas três instituições que elas encontram sua especificidade”. Segundo o IPEA (2017), apesar da heterogenia das CTS no país, os três pilares delas são: disciplina, religiosidade e trabalho (*não pago, forçado*, denominado “*laborterapia*”). Considerando isso, sobretudo o último pilar, bem como a cor da força de trabalho em tais instituições e a condição de trabalho não pago, servil, podemos adicionar à prisão, à igreja e ao manicômio, outra instituição fundamental na formação social brasileira: a *senzala*. As CTS como sofisticções e reatualizações de: igrejas, prisões, manicômios e senzalas; uma expressão de nosso *moderno-arcaico*.

Não obstante, quanto mais se precariza e desmantela o SUS (e o SUAS), enquanto sistemas que se pautam na saúde e processos de cuidado enquanto direitos, e não como mercadorias, orientados a assegurar direitos, mais são fomentadas as CTS que possuem como pressuposto a violência, como é fartamente documentado na literatura (p. ex.: CFB, 2011; CFB, MNPCT e MPF, 2018; CRP-SP, 2016; SES-MG, 2016). Municinando-se também de retóricas genéricas sobre a importância do trabalho em rede, com dispositivos comunitários e fomentando a participação da dita sociedade civil, mas que significam uma maior desresponsabilização estatal, há a utilização da pandemia e a necessidade de ações emergenciais para o avanço dos processos de terceirização e privatização nas políticas de saúde e assistência social: “Estas providências de caráter emergencial devem alcançar a gestão e a totalidade das unidades e serviços, incluindo os de natureza pública estatal e os públicos prestados pelas Organizações da Sociedade Civil, ainda que não recebam recursos públicos” (Brasil, 2020a); “Para atender as demandas decorrentes da pandemia, recomenda-se aos municípios, estados e ao Distrito Federal avaliar possibilidades de flexibilização do uso de recursos pelas Organizações da Sociedade Civil com as quais possuam parceria” (Brasil, 2020a).

Nesse sentido, o cuidado às pessoas em situação de rua com necessidades atreladas ao consumo de drogas passa, necessariamente, pela construção ou fortalecimento de protocolos, fluxos assistenciais e encaminhamentos às CTS, articulando SUS e SUAS. Por exemplo, quanto à atuação das equipes dos serviços da proteção social especial de média complexidade do SUAS - por exemplo, CREAS, Centros Pop e abordagem social, temos: “1) Ampliar orientações e encaminhamentos para serviços como: os Centros de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas (CAPS/AD), Comunidades Terapêuticas cadastradas junto ao Ministério da Cidadania, dentre outros” (Brasil, 2020a).

Além disso, por meio da retórica sobre suposta complementação dos serviços públicos pelos privados - que, na história do campo álcool e outras drogas, tem sido da complementação dos serviços públicos aos privados -, busca-se mistificar que o fomento e impulsionamento das CTS é o cerne dos presentes rumos das políticas em saúde mental, álcool e outras drogas. Tem-se nessas instituições a materialização mais aguçada e acabada dos processos de remanicomialização e mercantilização do cuidado que, por sua vez, atrela-se nas especificidades da área com o avanço do conservadorismo e ganho de força do fundamentalismo religioso (Costa, 2021; Passos, Gomes e Santo, 2022), como pode ser visto em vários momentos nos materiais, em que não só se defende a complementaridade com o setor privado, como se ressalta as organizações religiosas. Não à toa, a maioria das CTS é vinculada a instituições religiosas. De acordo com levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA, 2017), 82% das CTS tinha alguma vinculação religiosa, sobretudo com instituições pentecostais ou católicas. Segundo reportagem de Correia (2020), quase 70% da verba federal para CTS no primeiro ano do governo Bolsonaro foi apenas para entidades cristãs. Atrela-se a isso a criação em 2015 e refundação em 2019, da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas Acolhedoras e Associações de Proteção e Assistência aos Condenados na Câmara dos Deputados, composta por cerca de 200 parlamentares, dos mais variados partidos e espectros políticos, vinculados a instituições religiosas e CTS. Não custa também lembrar o caráter conservador do *bolsonarismo* e do governo Jair Bolsonaro, sua configuração, seus quadros e a própria existência de um Ministério que *defenda a família* - e não qualquer família, mas a nuclear cisheteronormativa burguesa e cristã - e as pautas defendidas.

Há, portanto, enquanto núcleo da Contrarreforma Psiquiátrica em nossa realidade presente, todo um movimento *de cima para baixo* de fomento e impulsionamento ainda maiores das CTS não só na RAPS, mas nas articulações com outras políticas setoriais como SUAS, sistema de justiça, segurança pública etc., em detrimento dos serviços públicos substitutivos, de caráter territorial-comunitário, e, grosso modo, da Reforma Psiquiátrica e do SUS, como é visto em:

“A SENAPRED vem mobilizando a rede de Comunidades Terapêuticas para disponibilizar vagas para pessoas em situação de rua que necessitem e desejem ingressar nessas instituições” (Brasil, 2020a, s. p.). Tudo isso regado a uma apropriação cada vez maior do fundo público por tais instituições; um crescente afluxo orçamentário que aprofunda os já crônicos subfinanciamento e deslegitimação dos serviços públicos de caráter territorial-comunitário e propostas não-asilares, antimanicomiais (Costa e Mendes, 2020). Nessa direção, a própria gestão do SUAS, bem como seus profissionais, não só devem considerar as CTS no cuidado à PSR, como são orientados a “identificar as Comunidades Terapêuticas atuantes no município, credenciadas junto à SENAPRED, e articular para que ofereçam atendimento às pessoas em situação de rua que apresentem uso abusivo ou dependência de álcool e outras drogas” (Brasil, 2020a, s. p.). Ou seja, não só há a necessidade de se considerar e trabalhar articuladamente com as CTS, como é responsabilidade dos dispositivos e gestão públicos encontrá-las, gerenciá-las etc., o que implica mais trabalho, nos fazendo questionar as afirmativas sobre as articulações com as CTS se orientarem a suprir lacunas assistenciais. Grosso modo, às CTS o bônus; aos dispositivos públicos e gestão pública, o ônus.

Portanto, sob retórica de preocupação com a PSR num cenário de (ainda) maior vulnerabilidade, se intensificam processos de higienização e segregação, sustentados em visões hegemônicas das drogas como *males in se*, plasmados à própria figura da pessoa em situação de rua como perigosa e/ou que deve ser salva, sobretudo, pelo discurso e práticas religiosas. Em suma, um objeto, um não-sujeito; e, pior, um objeto perigoso ao estar atrelado a outros objetos perigosos, como as drogas. Por outro lado, dialeticamente, um objeto que mesmo perigoso, ou por ser perigoso, pode ser também lucrativo, movimentando todo um comércio não só do “tratamento” em álcool e outras drogas, como da pobreza. Assim, não se exclui a PSR, mas busca-se lidar com a pobreza tirando-a de vista, ao tirar os pobres de vista, segregando-os e os asilando, ao mesmo tempo que lucrando com isso. Se um dos lemas da pandemia, como forma de combater o vírus e o contágio por ele, foi “*fique em casa*”, para aqueles(as) que não tinham casa a “solução” foi: *seja jogado nos manicômios* (nas prisões e demais instituições totais, segregatórias) ou, mesmo, em *covas*, com o vírus se “encarregando” das políticas higienistas; um *higienismo “natural”*.

Por mais que nada disso tenha surgido com a pandemia, aproveita-se dela para *passar a boiada*: nas especificidades do campo da saúde mental, álcool e outras drogas, para fortalecer a remanicomialização e mercantilização do cuidado em álcool e outras drogas. Plasmado a isso, nas especificidades da PSR, a sofisticação e recrudescimento do higienismo e segregação sociais classistas e racistas. Nesse interregno, as CTS apresentam-se como sínteses, ou seja, como a concretização modelar de tal dinâmica em uma só instituição, bem como um

mecanismo, também exemplar, de dar vazão e materialização a essa dinâmica. Temos nas CTS uma amálgama da ascensão conservadora e do fundamentalismo religioso, com a lógica asilar-manicomial e mercantil. Como vimos, tais retrocessos encontram-se circunscritos ao conjunto de retrocessos nas políticas sociais, não ficando restritos a uma política setorial apenas. No campo da saúde mental, álcool e outras drogas, atrelam-se ao movimento corrente de *Contrarreforma Psiquiátrica*, na esteira também de recentes modificações no ordenamento político-legal brasileiro que conformaram novas-velhas políticas *antidrogas* (Brasil, 2019a; 2019b).

Considerações Finais

No artigo, analisamos as principais mudanças durante a pandemia nas políticas orientadas ao cuidado à PSR com necessidades decorrentes do consumo de drogas no Brasil. As políticas são um campo de disputa, expressando os antagonismos de nossa sociedade e a correlação de forças. O contexto de tendências regressivas não impediu a presença de contradições no interior (e, sobretudo, fora) do Estado, fruto da permanente luta de classes e do poder dos diversos atores envolvidos na formulação e implementação de políticas públicas, como expresso na Resolução 40/2020.

Porém, em uma análise totalizante, constatamos a ênfase no recrudescimento de processos de higienização e segregação, de caráter evidentemente classista e racista, apesar de resistências e formulações realistas e progressistas. Tudo isso sustentado nas visões hegemônicas das drogas como males em si, reforçando e reatualizando a construção ideológica da PSR como consumidora de drogas e, nisso, perigosa e/ou que deve ser salva. Nesse ínterim, temos o avanço de processos de remanicomialização e mercantilização do cuidado em álcool e outras drogas, aliado à ascensão conservadora e do fundamentalismo religioso, tendo nas CTS instituições por excelência.

Constatamos, assim, que nem uma pandemia foi capaz de frear o *modus operandi* higienista-segregatório à PSR no Brasil. Pelo contrário, sob argumentos de se retirar certas *pedras* do caminho, retiraram os sujeitos (tornados coisas, objetos), demonstrando quem, de fato, são os obstáculos indesejáveis.

Referências

- Brasil (2005, dezembro 30). Presidência da República. *Lei nº 11.258: Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, para acrescentar o serviço de atendimento a pessoas que vivem em situação de rua*. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11258.htm.
- Brasil (2009, dezembro 23). Presidência da República. *Decreto nº 7.053: Institui a Política Nacional para População em Situação de Rua*. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7053.htm.
- Brasil (2010, maio 20). Presidência da República. *Decreto nº 7.179: Institui o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, cria o seu Comitê Gestor, e dá outras providências*. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7179.htm.
- Brasil (2011, dezembro 23). Ministério da Saúde. *Portaria nº 3.088: Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)*. Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html.
- Brasil (2019a, junho 5). Casa Civil. *Lei nº 13.840: Dispõe sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas e para tratar do financiamento das políticas sobre drogas*. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13840.htm.
- Brasil (2019b, julho 19). Presidência da República. *Decreto nº 9.926: Dispõe sobre o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas*. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9926.htm.
- Brasil (2020a, maio 14). Ministério da Cidadania. *Portaria nº 69: Aprova recomendações gerais para a garantia de proteção social à população em situação de rua, inclusive imigrantes, no contexto da pandemia do novo Coronavírus, Covid-19*. Disponível em <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-69-de-14-de-maio-de-2020-257197675>.
- Brasil (2020b, outubro 13). Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. *Resolução nº 40: Dispõe sobre as diretrizes para promoção, proteção e defesa dos direitos humanos das pessoas em situação de rua, de acordo com a Política Nacional para População em Situação de Rua*. Disponível em <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-40-de-13-de-outubro-de-2020-286409284>.
- Brasil (2020c). Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. *Atendimento e Acolhimento Emergencial à população em situação de rua no contexto da pandemia da Covid-19. Informações e Recomendações*. Disponível em https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/populacao-em-situacao-de-rua/Atendimento_e_Acolhimento_Emergencial.pdf.
- Brasil (2020d, julho 24). Ministério da Justiça e Segurança Pública. *Resolução nº 3, de 24 de julho de 2020: Regulamenta, no âmbito do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad, o acolhimento de adolescentes com problemas decorrentes do uso, abuso ou dependência do álcool e outras drogas em comunidades terapêuticas*. <http://dspace.mj.gov.br/handle/1/1169>.
- Brasil (2021a, novembro 25). Presidência da República. *Lei nº 14.251: Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R\$ 721.321.565,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente*. Disponível em <https://legis.senado.leg.br/norma/35198716>.
- Brasil (2021b, dezembro 16). Presidência da República. *Lei complementar nº 187: Dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera as Leis nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivos das Leis nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências*. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp187.htm.

- Conselho Federal de Psicologia [CFP] (2011). *Relatório da 4ª Inspeção Nacional de Direitos Humanos: locais de internação para usuários de drogas*. Brasília: CFP.
- Conselho Federal de Psicologia [CFP], Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura [MNPCT] e Ministério Público Federal [MPF] (2018). *Relatório da Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas - 2017*. Brasília: CFP; MNPCT; MPF.
- Conselho Regional de Psicologia de São Paulo [CRP-SP] (2016). *Relatório de inspeção de comunidades terapêuticas para usuárias(os) de drogas no estado de São Paulo: mapeamento das violações de direitos humanos*. São Paulo: CRP-SP.
- Correia, M. (2020). Entidades cristãs receberam quase 70% da verba federal para comunidades terapêuticas no primeiro ano de governo Bolsonaro. *Pública*, 27 jul. 2020: Disponível em <https://apublica.org/2020/07/entidades-cristas-receberam-quase-70-da-verba-federal-para-comunidades-terapeuticas-no-primeiro-ano-de-governo-bolsonaro/>.
- Costa, P. H. A. (2021). Comunidades Terapêuticas nas políticas antidrogas: mercantilização e remanicomialização. *Serviço Social em Debate*, 3(2). Disponível em <https://revista.uemg.br/index.php/serv-soc-debate/article/view/4693>.
- Costa, P. H. A., e Mendes, K. T. (2020). Contribuição à crítica da economia política da Contrarreforma Psiquiátrica Brasileira. *Argumentum*, 12(2), 44-59. <https://doi.org/10.18315/argumentum.v12i2.28943>.
- Ferrazza, D. A., Sanches, R. R., Rocha, L. C., e Justo, J. S. (2017). Comunidades Terapêuticas em novas configurações do manicomialismo. *ECOS*, 7(2), 363-375. Disponível em <http://www.periodicoshumanas.uff.br/ecos/article/view/2106/1501>.
- Fossi, L. B., e Guareschi, N. M. F. (2015). O modelo de tratamento das comunidades terapêuticas: práticas profissionais na conformação dos sujeitos. *Estudos e Pesquisas em Psicologia*, 15(1), 94-115. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/epp/v15n1/v15n1a07.pdf>.
- Gomes, R. (2011). A análise de dados em pesquisa qualitativa. In M. C. S. Minayo (Ed.), *Pesquisa social: teoria, método e criatividade* (pp. 67-80). Petrópolis: Vozes.
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada [IPEA] (2017). *Nota Técnica. Perfil das Comunidades Terapêuticas Brasileiras*. Brasília: IPEA.
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada [IPEA] (2020). *Nota Técnica. Estimativa da População em Situação de Rua no Brasil (setembro de 2012 a março de 2020)*. Brasília: IPEA.
- Mendes, K. T., Ronzani, T. M., e Paiva, F. S. (2019). *Se essa rua falasse: uma análise sobre estigma, pobreza e uso de drogas nas trajetórias de sujeitos em situação de rua*. Juiz de Fora: Editora UFJF.
- Musse, L. B. (2018). Internações forçadas de usuários e dependentes de drogas: controvérsias jurídicas e institucionais. In M. P. G. dos Santos (Ed.), *Comunidades Terapêuticas: temas para reflexão* (pp. 187-228). Brasília: IPEA.
- Passos, R. G., e Moreira, T. W. F. (2017). Reforma Psiquiátrica brasileira e Questão Racial: contribuições marxianas para a Luta Antimanicomial. *SER Social*, 19(41), 336-354. Disponível em https://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social/article/view/14943/13262.
- Passos, R. G. (2019). Frantz Fanon, Reforma Psiquiátrica e Luta Antimanicomial no Brasil: o que escapou nesse processo? *Sociedade em Debate*, 25(3), 74-88. Disponível em <https://revistas.ucpel.edu.br/rsd/article/view/2352>.
- Passos, R. G., Farias, J., Gomes, T. M. S., e Araujo, G. C. L. (2020). Comunidades terapêuticas e a (re)manicomialização na cidade do Rio de Janeiro. *Argumentum*, 12(2), 125-140. <https://doi.org/10.18315/argumentum.v12i2.29064>.
- Passos, R. G., Gomes, T. M. S., e Santo, T. B. E. (2022). O avanço do conservadorismo no campo da saúde mental e drogas e as Comunidades Terapêuticas no Estado do Rio de Janeiro: uma análise do PL 565/2019. *Em Pauta*, 49(20), 205-220. <https://doi.org/10.12957/REP.2022.63529>.

- Rui, T. (2013). Depois da “Operação Sufoco”: sobre espetáculo policial, cobertura midiática e direitos na “cracolândia” paulistana. *Contemporânea*, 3(2), 287-310.
- Sá-Silva, J. R., Almeida, C. D., e Guindani, J. F. (2009). Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas. *Revista Brasileira de História & Ciências Sociais*, 1(1), 1-15. <https://periodicos.furg.br/rbhcs/article/view/10351>.
- São Paulo (2021). *População em situação de rua de São Paulo. Censo 2021*. São Paulo: Prefeitura de São Paulo.
- Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais [SES-MG] (2016). *Relatório de vistorias em comunidades terapêuticas do Programa Aliança pela Vida*. Belo Horizonte: SES-MG.
- Silva, M. L. (2006). *Mudanças recentes no mundo do trabalho e o fenômeno população em situação de rua no Brasil 1995-2005*. (Dissertação de Mestrado, Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil).

GESTANDO E GERINDO A VULNERABILIDADE DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RUA: ARTICULAÇÕES ENTRE GÊNERO, TRAJETÓRIA DE RUA, DROGAS E MATERNIDADES

GESTIONAR Y ADMINISTRAR LA VULNERABILIDAD DE LAS MUJERES EN
SITUACIÓN DE CALLE: VÍNCULOS ENTRE GÉNERO, TRAYECTORIA DE CALLE,
DROGAS Y MATERNIDADES

GESTATE AND MANAGING THE VULNERABILITY OF WOMEN IN STREET
SITUATIONS: LINKS BETWEEN GENDER, STREET TRAJECTORY, DRUGS AND
MATERNITIES

Ariana Oliveira Alves¹

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Unicamp. a211072@dac-unicamp.br

Taniele Rui

Departamento de Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Unicamp. tanielerui@gmail.com

Recibido: 6/5/2022 | Aceptado: 13/9/2022

1 Gostaria de expressar minha gratidão à orientadora Natália Padovani e coorientadora Larissa Nadai pelas generosas sugestões e parceria.

Resumo: A retirada compulsória de bebês de mulheres em situação de rua é uma discussão que tem se aprofundado no Brasil e gradativamente sido conectada a outras questões, como pobreza, uso de álcool e outras drogas, sofrimento mental, gênero, raça e violência de Estado. A partir de estudo realizado em Belo Horizonte (Minas Gerais), pretendemos mostrar como as categorias “vulnerabilidade” e “risco” passam a ocupar centralidade nos processos de administração e proteção da infância e das famílias, sinalizando uma transformação moral da discussão que não necessariamente garante direitos de mulheres em situação de rua. Ancoradas nos estudos de gênero e suas interseccionalidades e na antropologia das práticas estatais de administração, serão analisadas, de um lado, as formas de produzir, gerir e/ou neutralizar julgamentos morais, bem como de construir a figura de uma pessoa destituída de direitos. E de outro, serão exploradas as modalidades de gestão que têm se realizado por mecanismos de regulação e responsabilização singularizada na figura materna. Vale destacar que tais dimensões são engendradas através dos embates em instâncias estatais, tais como Vara da Infância e Juventude, Defensoria Pública, serviços do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Assistência Social. Nesse sentido, o artigo enfoca a situação de rua, mas a apreende a partir de uma perspectiva política bastante ampliada, na medida em que investiga os atores públicos que gerem e normatizam a “vulnerabilidade” de mulheres nas ruas.

Palabras clave: maternidade; gênero; drogas; rua; vulnerabilidade

Resumen: La remoción obligatoria de los bebés de las mujeres en la calle es una discusión que se ha profundizado en Brasil y se está conectando gradualmente a otras cuestiones, como la pobreza, el uso de alcohol y otras drogas, el sufrimiento mental, el género, la raza y las políticas públicas. A partir de un estudio realizado en Belo Horizonte (Minas Gerais), pretendemos mostrar cómo las categorías vulnerabilidad y riesgo pasan a ocupar centralidad en los procesos de gestión y protección de niños y familias. Así, el objetivo del artículo es investigar la transformación moral de la discusión, o sea, cómo el desplazamiento de la expresión usuarios de alcohol y otras drogas a mujeres/madres en situación de vulnerabilidad social, en la práctica, no necesariamente garantizan derechos de las mujeres en situación de calle. Desde el campo de los estudios de género y sus interseccionalidades y desde la antropología de las prácticas de la administración estatal, se analizará, por un lado, formas de producir, gestionar o neutralizar juicios morales, así como de construir la figura de la persona sin derechos. Por otro lado, se explorarán las modalidades de gestión que han llevado a cabo los mecanismos de regulación y rendición de cuentas singularizados en la figura materna. Es importante señalar que tales dimensiones se engendran a través de enfrentamientos en los órganos estatales, como Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, Defensoría Pública, servicios del Sistema Único de Salud y del Sistema Único de Asistencia Social. Así que, el artículo se centra en la situación de la calle, pero la aprehe desde una perspectiva política más amplia, pues indaga sobre los actores públicos que administran y regulan la «vulnerabilidad» de las mujeres en la calle.

Palabras clave: maternidad; género; drogas; calle; vulnerabilidad

Abstract: The compulsory removal of babies from homeless women is a discussion that has deepened in Brazil and is gradually being connected to other issues, such as poverty, use of alcohol and other drugs, mental suffering, gender, race and public policies. Based on a study carried out in Belo Horizonte (Minas Gerais), we intend to show how the categories “vulnerability” and “risk” come to occupy centrality in the processes of administration and protection of children and families. Thus, the objective of the article is to investigate the moral transformation of the discussion, that is, how the terms used in the clash, “users of alcohol and other drugs” and/or “women/mothers in situations of social vulnerability”, in practice, do not necessarily guarantee the rights of women living on the streets. From the field of gender studies and their interseccionalities and the anthropology of state administration practices, on the one hand, ways of producing, managing and/or neutralizing moral judgments will be analysed, as well as to build the figure of a person destitute of rights. On the other hand, the management modalities that have been carried out by mechanisms of regulation and accountability singularized in the maternal figure will be explored, such as the Childhood and Youth Court, Public Defender’s Office, Unified Health System and Unified Social Assistance System services. In this sense, the article focuses on the street situation, but apprehends it from a political perspective greatly expanded, as it investigates the public actors that generate and regulate the “vulnerability” of women on the streets.

Keywords: motherhood; gender; drugs; street; vulnerability

Introdução

Julho de 2021: Andrielli, uma jovem negra de 21 anos, moradora de Florianópolis (Santa Catarina), teve a filha, Suzy, *afastada pelo Conselho Tutelar três horas após o parto e foi proibida de amamentar. Logo após o parto sofreu uma laqueadura tubária sem consentimento*. A justificativa para essa separação entre mãe e filha estaria no fato da jovem enfrentar dois processos de destituição do poder familiar, *suposto uso de drogas e a vida em situação de rua durante a gestação* (Guimarães, 2021, grifos nossos).

Fevereiro de 2018: Janaína Aparecida Quirino, 36 anos, moradora de rua na cidade de Mococa (São Paulo), deu entrada no hospital para parir seu oitavo filho. Segundo relatos e reportagens, a Vara de Mococa autorizou o *procedimento de laqueadura involuntária sem o acompanhamento de um advogado/a ou da defensoria pública*. Entre as justificativas apresentadas pelo juiz para determinar a esterilização está o fato de que, na ocasião, *Janaína já era mãe de sete filhos, usuária de drogas e estava em situação de rua* (Agência Brasil, 2018, grifos nossos).

Novembro de 2016: Joana, uma mulher negra de 36 anos que morava em Belo Horizonte (Minas Gerais) com o companheiro. Durante nossa conversa, ela me contou que a “justiça tirou” dois dos seus três filhos, apesar de fazer todo o pré-natal e ter acompanhamentos médicos/as. Consequentemente, havia perdido o vínculo com uma das crianças (tendo em vista que a criança já havia passado pelo processo de adoção). Joana não havia sido encaminhada para Defensoria Pública e seu caso foi enviado à Vara da Infância e Juventude sem o cumprimento das regras do fluxograma que dita o protocolo para o “atendimento às gestantes com uso prejudicial de álcool e outras drogas” na capital mineira. Na época ela visitava a filha bebê no abrigo uma vez por semana e persistia lutando para conseguir a guarda e, desta vez, ter a chance de cuidar da filha (Caderno de campo, 2016, grifos nossos).

Nos últimos anos, situações envolvendo destituições e violações de maternidades descritas como “inadequadas” ou “incapazes” foram evidenciadas e tornadas debate público, reunindo mobilizações e sucessivas denúncias de defensores de direitos e ativistas sociais no Brasil. O que se passou com Andrielli, Janaina e Joana ilustram vários outros casos¹ similares, que conectam trajetória de vida nas ruas, suposto uso de álcool e outras drogas, sofrimento mental, raça, etnia e pobreza,² que têm sido noticiados em várias cidades do país e já há, inclusive,

- 1 Os nomes de mulheres, bebês e familiares dos casos apresentados ao longo do artigo são fictícios, com exceção dos casos citados de fontes como reportagens de jornais e textos produzidos e publicados. Do mesmo modo, alguns dados biográficos não serão detalhados em respeito às interlocutoras da pesquisa.
- 2 Em outros casos, envolviam maternidades LGBT, não binárias, as maternidades em contexto de violência doméstica, as maternidades das mães solo, de adolescentes, presas, migrantes, de comunidades tradicionais (quilombolas, ribeirinhas, indígenas, ciganas e/ou de outros pertencimentos étnicos), de terreiros, as maternidades de trabalhadoras sexuais, mulheres com HIV/AIDS, de mulheres com deficiência, mulheres vítimas de Zika entre tantas outras.

uma crescente produção acadêmica em torno do tema, sobretudo nas áreas de interface entre ciências sociais, saúde coletiva, direito, assistência social e psicologia.³

Como é possível notar nessas narrativas veiculadas, a apreensão e o temor generalizado a qualquer conexão entre maternidade (e/ou infância), uso de drogas (com destaque para o crack) e trajetória de rua podem rapidamente fazer com que mulheres percam o direito de ficar com seus/suas filhos/as através da destituição da guarda e de processos de adoção que excluem a família extensa. Tal arbítrio, não raro, vem acompanhado de violência obstétrica⁴ e de barreiras ao acesso de serviços do Sistema Único de Saúde (sus) e do Sistema Único de Assistência Social (suas), tais como a negação ao aborto nos casos previstos pela legislação brasileira,⁵ proibição do aleitamento materno, recusa de analgesia e até mesmo esterilizações involuntárias.

Esse artigo ancora-se em pesquisa realizada para a dissertação de mestrado intitulada “Quem tem o direito de querer ter/ser mãe: dinâmicas entre gestão, instâncias estatais e ação política em Belo Horizonte (Minas Gerais)” (Alves, 2020), que se deteve sobre as práticas operadas em torno da “retirada compulsória de bebês” e que colocavam em relação o judiciário, a gestão municipal de Belo Horizonte e a Coletiva em apoio às mães politizadas como órfãs”, ator emergente que se destaca por instalar novos sentidos críticos aos julgamentos moralizantes sobre a maternidade nas ruas. Naquele contexto, o crack aparecia como elemento central na constituição da maternidade regulada, lida na chave de um “problema social”. A presente proposta descreve como o embate foi produzido a partir dos termos morais da discussão e de concepções específicas, por vezes conflitantes, de vulnerabilidade.

Nossa intenção com essa discussão é evidenciar a emergência do campo de disputa discursiva em torno dos direitos sexuais e reprodutivos acerca da gestão da vida de sujeitos e populações precarizadas. Isto significa afirmar que as gramáticas que iremos apresentar são produto de dinâmicas morais e políticas marcadas e atravessadas por eixos de diferenciação (Piscitelli, 2008) - sejam eles de gênero, raça, etnia, classe, geração, etc. - que materializam normas e

3 Para discussões recentes nas áreas da saúde, psicologia e assistência social, em diferentes contextos do país, ver: Lima, 2018; Dias, 2019; Araújo, 2015; Fleury, 2015; Macedo, 2016; Carajá, 2019; Pontes, 2019; Rosato, 2018; Reis, 2019; Rios, 2017; Santos, Batista e Constantino, 2021; Santos, 2016; Santos, Batista e Constantino, 2020. Já na área das ciências Sociais ver: Barros e Nery, 2022; Malheiro, 2018; Lima, 2018; Sarmiento, 2017, 2020; Araújo, 2015; Caldeira, 2019.

4 A título de exemplo, podemos citar a prática de uso excessivo de medicamentos e intervenções no parto, a realização de práticas consideradas desagradáveis e muitas vezes dolorosas (não baseadas em evidências científicas), episiotomias, indução do trabalho de parto e a proibição do direito ao acompanhante durante o trabalho de parto, omissão do atendimento ou tratamento hostil entre outros. Não possuímos uma legislação federal específica contra a violência obstétrica, há apenas iniciativas estaduais e municipais.

5 O aborto legal é permitido no Brasil apenas em três casos: a) gravidez de risco à vida da gestante; b) gravidez resultante de violência sexual; e c) anencefalia fetal, conforme o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2012 (ADPF n.º 54).

marcos legais, bem como modos de gestar corpos e de gerir experiências, maternidades e famílias.

O jogo de palavras do título do artigo foi inspirado na proposição “gestar e gerir” cunhada por Antonio Carlos de Souza Lima (2002). O autor utilizou dos termos para descrever o campo - generificado - das práticas, técnicas e saberes constitutivos do que ele chamou de Administração Pública, no qual o gestar é definido no dicionário como ‘formar e sustentar (um filho) no próprio ventre’, e o gerir, como ‘exercer gerência sobre, administrar, dirigir, gerenciar’ (p. 16).

O artigo que segue organiza-se da seguinte forma: na próxima seção nos dedicamos à breve apresentação da metodologia utilizada. Em seguida, faremos uma contextualização sobre a retirada compulsória de bebês de mulheres em situação de rua em Belo Horizonte. Posteriormente, analisaremos os repertórios que envolvem a produção da figura das mães em “situação de vulnerabilidade e risco” como justificativa ao acesso à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos por meio de técnicas de atenção e cuidado em saúde e assistência. Por fim, mostraremos como as noções de “risco”, “vulnerabilidade” e “cuidado”, sobrepostas aos repertórios da criminalização e culpabilização, emergem como justificativa moral para a ilegitimidade desses mesmos direitos.

Pesquisadoras do/no campo e suas rotas teórico-analíticas

O material aqui discutido se construiu a partir de encontros e andanças - da pesquisa até a escrita - entre Belo Horizonte e Campinas (São Paulo) e de um duplo lugar ocupado pelas autoras, enquanto pesquisadoras e ativistas. A pesquisa de campo se concentrou, intensamente, durante o primeiro semestre de 2019. Baseando-se em uma abordagem qualitativa de cunho etnográfico, o trabalho de campo se deu conjugando análise documental, acompanhamento de reuniões da Coletiva em apoio às mães órfãs, presença em audiências públicas, entrevistas semiestruturadas com as/os gestoras/es da política pública municipal de Assistência Social e saúde, com as/os trabalhadoras/es das unidades de acolhimento institucional e com as ativistas.

Essas distintas estratégias metodológicas se conectam e se complementam, respectivamente. Há um ponto importante a destacar. O debate público que toca atores da administração pública se faz, sobretudo, por meio de papéis e não apartado deles. O que, a seu turno, nos permite elaborar algumas reflexões sobre como tais artefatos acabam por produzir narrativas, classificações, saberes e instituições públicas em conflito. Tais papéis não são apenas uma via de acesso às instituições onde circulam, mas também registros que carregam

em sua materialidade (forma e conteúdo) uma série de disputas narrativas, denúncias, responsabilidades e demandas por direitos. Assim, dedicamos atenção tanto para a estética, conteúdo, vocabulário e fluxos de circulação, quanto para os engajamentos conduzidos pelo “ato de documentar”, ou seja, para como ele é forjado, oficializado e quais seus sentidos e efeitos nos distintos contextos de sua fabricação (Vianna, 2014).

Durante o mestrado, foram levantados aproximadamente 31 documentos, entre manifestos, recomendações, ofícios, pareceres, deliberações, notas técnicas, resoluções, notas públicas, recursos, notas taquigráficas e leis. Seu recorte temporal cobre desde a data da primeira normativa, em meados de 2014 até julho de 2018. Em síntese, isso envolve uma gama variada de distintos papéis: a transição das Recomendações para a Portaria, que vigorou até 2017 (quando foi suspensa); os documentos caracterizados por disputar narrativas e produzir denúncias; a documentação que tematiza questões em torno do fluxo de atendimento e práticas de cuidado de mulheres e bebês; e, atas resultantes de reuniões e audiências públicas, que revelam, em suas gramáticas e argumentos próprios, avaliações e disputas de autoridade. Para cada um dos documentos aqui citados, nosso acesso se deu mediante pesquisa sistemática do blog “de quem é esse bebê” elaborado por ativistas da coletiva e, posteriormente, ao longo da participação e interlocução com a rede de atores do campo de pesquisa.

Outra modalidade documental utilizada foi o material da imprensa, reunido mediante o levantamento de reportagens publicadas em jornais, blogs e redes sociais. Buscou-se, nesse sentido, investigar a cobertura do caso tal qual foi feita pelos jornais de grande circulação, principalmente no Estado de Minas Gerais, tomando como ponto inicial as primeiras notícias veiculadas, em meados de 2012 até meados de 2017. A composição das aproximadamente 44 reportagens reunidas foi estruturada em termos de seus formatos e estão distribuídas em notas, notícias, textos de blogs, publicações em redes sociais e reportagens que abordaram a temática. Suas escolhas se deram em função de sua relação com a temática do uso de drogas, sobretudo o crack, e a maternidade, da divulgação dos embates do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e Promotoria com a gestão municipal, ou, por descortinarem as estruturas das unidades de acolhimento institucional de crianças e adolescentes na capital mineira.

Além disso, elaboramos entrevistas semiestruturadas com a intenção de compreender como são configuradas as narrativas, as moralidades, os saberes técnicos e as dinâmicas de aliança e conflito entre os atores. Ao todo 8 entrevistas foram realizadas com aproximadamente 13 interlocutoras. Dentre elas, profissionais da saúde pública, assistência social, psicologia, gestoras da gestão municipal, ativistas, discentes e pesquisadoras acadêmicas.

Adotamos aqui uma perspectiva analítica atenta às similitudes, complexidades e processualidades inerentes ao Estado, na medida em que enfocamos a dimensão intrincada de instituições, aparatos burocráticos, atores, gramáticas de direitos e causas políticas. Tais interesses de pesquisa se desenvolvem em diálogo com uma literatura dedicada a tomar o Estado não como uma entidade uniforme e fixa, mas como um campo de disputas, de cunho processual e heterogêneo, atravessado por distinções e pluralidades situacionais (cf. por ex., Aguião, 2018; Ferreira, 2015, 2011; Vianna e Lowenkron, 2017; Nadai, 2018). Ainda, vale destacar que as questões de gênero e os processos de Estado são imbricadas (Vianna e Lowenkron, 2017) e que gênero não se produz sem articulações com processos de racialização, relações de classe, geração, sexualidades, nacionalidade, etc.

A produção da “separação compulsória” como um problema social

... e vai dizer que as mulheres nas maternidades privadas não usam drogas?? Tá zoando com a minha cara, não é? [risos] Claro que usam, mas é isso. Para mim é fiscalização da pobreza e é uma imposição de uma forma de maternar sem respeitar as diversas formas possíveis de exercer a maternidade (Entrevista a profissional do Serviço Social de Belo Horizonte, 2019).

Em Belo Horizonte, a discussão relativa a práticas de “retirada compulsória” de bebês de mães “em situação de vulnerabilidade social” foi tomando cada vez mais evidência, principalmente, nos espaços de promoção e defesa dos direitos das mulheres, de crianças e adolescentes, da Luta Antimanicomial,⁶ do Movimento Nacional da População em Situação de Rua⁷ (MNPR) e no bojo da assunção do crack como problema público no país (Rui, 2014). Nos meses de junho e agosto de 2014, a 23.^a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude Cível de Belo Horizonte⁸ expediu duas Recomendações endereçadas às Maternidades públicas e às Unidades Básicas de Saúde da cidade: as Recomendações n.º 05/2014 e n.º 06/2014, que fizeram crescer os casos de “retirada compulsória” nas maternidades públicas da capital mineira, utilizando como justificativa a afirmação de “suspeita de situação de grave risco”, ou seja, de que determinadas mulheres (e famílias) não seriam capazes de prestar cuidado e proteção aos seus filhos/as.

6 Movimento que se caracteriza pela luta pelos direitos das pessoas com sofrimento mental. Seus integrantes questionam o modelo clássico de assistência centrado em internações em hospitais psiquiátricos, denunciam as graves violações de direitos e propõe a reorganização do modelo de atenção em saúde mental no Brasil.

7 O movimento surgiu em 2004, após o assassinato de sete pessoas em situação de rua na Praça da Sé, região central da capital paulista. Desde então, pessoas com trajetória de vida nas ruas de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre etc. iniciaram mobilizações para consolidar o MNPR. Para um estudo mais adensado das mobilizações no contexto brasileiro ver: De Lucca, 2016; Melo, 2017; Rui, 2013; Costa, 2017; Lemões, 2017.

8 Os nomes de membros do judiciário serão citados integralmente, pois estão diretamente relacionados a períodos administrativos e decisões documentadas em normativas de várias instâncias jurídico-estatais como Vara Cível da Infância e Juventude de Belo Horizonte, MPMG, etc.

Dessa maneira, instituições de saúde, de assistência social e o judiciário (particularmente as Varas da Infância e Juventude) passaram a ser acionadas como responsáveis pela administração dessas gestações e do destino dessas mães, crianças e famílias. Destaca-se daí o processo social e jurídico que culminava na destituição da guarda das mães (ou do convívio familiar), em que imediatamente após o parto e nascimento dos filhos/as, a situação era comunicada ao poder judiciário, que encaminhava o recém-nascido para unidades de acolhimento (popularmente conhecidas como abrigos), a partir da aplicação de medidas ditas de proteção.

Após a expedição das Recomendações, uma série de notícias de forte repercussão passou a publicizar o aumento dos casos de “separação” de bebês das suas mães, associando o “problema” a outros dois fatores interconectados: o uso de drogas (sobretudo crack) e a superlotação e falta de estrutura de abrigos para crianças e adolescentes:

No triste cenário do crack em Belo Horizonte, nada incomoda mais do que flagrar grávidas carregando suas barrigas, que sobressaem nos corpos emagrecidos pela droga pesada. Dominadas pelo vício, estas mães fritam a pedra no cachimbo, mesmo sabendo dos danos irreversíveis aos filhos, como baixo peso, problemas neurológicos e até paralisia cerebral [...]. Retirados das maternidades logo após o parto, os bebês estão sendo afastados de suas mães biológicas, dependentes de álcool, de crack e de outras drogas, por recomendação das promotoras de Justiça da Infância e da Juventude Matilde Fazendeiro Patente e Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema (Kiefer, 2014a, grifos nossos).

O destino dos mais de 100 filhos de mães dependentes de álcool, crack e outras drogas, os chamados “órfãos do crack”, que já lotaram quatro abrigos de Belo Horizonte” (Kiefer e Paranaíba, 2014, grifos nossos).

Enquanto Prefeitura de Belo Horizonte e Ministério Público não se entendem sobre o destino dos bebês de dependentes do crack, entidades ligadas aos direitos da mulher e da criança reagiram nesta segunda-feira com um manifesto contra a separação de mães e filhos, revelada pelo Estado de Minas. Duas recomendações emitidas pelo MP estão enchendo os abrigos de filhos de mães envolvidas com álcool e drogas (Paranaíba, 2014, grifos nossos).

Vale ressaltar ainda a série de reportagens “Nascidos do crack” do MGTV 1.^a Edição, na qual o programa televisivo chama atenção, sem precisar a origem dos números, para as “mais de 480 crianças geradas por usuárias de crack [que] são abandonadas por ano em Belo Horizonte e [a]os 40 recém-nascidos abandonados nas maternidades ou retirados por força judicial” todo mês na cidade. Em entrevista para a reportagem, as promotoras afirmam (sem provas) que tomaram tal atitude em decorrência da falta de políticas públicas para “gestantes usuárias de crack, que ganham os bebês sem acompanhamento pré-natal e frequentam a cracolândia mesmo grávidas, pondo em risco a vida delas e a da criança na barriga” (G1 MG, 2014, n. p.).

Contrariamente ao argumento da Promotoria, as integrantes da Coletiva estudada elencaram a importância do trabalho da rede de serviços municipais para conduzir os casos de modo integrado e intersetorial, atento às singularidades. Uma interlocutora da pesquisa, que atua no âmbito da gestão na área da saúde, conta que o Conselho Municipal do Direito à Criança e do Adolescente, na época, criou um “grupo intersetorial e interinstitucional para discutir qual seria a função do conselho tutelar”, uma vez que o judiciário mineiro estava cobrando de alguns conselheiros/as tutelares respostas sobre o acompanhamento de determinadas “famílias cujas mulheres eram usuárias de drogas e estavam gestantes ou puérperas no hospital”. A interlocutora e outras/os profissionais enfatizavam que a “maternidade era local de cuidado, não espaço para você ficar definindo capacidade protetiva sem um acompanhamento, sem oferta e sem cuidado” e que, portanto:

... fizemos uma *discussão sobre o que está por trás do uso de drogas, que a maioria das mulheres tem um percurso de muita violação, violência, que o uso de drogas tem que ser lido como um sintoma psíquico e não a causa dos problemas*. Então a gente falava isso, mas era de uma insensibilidade...
(Entrevista a profissional do Serviço Social de Belo Horizonte, 2019, grifos nossos).

Assim, em torno da questão de como se opor à “separação compulsória”, surge e adquire força política uma rede de profissionais cuja trajetória perpassa o ativismo em Direitos Humanos, articulado em torno das intersecções entre feminismo, luta antimanicomial e antiproibicionista e que nesse contexto se articulou em torno da proteção jurídica e social do vínculo entre mães e bebês. É no seio desta discussão que as gestantes, mães e mulheres foram definidas politicamente como “Mães Órfãs”. Posteriormente, a categoria passou a ser amplamente utilizada por profissionais, pesquisadoras/res, ativistas e se tornou nome da Coletiva. No bojo dessa atuação, foram realizadas ações com vistas à sensibilização da sociedade, a partir de diversas deliberações, moções e pareceres de proteção aos direitos das mulheres e bebês em Audiências Públicas na Câmara Municipal de Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e na Câmara de Deputados do Congresso Nacional (Alves, 2020). Atualmente, a Coletiva é amplamente reconhecida como um dos primeiros e mais importantes movimentos do cenário nacional voltados para a temática da “separação compulsória”.

Vale destacar que, apesar de o nome da coletiva ser atribuído para designar as mulheres diretamente “afetadas” pelas normativas, a composição da coletiva não conta com suas participações. Muitas dessas ativistas possuem relações de cunho fortemente afetivo com as mães, todavia justificam que essas encontram-se distantes do movimento por diversos fatores, entre eles recursos e estrutura adequada para reuniões, bem como a própria situação de “vulnerabilidade social” em que se encontram. Trata-se, portanto, de arenas movidas,

principalmente, por mulheres - pesquisadoras/res, parlamentares, profissionais da saúde, assistência social, do judiciário, universitárias e ativistas - engajadas com a gestão posta em operação a partir do corpo de outras mulheres. As participantes da coletiva “falam” pela/por essas mães que não conseguem comparecer, ou seja, a “mãe vulnerável” ou a “mãe órfã” se constitui enquanto uma unidade simbólica que representa uma causa política, ainda que não seja a sua protagonista.

Vale ressaltar que um importante ponto mobilizado tanto pela coletiva quanto por alguns profissionais de saúde e assistência da capital - de certa forma também por este artigo - consiste em anunciar as “mães órfãs” como mulheres “negras e pobres”. Mais do que categorias descritivas, tais recursos indicam confronto com o racismo e o classismo institucional do judiciário - que é, a todo o tempo, denunciado como perpetrador da violência e injustiça dirigida a essas mulheres. Nesse sentido, à medida que se formula um enfrentamento político, de perspectivas, um primeiro deslocamento do “problema” é evidenciado: à decorrente culpabilização e responsabilização dessas mulheres e, conseqüentemente, às acusações de “incapaz” e/ou “viciada” é contraposta uma noção de vulnerabilidade assentada em processos de desigualdades raciais e sociais de longa data, chancelados, inclusive, pelo judiciário.

As variadas formas de narrar e administrar vulnerabilidades

Se a pessoa está em situação de vulnerabilidade social ela tem que ser punida ou tem que ter acesso? Ela tem que ter acesso, ela precisa de acesso, acesso a direitos sociais, a condições mínimas de moradia, a condições mínimas de educação, de segurança alimentar, de tudo. E não de ser punido. Se eu digo que uma mulher está em situação de vulnerabilidade social e por isso ela não pode ser mãe eu estou dizendo que o Estado está punindo-a por não ter acesso e o Estado está punindo-a de novo porque já que ela não tem acesso, ela não pode ser mãe... (Entrevista a profissional do Serviço Social de Belo Horizonte, 2019).

Esta fala foi proferida num contexto de questionamento do termo “mulheres em situação de vulnerabilidade social”, tão utilizado por profissionais das áreas da saúde, da psicologia e da assistência social em referência às mulheres separadas de seus filhos. A profissional, mãe, casada, branca, de aproximadamente 33 anos e que trabalhava no Consultório de Rua na época, salientava os ganhos e a importância de deslocar o uso corrente da noção de “usuárias de drogas”, “usuárias de crack”, entre outros correlatos, para a “situação de vulnerabilidade social”. Na sua leitura, utilizar tal termo, no âmbito das políticas públicas, era ter um olhar mais ampliado sobre as experiências das usuárias dos serviços, sobre as condições sócio-políticas que dão contorno ao uso radical de crack em situação de rua, bem como sobre a (in)ação

do Estado em facilitar e garantir acesso a políticas públicas. Tal enquadramento possibilitou formular que a vulnerabilidade precisa ser protegida, não punida.

Em jornais de grande circulação, por sua vez, era comum que a referência às mulheres se desse a partir de termos como “mães usuárias de substâncias entorpecentes”, “mães do crack”, “mães viciadas” e “mães órfãs”, ao passo que os bebês eram referenciados como “órfãos do crack” e “nascidos do crack”. Tais categorias se tornaram centrais nas discussões, documentos, reuniões e audiências públicas e através delas se verificou um interessante jogo de luz e sombra entre o judiciário - voltado às questões da infância e da juventude - a Coletiva em apoio às Mães Órfãs e as instituições de saúde e assistência social. Cada ator ou instância lançava visibilidade para determinados campos de suas práticas, saberes e modalidades de gestão, todavia diferenciavam, burocrática e legalmente, suas formas de fazê-lo na arena pública. Decorre disso a preocupação com a ambivalência dos usos dos termos “vulnerabilidade” e “risco” como categorias em torno das quais se depreende as disputas do fazer e desfazer de direitos (Vianna, 2013).

Ou seja, tratam-se de categorias materializadas e inscritas a partir de uma multiplicidade de enredos, técnicas de cuidado, documentos e diretrizes médicas e jurídicas, de que dá exemplo a Nota Técnica n.º 01/2016 publicada em 10 de maio de 2016, pelo Ministério da Saúde (MS) e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Esse documento, de dezoito páginas, apresentava o posicionamento dito técnico, com diretrizes e fluxogramas para a qualificação das ações voltadas para as “mulheres e adolescentes em situação de rua e/ou usuárias de álcool e/ou crack/outras drogas” e seus filhos/as (Brasil, 2016, p. 1). Direcionado, sobretudo, a gestores/as e profissionais do SUAS e SUS, o documento destaca que a falta de recursos materiais não configura um motivo em si para a separação familiar.

A Nota sugere que as práticas de atendimento de profissionais de saúde e assistência social prestem atendimento integral e humanizado, a partir do reconhecimento da universalidade dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos. Ela também argumenta que a “vulnerabilidade social em que se encontram não pode ser utilizada como condicionante para a manutenção ou eliminação dos direitos fundamentais” e que, portanto,

a não submissão de mulheres que exercem o direito de escolher fazer uso de álcool e/ou crack/outras drogas, aos cuidados em saúde, ainda que gestantes ou nutrízes, não pode interferir no seu acesso com qualidade aos serviços de saúde e assistência social, quando assim desejar (Brasil, 2016, p. 7).

É importante destacar a força com que o termo “vulnerabilidade social” aparece nesse documento. A palavra “vulnerabilidade” aparece seis vezes, e a palavra “risco” dez vezes, ambas associadas às situações das mulheres/mães e suas famílias. Curioso observar que enquanto a palavra “mulher/mulheres” aparece setenta e oito vezes e a palavra “mães/mãe” aparece vinte

e sete (e materno duas vezes), a palavra “homem” não aparece uma única vez, já o termo “pai” aparece apenas três vezes e “paterno” uma, o que nos fala de processos estruturais nos quais os atributos de gênero têm papel central.

Já no âmbito municipal, em 25 de novembro de 2017, foi publicada no *Diário Oficial do Município* a Portaria Conjunta n.º 001/2017 da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) e da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC) que estabelece “diretrizes para a articulação e proteção social intersetorial e institui Fluxograma de Atenção às Gestantes, Puérperas e Bebês em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social e Pessoal”. Na Portaria, destacam-se dois pontos fundamentais: o primeiro deles consiste na elaboração de um plano de oferta de atenção e cuidado às mulheres, gestantes e puérperas em “situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal” por meio da Rede Intersetorial, composta por profissionais do SUS e do SUAS, dentre outros serviços do município de Belo Horizonte. O segundo ponto é que a descrição do termo vulnerabilidade se impõe à conceituação dos termos “vulnerabilidade” e “risco” comumente utilizados, como exemplifica o 2.º parágrafo do artigo 3 da Portaria:

... são consideradas, potencialmente, em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal, *as gestantes e puérperas com sofrimento mental, em uso prejudicial de álcool e outras drogas, vítimas de violência, com trajetória de vida nas ruas*, não sendo desconsideradas outras possíveis situações (Prefeitura de Belo Horizonte, 2017, p. 1, grifos nossos).

Na Portaria Conjunta, a palavra “mãe(s)” aparece dez vezes, “mulher(es)” quinze vezes, “pai” nenhuma, parceiros/as uma vez; já “vulnerabilidade(s)” e “risco(s)”, ambos, vinte duas vezes. Isso posto, a tentativa aqui é fazer aproximações entre algumas narrativas presentes em entrevistas e em documentos que permitam refletir sobre como a noção de “vulnerabilidade” é potente para pensar as práticas e processos de Estado. Para tanto, é preciso partir do entendimento de que tal noção não deve ser entendida e tratada como auto evidente, mas apreendida de forma relacional, considerando seu contexto de enunciação, político, histórico e social.

Entre “filhos do crack” e “mães viciadas”: moralidades em jogo

Ao analisar uma série de notícias que tiveram grande impacto para o debate em torno da “separação compulsória”, destaco algumas reportagens em que atores do judiciário foram entrevistados e utilizaram da visibilidade midiática para legitimar suas decisões jurídicas. Em entrevista emblemática, a promotora da Vara da Infância e Juventude de Belo Horizonte, Matilde Patente, defendeu:

Ninguém está aqui querendo tomar as crianças das mães delas. Mas será que nossa insensibilidade chegou ao ponto de *achar normal deixar um recém nascido com uma usuária de crack, que não consegue cuidar dela mesma?* [...] O poder público está inerte em relação ao crack não é de hoje. Não existem clínicas nem vagas em hospitais para *internar involuntariamente essas gestantes. Ocorre que a vida não pertence somente a elas. Acima de tudo, a Constituição manda proteger o nascituro* (Kiefer, 2014a, grifos nossos).

Já na entrevista com o juiz da infância Marcos Flávio Lucas Padula, ele manifesta que sua preocupação é “proteger a criança em *momento de grande vulnerabilidade* [...] estão falando *como se os pais fossem sempre vítimas*, como se não pudessem ser responsabilizados. Não quero ser alarmista, mas se for assim caminhamos para um *genocídio de criança[s]*” (Estado de Minas, 10/12/2014, grifos nossos). Vale notar que tanto o argumento da promotora quanto do juiz também se utiliza de um repertório da vitimização, mas desloca o sujeito “vulnerável”, impingindo ao “nascituro”⁹ o status de verdadeira vítima da situação. Tal argumento expressa-se a partir de um conflito de direitos: ou o direito das mulheres às crianças ou das crianças à vida familiar.

A mãe, portanto, é inescapavelmente categorizada racial e sexualmente como a “perigosa”, “incapaz” e/ou “viciada”, à medida que, nas instituições do judiciário, comumente a “vulnerabilidade” é consequência da fragilidade individual diante do “poder do crack”. Assim, as “vulneráveis” são aquelas que, diante das práticas de uso de drogas e trajetória de rua, são incapazes e oferecem “risco” aos filhos/as, justificando a “separação compulsória” sob a óptica da tutela e proteção da criança ou “nascituros”.

Um caso emblemático que ilustra a configuração da “separação compulsória” como um problema, e que foi figurado como aquele que “mais impressionou” a Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Belo Horizonte foi o de D. R. Segundo a história divulgada em uma reportagem, D. R. havia dado à luz ao seu vigésimo filho no Hospital Santa Casa de Misericórdia. Segundo o jornal *Estado de Minas*, D. R.

... deu entrada no Juizado da Infância e da Juventude a pedido da Santa Casa de Misericórdia. A mulher havia acabado de dar à luz ao que afirmava ser seu 20º filho, e manifestou em audiência a vontade de entregar a criança para adoção, assim como “outros oito ou 10 que já haviam sido encaixados em famílias substitutas, sendo que ela não se lembrava ao certo”, conforme consta no processo. Tampouco sabia dizer algo sobre o paradeiro dos outros 10 ou 12 filhos, nem havia visitado qualquer um deles enquanto estavam recolhidos

9 Vale destacar que está em tramitação no Congresso Nacional o projeto de lei 478/2007, conhecido como Estatuto do Nascituro. De acordo com a proposição o objetivo é garantir a proteção integral ao feto (ainda não nascido), ou seja, assegurar o direito à vida, à saúde e a políticas públicas que garantam o seu desenvolvimento. Nesse sentido, a temática do artigo atravessa debates mais amplos de projetos políticos e institucionais brasileiros que articulam narrativas reacionárias e neoliberalismo.

em abrigos. *Sob o domínio da pedra*, a mulher compareceu à audiência pública, em 2012, em cadeira de rodas, depois de levar 13 tiros nas pernas na região do Alto Vera Cruz. Ela revelou em juízo que, aos cinco meses de gravidez, havia sofrido um atentado motivado por questões relativas a drogas. O pai do último filho havia sido morto, também naquele ano, devido a rixa com traficantes. Depoimentos como esse estimularam o MP a baixar as Recomendações 05 e 06, este ano, determinando a comunicação imediata à promotoria e ao Juizado sobre *o nascimento de bebês filhos de mães com histórico de abuso de crack* (Kiefer, 2014b, grifos nossos).

Como fica evidente mediante as narrativas sobre o caso de D. R., perpassam nesses léxicos um enquadramento da vitimização que está profundamente relacionado ao “drama” do “uso abusivo do crack” e da criminalidade, sobretudo do tráfico de drogas. Mais que tudo, o número de filhos já paridos e “doados”, os fatos de estar “dominada pela pedra” e ainda na cadeira de rodas durante a audiência pública vão compondo elementos de uma narrativa que apreende a retirada de bebês como inexorável. A exposição reiterada desse caso excepcional converge com o que Laura Lowenkron (2015) apreende como um “dispositivo de sensibilização”, cuja “eficácia moral” é obtida com a comoção da opinião pública quando da necessidade de se tomar “providências” (p. 115).

O mesmo caso foi narrado por uma interlocutora da pesquisa, médica, branca de aproximadamente 55 anos, na época gestora na secretaria de saúde do município de Belo Horizonte, durante uma reunião convocada pela Vara da Infância, em que promotores e juízes teciam falas carregadas de “preconceitos” e estereótipos ao mesmo tempo em que silenciavam violações sofridas pelas mães:

Eles passaram primeiro um vídeo, daquela série, do documentário *Filhos do crack* que a Rede Globo fez. Logo em seguida vem a fala da promotora, ela fala que usou o vídeo para explicar a importância das recomendações: “Porque vocês viram, a gestante não quis fazer pré-natal!”, ela começa a fazer críticas à *mulher em situação de rua colocando o nascituro em risco*. E a gente conhecia a história dessa mulher, era uma história dramática, de *muita violação, era uma mulher negra*. Vivência de muita violação desde a infância (...) e *não tinha nenhuma compaixão na fala da promotora, o que ela dizia era que precisava tirar os filhos para salvar essas crianças*, e que precisava notificar e que, dentre outras coisas, esses meninos tinham que ser logo adotados porque ela achava que a adoção no Brasil era muito burocrática, que ela preferia a adoção internacional que não tinha tantas burocracias, e *que se na família a mãe gerou uma filha que depois se tornou usuária de droga essa família não presta para criar a neta...que a família extensa não presta, e por isso esses filhos tem que ser retirados*, preferencialmente, encaminhados para a adoção internacional, que era menos burocrática. Ninguém se contrapôs na mesa, nem quem estava no palco com ela, o juiz Padula, as outras promotorias, a única observação do promotor foi que deveria tirar o

termo usuária de droga para uso abusivo, tentando dar um pouco mais de seriedade, mas, com a mesma *mentalidade de criminalização, punitivismo e higienismo* (Médica e gestora em saúde, 2019, grifos nossos).

Como se observa, os processos de classificação em que são tornadas “incapazes”, “vulneráveis” e “perigosas” não se limitam apenas às mulheres, mas também a todas as relações ao seu redor. Conforme a crítica elaborada pela médica sugere, na visão dos operadores do direito, a mãe e todo seu arranjo familiar “não prestam para criar a neta”, isto é, são presumidamente julgados e afastados do cuidado com os bebês. Nesse processo, o esforço do judiciário é deslocar o status de verdadeira vítima da vulnerabilidade ao “nascituro” como justificativa moral para obstruir os direitos sexuais e reprodutivos das mães.

Por sua vez, para que o acesso a direitos sexuais e reprodutivos dessas mulheres fosse vislumbrado, as profissionais da rede de saúde e socioassistencial posicionavam as “mulheres em situação de vulnerabilidade” enquanto vítimas da desigualdade e exclusão social, para que as repreensões morais advindas do uso de drogas, trajetória de rua e sofrimento mental fossem minimizadas. Também estava evidente a crítica à retirada imediata sem que outras ações fossem imaginadas.

Elemento privilegiado para a produção de mulheres com trajetória de rua e/ou uso de drogas, vimos que a “vulnerabilidade” pode ser construída de diversas maneiras, seja como atributo de incapacidade e irresponsabilidade, seja pela via da desigualdade e vitimização. O judiciário, quando produz a mãe de 20 filhos, as mães que abandonam, a “mãe do crack” ou “mãe traficante”, engendra verdades e materializa direitos. Operado na via da hierarquização e da distinção, tal procedimento institui e separa “quem pode querer ser (ou ter) mãe” de “quem não pode”. Ao mesmo tempo, ativistas e profissionais também ao darem visibilidade à exclusão social, às discriminações e à ausência de políticas sociais vivenciadas pelas mulheres/mães visam deslocar as repreensões morais advindas do uso de drogas ou mesmo às condições adversas de se viver com uma criança nas ruas. O embate produz novos sujeitos de direitos e novas gramáticas de luta.

Considerações finais

A reprodução/maternidade nas ruas aparece nesse artigo como objeto de disputas políticas, morais e de saberes que se expressam em modelos “ideais” de gestar, parir, amamentar, maternar e cuidar. Ao refletir sobre a noção de “vulnerabilidade”, notamos como ela é potente para pensar as práticas e processos de Estado. Ao apreendê-la não como conteúdo “técnico”, mas a partir do que ela visibiliza e invisibiliza nas disputas, através dos diferentes atores, é

possível, à guisa de considerações finais, pontuar que tais categorizações são, ao mesmo tempo, produto e produtoras de práticas administrativas que, por seu turno, deslocam acusações, sensibilidades, saberes e reorganizam relações e vínculos familiares. Para além do acionamento da gramática dos direitos dessas mulheres e bebês, há também disputas de autoridades que são produzidas e que podem engendrar impasses na administração pública, seja nos acolhimentos institucionais, seja nas diretrizes dos SUS e SUAS, nas maternidades etc. (para muito além da vida dessas mulheres e de seus arranjos familiares).

Dessa maneira, a vida de mulheres grávidas nas ruas - sobretudo os discursos constituídos em torno a elas - torna-se perspectiva analítica privilegiada para capturar o cerne da força produtiva das tecnologias e vocabulários de governo, bem como seus efeitos em produzir e engendrar sujeitos e populações governáveis. Nesse aspecto, o campo dos direitos sexuais e reprodutivos se insere em uma arena de disputas mais ampla, permeada de moralidades, racismos, relações sociais assimétricas, de concepções religiosas e de disputas políticas, cujos contornos nacionais estão, mais recentemente, inclinados para uma agenda fortemente reacionária e anti-gênero que, entretanto, articula normativas humanitárias à gramáticas de dinâmicas religiosas, conservadoras e neoliberais.

Mais do que denunciar esta agenda, este artigo, entretanto, buscou descrever formas de como é possível construir embates públicos, inclusive por meio de ações e documentos; como é possível construir, através deles, um campo de pressão e incidência que, nesse caso, foi capaz de reverter as portarias. Se há uma agenda conservadora em curso, é preciso que também se faça ver que essas mulheres negras e pobres, violentadas de tantas maneiras, separadas compulsoriamente dos seus bebês, julgadas como incapazes, não estão sozinhas. Em torno delas orbitam outras mulheres que, como bem expressou uma de nossas interlocutoras, também pensam que se uma mulher não pode ser mãe porque está “em situação de vulnerabilidade”, o Estado a está punindo.

Referências

- Agência Brasil (2018). Esterilização compulsória de Janaína não é caso isolado, apontam entidades. Disponível em <https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-06/esterilizacao-de-moradora-de-rua-nao-e-caso-isolado-dizem-entidades>.
- Aguião, S. (2018). *Fazer-se no “Estado”: uma etnografia sobre o processo de constituição dos “LGBT” como sujeitos de direitos no Brasil contemporâneo*. Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
- Alves, A. O. (2020). “*Quem tem direito a querer ter/ser mãe?: dinâmicas entre gestão, instâncias estatais e ação política em Belo Horizonte (MG)*”. (Dissertação Mestrado em Antropologia Social, Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, São Paulo). Disponível em <https://hdl.handle.net/20.500.12733/1638993>.

- Araujo, M. S. M. (2015). *O uso de drogas e o recolhimento compulsório de crianças e adolescentes no Rio de Janeiro*. (Monografia Graduação em Serviço Social), Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
- Barros, M., e Nery, M. S. (2022). O caso Salomé: condições de rua, afastamentos institucionais e violências de gênero em Feira de Santana - BA. *Cadernos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo*, 7(32), 89-107.
- Brasil (1990, julho 13). *Lei n.º 8.069: Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências*. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm.
- Brasil (2016, maio 10). Ministério da Saúde e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional de Assistência Social. *Nota Técnica n.º 01/2016/MDS/MSaúde*. Disponível em https://dequemeestebebe.files.wordpress.com/2017/04/nt_conjunta_01_mds_msaude.pdf.
- Brasil (2007). *Projeto de lei 478-A/2007*. Disponível em https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=443584.
- Brasil (2012). Supremo Tribunal Federal. *Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 54*. Disponível em <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3707334>.
- Caldeira, Z. F. (2019). *A Produção Mães do crack: desconstruções e deslocamentos*. (Tese Doutorado em Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro). Disponível em <http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/14723>.
- Carajá, A. F. (2019). *Diário cartográfico das mães que perdem suas filhas e filhos pelas mãos do Estado*. (Dissertação Mestrado em Promoção da Saúde e Prevenção da violência, Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte).
- Costa, R. M. (2017). *Mil fitas na Cracolândia: amanhã é domingo e a craco resiste*. (Dissertação Mestrado em Estudos Brasileiros, Universidade de São Paulo, São Paulo). Disponível em https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/31/31131/tde-18012018-125836/publico/Corrigida_RobertaCosta.pdf.
- De Lucca, D. (2016). Morte e vida nas ruas de São Paulo: a biopolítica vista do centro. In T. Rui, M. Martinez, G. Feltran (Orgs.), *Novas faces da vida nas ruas* (pp. 3-43). São Carlos: Edufscar.
- Dias, T. M. (2019). *Cuidado às Mulheres Gestantes em Situação de Rua no Município de Campinas-SP: Clínica no Limite e o Limite da Clínica*. (Dissertação Mestrado em Saúde Coletiva, Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, Campinas).
- Ferreira, L. C. de M. (2011). *Uma etnografia para muitas ausências: o desaparecimento de pessoas como ocorrência policial e problema social*. (Tese de Doutorado defendida no Programa de Pós-graduação em Antropologia Social, do Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro).
- Ferreira, L. C. de M. (2015). Formalidades, moralidades e disputas de papel: a administração de casos de crianças desaparecidas no Rio de Janeiro. *Dilemas. Revista de Estudos de Conflitos e Controle Social*, 8(2), 207-234.
- Fleury, G. L. de C. F. (2015). *Mães-no-crack: que lugar para a criança?* (Dissertação Mestrado em Pesquisa Clínica em Psicanálise, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro).
- G1 MG (2014, agosto 18). 23 % das mulheres viciadas em crack engravidaram 2 ou 3 vezes, diz estudo. Disponível em <http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2014/08/23-das-mulheres-viciadas-em-crack-engravidaram-2-ou-3-vezes-diz-estudo.html>.
- Guimarães, P. (2021). Jovem preta é afastada de bebê após nascimento em maternidade de Florianópolis. *Portal Catarinas*. Disponível em <https://catarinas.info/jovem-preta-e-afastada-de-bebe-apos-nascimento-em-maternidade-de-florianopolis/>.
- Kiefer, S. (2014a, dezembro 1). MP determina que bebês de mães usuárias de crack sejam levados para abrigos em BH. *Jornal Estado de Minas*. Disponível em http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2014/12/01/inter-na_gerais,595140/bebes-de-viciadas-em-crack-sao-levados-para-abrigos-em-bh.shtml.
- Kiefer, S. (2014b, dezembro 6). MP revela caso de mãe viciada em crack que já teve 20 filhos e não cuidou de nenhum. *Jornal Estado de Minas*. Disponível em <https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2014/12/06/>

- interna_gerais,596964/mp-revela-caso-de-mae-viciada-em-crack-que-ja-teve-20-filhos-e-nao-cui.shtml.Kiefer, S., e Paranaíba, G. (2014, dezembro 2). Destino dos bebês de dependentes de crack gera impasse entre MP, PBH e movimentos sociais. *Jornal Estado de Minas*. Disponível em https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2014/12/02/interna_gerais,595491/destino-dos-bebes-de-dependentes-de-crack-gera-impasse-entre-mp-pbh-e.shtml.
- Lemões, T. (2017). *De vidas infames à máquina de guerra: etnografia de uma luta por direitos*. (Tese Doutorado em Antropologia), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre). Disponível em <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/172916>.
- Lima, A. C. de S. (2002). *Gestar e gerir. Estudos para uma antropologia da administração pública no Brasil*. Rio de Janeiro: Relume Dumará-Núcleo de Antropologia da Política, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- Lima, M. S. de (2018). *A quem pertence essa gravidez? Reflexões sobre a maternidade/maternagem de mulheres que fazem uso de drogas e as agentes do Estado*. (Dissertação Mestrado em Ciências Sociais, Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro).
- Lowenkron, L. (2015). *O monstro contemporâneo: a construção social da pedofilia em múltiplos planos*. Rio de Janeiro: Eduerj.
- Macedo, F. dos S. de (2016). *A economia moral na atenção a gestantes que usam crack: uma análise das práticas cotidianas de cuidado*. (Dissertação Mestrado em Psicologia Social e Institucional, Instituto de Psicologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre).
- Malheiro, L. S. B. (2018). *Tornar-se mulher usuária de crack: trajetória de vida, cultura de uso e política sobre drogas no centro de Salvador, Bahia*. (Dissertação Mestrado em Antropologia, Programa de Pós Graduação em Antropologia da Universidade Federal da Bahia, Salvador).
- Melo, T. (2017). *Política dos “improváveis”: percursos de engajamento militante no Movimento Nacional da População de Rua*. (Tese Doutorado em Antropologia, Universidade Federal Fluminense, Niterói). Disponível em <http://ole.uff.br/wp-content/uploads/sites/16/2016/07/TOM%C1S-HENRIQUE-DE-AZEVEDO-GOMES-MELO.pdf>.
- Minas Gerais (2014). Ministério Público. *Recomendação n.º 05/2014*. Disponível em https://dequemeestebebe.files.wordpress.com/2017/04/recomendacca7acc830-5_2014mp.pdf.
- Minas Gerais (2014) Ministério Público. *Recomendação n.º 06/2014*. Disponível em https://dequemeestebebe.files.wordpress.com/2017/04/recomendacca7acc830-6_2014mp-1.pdf.
- Minas Gerais (2016). Vara Cível da Infância e Juventude da Comarca de Belo Horizonte. *Portaria n.º 3/2016, de 21 de julho de 2016*. Disponível em <http://apublica.org/wp-content/uploads/2017/07/Portaria-6-2016.pdf>.
- Minas Gerais (2017, agosto 7). Poder Judiciário. *Minuta de Portaria Processo de Medidas de Proteção: Suspensão dos efeitos da Portaria n.º 3 da Vara da Infância e da Juventude de Belo Horizonte de 2016*. Disponível em <https://dequemeestebebe.files.wordpress.com/2017/04/minuta-de-suspensc3a3-da-portaria-3vcij-bh2016-ofc3adcio-1342017-de-7deagosto2017.pdf>.
- Nadai, L. (2018). *Entre pedaços, corpos, técnicas e vestígios: o Instituto Médico Legal e suas tramas*. (Tese Doutorado Ciências Sociais, Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, São Paulo).
- Paranaíba, G. (2014, dezembro 2). Separação de bebês das mães dependentes de crack é alvo de críticas. *Jornal Estado de Minas*. Disponível em https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2014/12/02/interna_gerais,595462/separacao-de-maes-e-filhos-e-criticada.shtml.
- Piscitelli, A. (2008). Entre as “máfias” e a “ajuda”: a construção de conhecimento sobre tráfico de pessoas. *Cadernos Pagu*, (31), 29-63.
- Pontes, M. G. (2019). *Mães órfãs produzindo novos olhares a partir de modos de existência e resistência singulares*. (Dissertação Mestrado em Promoção da Saúde e Prevenção da Violência, Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Medicina, Belo Horizonte).

- Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) (2017). Portaria Conjunta SMSA/SMASAC n.º 0001/2017. *Diário Oficial do Município*, XXVI(5420). Disponível em <http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1187128>.
- Reis, G. M. dos (2019). *Mães Órfãs: cartografia das tensões e resistências ao abrigo compulsório de bebês em Belo Horizonte*. (Dissertação Mestrado em Saúde Pública, Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte).
- Rios, A. G. (2017). *O fio de Ariadne: sobre labirintos de vida de mulheres grávidas usuárias de álcool e outras drogas*. Dissertação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
- Rosato, C. M. (2018). *A vida das mulheres infames: genealogia da moral de mulheres usuárias de drogas e/ou em situação de rua*. (Tese Doutorado em Psicologia, Programa de Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco, Recife).
- Rui, T. (2014). *Nas tramas do crack: etnografia da abjeção*. São Paulo: Terceiro Nome-Fapesp.
- Santos, G. C. (2016). *Os sentidos construídos por profissionais de saúde inseridos em equipes de consultórios na rua da cidade do Rio de Janeiro sobre o consumo de crack por mulheres*. (Mestrado em Saúde Pública, Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro).
- Santos, G. C., Batista, T. W. de F., e Constantino, P. (2021). “De quem é esse bebê?": desafios para o direito à maternidade de mulheres em situação de rua. *Cadernos de Saúde Pública*, 37(5). Disponível em <https://www.scielo.br/j/csp/a/43W7b6cGCYqXXdHVYSMngPw/?format=pdf&lang=p>.
- Santos, G. C., Constantino, P., Schenker, M., e Rodrigues, L. B. (2020). O consumo de crack por mulheres: uma análise sobre os sentidos construídos por profissionais de consultórios na rua da cidade do Rio de Janeiro, Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, 25(10), 3795-3808. doi: 10.1590/1413-812320202510.05842019.
- Sarmento, C. S. (2017). *O gênero na rua: um estudo antropológico com as mulheres em situação de rua em Porto Alegre*. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de Antropologia, Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
- Sarmento, C. S. (2020). “Porque não podemos ser mães?": *tecnologias de governo, maternidade e mulheres com trajetória de rua*. (Dissertação Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Porto Alegre, Rio Grande do Sul).
- Vianna, A. de R. B. (2013). “Introdução: fazendo e desfazendo inquietudes no mundo dos direitos”. In A. Vianna, Adriana (Org.), *O fazer e o desfazer dos direitos: experiências etnográficas sobre política, administração e moralidades* (pp. 15-35). Rio de Janeiro: Epapers/-Laced.
- Vianna, A. de R. B. (2014). Etnografando documentos: uma antropóloga em meio a processos judiciais. In S. R. R. Castilho, A. C. de Souza e Lima e C. C. Teixeira. (Orgs). *Antropologia das práticas de poder: reflexões etnográficas entre burocratas, elites e corporações*. Rio de Janeiro: Contra Capa-Faperj.
- Vianna, A., e Lowenkron, L. (2017). O duplo fazer do gênero e do Estado: interconexões, materialidades e linguagens. *Cadernos Pagu*, (51). Disponível em <https://www.scielo.br/j/cpa/a/pWRzSNMsG4zD8LRqXhBVksk/?format=pdf&lang=pt>.